



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE**  
**ABOGADO**

“TRATAMIENTO PREFERENTE Y ESPECIALIZADO PARA LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD,  
UN MANDATO CONSTITUCIONAL”

**JORGE VINICIO FERNÁNDEZ YÉPEZ**

**DIRECTOR: RAMIRO ÁVILA SANTAMARÍA**

**QUITO, MAYO 2015**

Quito, 11 de enero de 2015

Señor Doctor  
Santiago Guarderas  
Decano Facultad de Jurisprudencia  
Presente.-

**Ref. informe disertación  
Jorge Vinicio Fernández Yépez**


Señor Decano,

En relación al encargo de dirigir la disertación de **Jorge Vinicio Fernández Yépez**, titulada "Tratamiento preferente y especializado para las personas con discapacidad en la ejecución de penas privativas de libertad, un mandato constitucional", expreso:

1. La disertación trata un tema importante para entender de mejor manera el sistema penitenciario, con enfoque en una población que no ha merecido atención académica.
2. En la metodología, la disertación se basa, y esto es lo original, en estudios empíricos cualitativos.
3. En el contenido el disertante hace una análisis importante sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina relevante, y con ese aparatage teórico analiza casos concretos, actuales y reales de población carcelaria ecuatoriana.
4. En lo formal, cumple con los requisitos propios de un trabajo académico. Además, está bien escrita.
5. La bibliografía es actual y pertinente.

Por todas estas razones, considero que la disertación merece la calificación de 10/10 (diez sobre diez).

Le saludo cordialmente,



Ramiro Avila Santamaría



Quito, 06 de febrero de 2015

Señor doctor

Manuel Jiménez Moreano

Secretario de la Facultad

Presente.-

De mi consideración:

Por la presente reciba un cordial saludo y a la vez en relación al oficio 012-SJG-15 del 26 de enero del 2015 en el que se me ha solicitado un pronunciamiento sobre el aspecto cualitativo y calificación a la Disertación de Abogacía titulada: "TRATAMIENTO PREFERENTE Y ESPECIALIZADO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, UN MANDATO CONSTITUCIONAL " elaborada por el señor Jorge Vinicio Fernández Yépez, previo a la obtención del título de Abogado, al respecto manifiesto:

**SOBRE EL ASPECTO CUALITATIVO:**

La Disertación revela un claro dominio del disertante sobre la materia en los aspectos relativos al entendimiento de la problemática que plantea la discapacidad así como los derechos de los y las PCD en juego en un régimen de vulneración de derechos humanos que sufren las personas privadas de la libertad (PPL).

El marco teórico y el orden seguido en la investigación demuestran como de forma lógica y coherente se aborda un tema de tantas aristas, que abordado en debida forma, lleva a establecer conclusiones y recomendaciones acordes a la investigación realizada.

La redacción del texto es impecable y no redundante, lo que hace que su lectura sea sugerente y reveladora de una problemática cuya atención por parte del Estado resulta inexcusable.

**SOBRE LA CALIFICACIÓN:**

La calificación sobre 10 es: **DIEZ (10)**

Atentamente,



Dr. Cristian Zambrano Ruilova

DOCENTE DE LA FACULTAD



ANTONIO QUEVEDO (1900 - 1987)  
ALEJANDRO PONCE Y CARBO (1918 - 1988)  
JUAN M. QUEVEDO  
ALEJANDRO PONCE MARTINEZ  
ALFREDO GALLEGOS BANDERAS  
ANTONIO MARTINEZ BORRERO  
ROQUE ALBUJA IZURIETA  
SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO  
ERNESTO GUARDERAS IZQUIERDO  
ALEJANDRO PONCE VILLACIS  
LUIS PONCE PALACIOS  
MONSERRAT BARRENO BRAVO  
ANTONIO MARTINEZ MONTESINOS  
SANTIAGO JARA REYES  
PABLO GONZALEZ FERNANDEZ  
RICARDO FERNANDEZ DE CORDOVA  
LOURDES CUESTA ORELLANA  
MARCO AVILA RODAS  
AGUSTIN SALAZAR CORDOVA  
CRISTINA PONCE VILLACIS  
VALERIA DUEÑAS MARTINEZ DE LA VEGA  
PEDRO LEIVA GALLEGOS  
RODRIGO SALGADO VALDEZ  
MARÍA DANIELA ROMÁN AGUINAGA

## QUEVEDO & PONCE

### ESTUDIO JURIDICO

OFICINA PRINCIPAL  
TORRE 1492 AV. 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN 16TO. PISO  
APARTADO: 17-01-600  
TELÉFONOS: 593 2 2986-570  
FAX: 593 2 2986-580  
QUITO - ECUADOR

Web: [www.quevedo-ponce.com](http://www.quevedo-ponce.com)  
Correo E.: [quepon@quevedo-ponce.com](mailto:quepon@quevedo-ponce.com)

CASILLA JUDICIAL 572

GUAYAQUIL: VELEZ 220 Y CHIFF OF. 1003  
TELÉFONOS: 593 4 2534 634  
FAX: 593 4 2534 888  
CORREO E.: [quepongy@quevedo-ponce.com](mailto:quepongy@quevedo-ponce.com)

CUENCA: EDIF. CÁMARA DE INDUSTRIAS  
FLORENCIA ASTUDILLO Y  
ALFONSO CORDERO PISO 7

TELÉFONOS: 593 7 2880 705  
593 7 2880 825  
FAX: 593 7 2882 853  
CORREO E.: [queponcne@quevedo-ponce.com](mailto:queponcne@quevedo-ponce.com)

MANTA: AVENIDA 4. CALLE 7  
EDIF. TORRE CENTRO OF. 902

TELEFAX: 593 5 2624 222  
593 5 2624 972  
CORREO E.: [manta@quevedo-ponce.com](mailto:manta@quevedo-ponce.com)

MIRAVALLE: BERNABÉ LOVATO S23-49  
MIRAVALLE. CUMBAYÁ

TELÉFONOS: 593 2 2897 567  
593 2 2897 846  
FAX: 593 2 2897 567  
EXT. 206  
CORREO E.: [agustin.salazar@quevedo-ponce.net](mailto:agustin.salazar@quevedo-ponce.net)

IBARRA: OVIEDO 7-39 Y BOLÍVAR  
EDIF. MUTUALISTA IMBABURA OF. 703

TELEFAX: 593 6 2952 226  
CORREO E.: [pedro.leiva@quevedo-ponce.net](mailto:pedro.leiva@quevedo-ponce.net)

Quito, 9 de febrero de 2014.

Señor doctor  
Santiago Guarderas Izquierdo  
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
Ciudad.

Estimado señor Decano:

En relación con la disertación previa a la obtención del título de abogado, intitulada TRATAMIENTO PREFERENTE Y ESPECIALIZADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, UN MANDATO CONSTITUCIONAL, cuyo autor es el señor Jorge Vinicio Fernández Yépez, expreso:

He leído con satisfacción tal trabajo, que en mi criterio ha sido abordado con el debido fundamento jurídico y bibliográfico y una adecuada investigación, que empieza por analizar distintos modelos de discapacidad, desde la edad antigua hasta nuestros días a la luz de los derechos humanos, así como su aplicación en el Ecuador, pasando a tratar la imputabilidad penal de las personas con discapacidad según nuestra legislación penal, posteriormente sus derechos, así como cuestionamientos a la privación de libertad, sus límites y posibilidad de suspensión y el tratamiento preferente a su favor. El trabajo incluye una revisión de la situación de algunas personas con discapacidad que han sido privadas de libertad, cuyos derechos se han violado y una crítica a una supuesta rehabilitación social.

Por los méritos de la disertación, la califico con 10.

  
Dr. Roque Albuja Izurieta.

## **AGRADECIMIENTO**

*Las palabras no son suficientes para agradecer a quienes a lo largo de estos años, a veces siglos, me honraron con su amor y su amistad. Soy la persona de hoy porque en mi pasado tuve la fortuna de cruzar caminos con ustedes.*

*A mi Madre, por darme amor incondicional, creo que nada en mi vida tendría sentido sin ti.*

*A mi Padre, mi orgullo, por darme más de lo que merezco.*

*A mis Hermanos, por ser el balance en mis arrebatos.*

*A Gabriela, Tatiana y Abigaíl, por su amistad. Con ustedes inicié este viaje por el Derecho, y terminé descubriendo que lo más importante no está en los libros.*

*A David Cordero y todas las personas que hacen el Centro de DDHH de la PUCE, por enseñarme que el Derecho puede cambiar el rumbo del mundo.*

*A mi Director de Tesis, por ser un ejemplo de jurista.*

## ***DEDICATORIA***

*A Melissa, porque me enseñaste que la vida es más bella cuando dejas de caminar y empiezas a volar.*

*Y a Kathy, porque cuando miro al cielo sé que cada latido del corazón cuenta.*

## **ABSTRACT**

The Constitution of Ecuador recognizes the right to a special and preferential treatment for disabled people that have been condemned to prison in the Social Rehabilitation Centers throughout the nation. Giving a special treatment is the logic conclusion made by law as a reaction to the double vulnerability a disabled person lives while inside of a prison.

This work has the intention to verify if the rights of people with disabilities deprived of freedom, including the special and preferential treatment, are fully exercised by them when living in a Social Rehabilitation Center.

In order to achieve its aim, this investigation will take law out of the books by using real life experiences of people with disabilities currently deprived of freedom. The testimonies of the people will be examined under the light of hard law, soft law, local law and doctrine that constitute the legal body of the rights of people with disabilities.

Once the Social Rehabilitation Centers have been decoded as establishments where People with Disabilities cannot but suffer systematical violations of their fundamentals rights to inter alia integrity, accessibility, legal personality, medical attention and independent living, this study will lead to the conclusion that deprivation of freedom lacks of effectiveness.

Finally this work will provide with alternatives to the deprivation of freedom as a rather more human and effective penalty taking into account the theory of criminal law guarantism.

## ABSTRACTO

La Constitución del Ecuador reconoce el derecho al tratamiento preferente y especializado para las personas con discapacidad privadas de libertad. Otorgar tratamiento especial es la reacción lógica que hace el derecho frente a la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad en los Centros de Rehabilitación Social.

Este trabajo tiene la intención de verificar si los derechos de las personas con discapacidad privadas de libertad, incluyendo el derecho al tratamiento preferente y especializado, son ejercidos efectivamente dentro de los sistema penitenciario.

Para conseguir dicho objetivo, en esta investigación se utilizan las experiencias de vida de personas con discapacidad que actualmente se encuentran privadas de la libertad. Los testimonios de las personas entrevistadas se examinan bajo la luz del *hard law*, *soft law*, derecho local y doctrina que constituyen el *corpus iuris* de los derechos de las personas con discapacidad.

Toda vez que se determine que los Centros de Rehabilitación Social son establecimientos en los que las Personas con Discapacidad sufren violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales a, inter alia, la integridad física y psicológica, accesibilidad, personalidad jurídica, atención médica y vida independiente, este estudio concluirá que la privación de la libertad no cumple con su fin rehabilitador y por lo tanto no es efectiva.

Finalmente este trabajo provee con alternativas a la privación de la libertad como medidas punitivas más humanas y efectivas, tomando en cuenta la teoría del garantismo penal.



## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>X</b>
<b>CAPITULO I. ANTECEDENTES Y ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA DISCAPACIDAD .....</b>	<b>1</b>
1.1. Los diferentes modelos de tratamiento de la discapacidad en la historia humana. ....	1
1.1.1. <i>El modelo de la prescindencia, la edad antigua.</i> .....	1
1.1.2. <i>El modelo rehabilitador, la edad contemporánea.</i> .....	3
1.1.3. <i>El modelo social y el movimiento de vida independiente: cambio de paradigma en la postmodernidad.</i> .....	4
1.1.3.1 <i>El Movimiento de vida independiente como una nueva lucha social.</i> .....	5
1.2. El tratamiento jurídico de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. ....	7
1.3. El tratamiento estatal de la Discapacidad en el Ecuador. ....	11
1.4. Definición de la discapacidad y lenguaje discriminatorio .....	14
1.4.1. <i>Definiciones en el Derecho Positivo</i> .....	15
1.5. Tipos de Discapacidad.....	21
1.6. La imputabilidad de las personas con discapacidad por delitos sancionados con privación de la libertad .....	23
<b>CAPITULO II. LA REHABILITACIÓN SOCIAL Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....</b>	<b>25</b>
2.1. Aproximación conceptual a la Rehabilitación Social desde el Garantismo Penal.....	27
2.1.1. <i>Definición de la privación de la libertad.</i> .....	27
2.1.2. <i>¿Por qué castigar con la privación de la libertad? Fundamentos de la pena y crítica a la rehabilitación social.</i> .....	28
2.1.3. <i>El Garantismo Penal y la Rehabilitación Social.</i> .....	30
2.2. La situación de vulnerabilidad y los derechos de las personas privadas de libertad. ....	32
2.2.1. <i>Los Derechos que se suspenden y limitan en la privación de la libertad.</i> 33	
2.2.2. <i>Los derechos que no se pueden suspender o limitar en la privación de la libertad (Núcleo duro de los derechos humanos)</i> .....	35
2.2.3. <i>Los Derechos específicos de las Personas Privadas de Libertad.</i> .....	36

2.2.4. La igualdad y no discriminación como fundamento del tratamiento preferente y especializado de las personas con discapacidad privadas de libertad.....	37
2.3. Voces de la discapacidad, los derechos vs. la realidad. ....	43
2.3.1. El caso de Christian Andrés García Mendoza. ....	43
2.3.1.1. Violación del Derecho a la Integridad Personal .....	45
2.3.1.2. Violación del Derecho a la Vida Independiente. ....	47
2.3.2. El Caso de Abraham Álvarez Reyes.....	49
2.3.2.1. La situación de Abraham Álvarez en el Centro de Rehabilitación Social #1, Ex Penal García Moreno .....	50
2.3.2.1.1. Omisión de las condiciones mínimas de Existencia en el CRS #1 (Ex Penal García Moreno) y la prohibición de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. ....	51
2.3.2.2. El traslado de los privados de la libertad del Ex Penal García Moreno al CRS Regional Cotopaxi.....	56
2.3.2.3. La situación de Abraham Álvarez en el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi. ....	57
2.3.2.3.1. Omisión de las condiciones mínimas de Existencia en el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, una situación de regresividad de derechos.....	59
2.3.3. El Caso de Pedro Nicolás Valero Rivas.....	60
2.3.3.1. Violación del Derecho a la Rehabilitación Física .....	61
2.3.3.2. Violación del Derecho a la Igualdad y No Discriminación. ....	62
2.3.4. El Caso de Wilson Reinaldo Carbo Góngora.....	63
2.3.4.1. Violación del Derecho a la Accesibilidad .....	63
2.3.4.2 Violación del Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. ....	66
2.4. La exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. ....	68
2.4.1. La exigibilidad desde las normas.....	70
2.4.2. La exigibilidad judicial.....	72
2.4.3. La exigibilidad política, las políticas públicas. ....	73
2.5. Las Penas Alternativas a la Privación de la Libertad, una respuesta a la Rehabilitación Social que no rehabilita. ....	75
<b>CAPITULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>79</b>
<b>IV. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>84</b>
A) DOCTRINA .....	84

B)	JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL:.....	87
C)	RESOLUCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES: .....	89
D)	TRATADOS INTERNACIONALES:.....	90
E)	LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS:.....	91
F)	DECISIONES JUDICIALES NACIONALES .....	91
G)	DECISIONES JUDICIALES DE DERECHO COMPARADO .....	91
H)	LEGISLACIÓN COMPARADA: .....	92
I)	PÁGINAS WEB: .....	92
<b>V.</b>	<b>ANEXOS.....</b>	<b>94</b>

## **Abreviaciones**

Centro de Rehabilitación Social.....	<b>CRS</b>
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías.....	<b>CIDDM</b>
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	<b>CIDH o “la Comisión”</b>
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.....	<b>Comité DPD</b>
Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades.....	<b>CONADIS</b>
Convención Americana sobre Derechos Humanos.....	<b>CADH</b>
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra Las Personas con Discapacidad.....	<b>CIEFDPD</b>
Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.....	<b>CIDPD o CDPD</b>
Corte Europea de Derechos Humanos.....	<b>CEDH</b>
Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	<b>Corte IDH o “La Corte”</b>
Instituto Ecuatoriano de Normalización.....	<b>INEN</b>
Instituto Nacional de Estadística y Censación.....	<b>INEC</b>
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros, Travestis Intersexuales.....	<b>LGBTI</b>
Ley Orgánica de Discapacidades.....	<b>LOD</b>
Organización de las Naciones Unidas.....	<b>ONU</b>
Organización de los Estados Americanos.....	<b>OEA</b>
Organización Mundial de la Salud.....	<b>OMS</b>
Persona con Discapacidad.....	<b>PCD</b>
Persona Privada de la Libertad.....	<b>PPL</b>
Rehabilitación Social.....	<b>RS</b>



Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.....	<b>SIPDH</b>
United Nations.....	<b>UN</b>

## INTRODUCCIÓN

En el Ecuador existen 1'600.000 personas con algún tipo de discapacidad, número que corresponde al 13.2% del total de la población del país. Las personas con discapacidad viven una realidad diferente y limitada, al margen de la sociedad, privados de derechos como la educación, la salud o la familia; constituyen la minoría más numerosa y desfavorecida en todas las sociedades del mundo.

Paralelamente, los Centros de Rehabilitación Social no ofrecen las condiciones mínimas para que una persona privada de la libertad (por una sentencia emitida por un juez competente) pueda continuar ejerciendo sus derechos humanos, puesto que el hacinamiento, la falta de higiene, escasa asistencia médica y otros factores afectan a su integridad personal, salud física y mental, e incluso pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Así, si una persona privada de la libertad se encuentra en un escenario susceptible a la violación de sus derechos, la situación es incluso más grave cuando el condenado es una persona con discapacidad, pues está sujeto a un estado de doble vulnerabilidad. En un centro de rehabilitación social la discriminación y las barreras arquitectónicas se multiplican, la autonomía se divide.

Lo expuesto refleja una realidad preocupante, la cual no puede pasar desapercibida por el derecho, siendo este un instrumento de cambio que permite superar los conflictos y proteger los derechos de las personas vulnerables.

En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a un tratamiento *preferente y especializado* a las personas con discapacidad que se encuentran privadas de la libertad, dentro de los centros de rehabilitación social del país. Otorgar un tratamiento especial es producto de una conclusión lógica que se hace desde el derecho, frente a la situación de doble vulnerabilidad a la que una persona con discapacidad está sujeta dentro de una cárcel.

Por su parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha encargado de desarrollar el *corpus iuris* de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas privadas de la libertad a través de normas de *hard law*, *soft law*, jurisprudencia de tribunales Internacionales y doctrina de organismos internacionales. Todas estas normas deben ser

respetadas por los Estados y adaptadas a sus ordenamientos jurídicos como una de las medidas para garantizar el efectivo ejercicio de los Derechos Humanos.

Si bien es cierto que el reconocimiento nacional e internacional de los derechos de las personas con discapacidad y los privados de la libertad constituye una herramienta fundamental para asegurar la vida digna de estos grupos, también es necesario que todas estas normas aterricen sobre la realidad, de lo contrario carecen de efectividad.

La problemática de la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad privadas de libertad es justamente el núcleo de esta investigación, cuyo objetivo es verificar si las personas con discapacidad pueden ejercer materialmente sus derechos dentro de los Centros de Rehabilitación Social del país, o si en su defecto estos derechos son vulnerados.

Para lograr el objetivo planteado se utilizará en primer lugar el método inductivo de investigación, puesto que a partir de la recolección de información particular sobre la discapacidad y la privación de la libertad, se construirá la idea de la doble vulnerabilidad de las PCD en los Centros de Rehabilitación Social. Así mismo, se utilizará el método inductivo para demostrar que la privación de la libertad, como pena paradigmática del Derecho Penal, carece de efectividad y no responde a la corriente garantista.

En segundo lugar se utilizará el método empírico inductivo, ya que a partir de la observancia de hechos particulares se concluirá en la premisa general de que los Centros de Rehabilitación Social no permiten el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

En tercer lugar se hará uso del método jurídico de investigación denominado comparativo supra estatal, ya que los hechos de cada caso y el orden jurídico nacional se analizarán e interpretarán a la luz de los estándares internacionales de protección de PPL.

Para la obtención de los hechos se utilizará la entrevista como herramienta investigativa dirigida a cuatro personas. Una persona con discapacidad auditiva y visual parcial, dos personas con discapacidad física, y una persona con discapacidad visual total. Cabe anotar que para la realización de estas entrevistas fue necesario obtener permiso del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a cuya custodia están las PPL.

Los métodos expuestos se podrán verificar a lo largo de esta disertación que consta de tres capítulos:

En el primer capítulo se analizará la discapacidad desde la perspectiva teórica-histórica, a fin de entender a profundidad lo que significa ser una persona con discapacidad, intentando en última instancia esbozar una definición de la discapacidad adecuada a los derechos humanos.

El segundo capítulo se divide en dos partes, una teórica y una práctica. Para la parte teórica se analizará la privación de la libertad desde la mirada crítica del garantismo penal y la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad que ingresan a los Centros de Rehabilitación Social.

En la parte práctica se utilizarán los testimonios de las cuatro personas con discapacidad, para contrastarlos con las normas de *soft law*, *hard law*, jurisprudencia y doctrina, a fin de determinar si los hechos constituyen violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad privadas de libertad. Los testimonios se redactarán en primera persona para procurar la autenticidad de la experiencia en los CRS.

La argumentación de cada violación de derechos humanos se realizará de forma selectiva a cada uno de los casos, con la intención de no aglomerar información innecesaria. Esto quiere decir que, dependiendo de la evidencia fáctica suficiente se seleccionará que derecho es pertinente argumentar para cada caso. En este orden ideas, si un derecho se argumenta violado en el caso A, pero no en el caso B, esta decisión no excluye la posibilidad de que en el caso B también se pudiese argumentar la misma vulneración de A y aplicar los mismos estándares internacionales.

Con la finalidad de demostrar el mayor número de vulneraciones de derechos humanos, pero a la vez utilizar la información de forma selectiva y ser justos con cada testimonio presentado, se ha procurado argumentar dos derechos por cada uno de los casos reales: el derecho a la integridad física y a la vida independiente; el derecho a no sufrir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes aplicados a dos escenarios temporales diferentes; el derecho a la rehabilitación física y a la no discriminación; y finalmente la violación del derecho a la accesibilidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica.

Una vez que se hayan establecido las vulneraciones a los nombrados derechos, se explicará la forma en que estos podrían ser exigibles ante las autoridades estatales.

En el tercer capítulo se manifestarán las conclusiones que se hayan obtenido en el desarrollo de esta disertación, a la vez que se compartirán las recomendaciones que el Estado



Ecuatoriano podría adoptar para mejorar el tratamiento preferente y especializado de los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente, en la sección de anexos el lector podrá acceder a todos los respaldos de las entrevistas, tales como: las peticiones y autorizaciones del Ministerio de Justicia, los formularios de consentimiento informado firmados por cada uno de los entrevistados, el Diario de las entrevistas, e incluso el registro video grabado de la única entrevista en la que se permitió el uso de dispositivos electrónicos.

## CAPITULO I. ANTECEDENTES Y ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA DISCAPACIDAD

### 1.1. Los diferentes modelos de tratamiento de la discapacidad en la historia humana.

La discapacidad ha sido históricamente considerada como una tragedia, aquellas personas que vivían con una discapacidad eran (y siguen siendo) consideradas desventuradas, inútiles y anormales.<sup>1</sup> Desventuradas porque no pueden disfrutar de los beneficios de la sociedad como el resto de personas. Inútiles porque no aportan al trabajo y por lo tanto no generan bienes. Anormales porque constituyen una minoría que rompe con los esquemas sociales normalizados.<sup>2</sup> Representan todo lo que el mundo normal no desea: “la tragedia, la pérdida, lo oscuro y lo desconocido”.<sup>3</sup>

Las personas con discapacidad son el recordatorio de lo que el hombre “normal” teme: la imperfección humana. Esta es la base de la sociología del rechazo y la discriminación, la cual se repite a lo largo de la historia y se refleja en los diferentes modelos de tratamiento de la discapacidad,<sup>4</sup> que no son más que las formas en que la sociedad ha asumido el fenómeno de la discapacidad según los valores de cada época.<sup>5</sup>

#### *1.1.1. El modelo de la prescindencia, la edad antigua.*

Este modelo tiene un carácter místico. Entiende que las causas que dan origen a la discapacidad son de origen religioso, y asume a las personas con discapacidad como innecesarias para la sociedad.

---

<sup>1</sup>Cfr. Colin Barnes. “Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas con discapacidad en la sociedad occidental.” En Len Barton. Discapacidad y Sociedad. Madrid, Ediciones Morata, 1998. Pág. 62.

<sup>2</sup>Ibídem.

<sup>3</sup>Ibídem.

<sup>4</sup>Cfr. Colin Barnes. Óp. Cit. “Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas con discapacidad en la sociedad occidental.” En Len Barton. Discapacidad y Sociedad. Pág. 63.

<sup>5</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Navarra, Editorial Arazandi, 2007. Pág. 84.

Su prescindencia se basa en diferentes razones: no contribuyen a la comunidad, su vida no merece la pena ser vivida o simbolizan al mal, sea porque representan el enojo de los dioses griegos o un mensaje diabólico para los cristianos.<sup>6</sup>

Dentro del modelo de la prescindencia se distinguen dos sub-modelos que corresponden a diferentes épocas de la historia:

A) El sub-modelo eugenésico de la edad antigua<sup>7</sup>

En la mitología Griega, Hefesto es el único dios con defectos físicos. Nacido “cojo”, Zeus lo expulsa del Olimpo por no ajustarse a la perfección del resto de Dioses.<sup>8</sup> Su deficiencia merece la eliminación del cielo.

Fieles a su mitología, entre los antiguos griegos el rechazo a las personas con discapacidad llegaba a extremismos fatales, quienes nacían “diferentes” eran eliminados (esta es la esencia del modelo eugenésico). A fin de depurar la sociedad los niños que nacían con deficiencias eran asesinados post partum.<sup>9</sup>

B) El sub-modelo de la marginación en la Edad Media y Moderna.

Por influencia de la religión cristiana, a lo largo de la Edad Media y Contemporánea,<sup>10</sup> se empezó a entender a la discapacidad como un castigo del pecado. Sin embargo, dar muerte a otro ser humano estaba prohibido, y por lo tanto la limpieza no se practica. De esta forma, al coexistir con las personas “deficientes” se crea la costumbre de “cuidar a los enfermos y a los menos afortunados, bien mediante la limosna, bien mediante el cuidado directo”.<sup>11</sup>

Si bien las personas con discapacidad existían en la sociedad, la característica principal de este sub-modelo fue la exclusión de las mismas de las diferentes esferas sociales, y

---

<sup>6</sup> Ibídem.

<sup>7</sup> La edad antigua se refiere al período anterior al siglo V a.C. Cfr. Gloria M. Delgado de Cantú. El Mundo Moderno y el Mundo Contemporáneo. México D.F., Editorial Pearson Educación de México, Quinta Edición, 2005. Pág. 5.

<sup>8</sup> Cfr. José Carlos Bermejo Barrera. Los orígenes de la mitología griega. Madrid, Ediciones Akal, 1996. Pág. 102.

<sup>9</sup> Cfr. Colin Barnes. Óp. Cit. “Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas con discapacidad en la sociedad occidental.” En Len Barton. Discapacidad y Sociedad. Págs. 68-69.

<sup>10</sup> La Edad Media, comprendida entre el siglo V d.C. hasta mediados del siglo XV d.C., y la Edad Contemporánea, entre el siglo XV d.C. hasta el siglo XVIII d.C., corresponden al dominio del cristianismo. Cfr. Gloria M. Delgado de Cantú. Óp. Cit. El Mundo Moderno y el Mundo Contemporáneo. Pág. 5.

<sup>11</sup> Ibídem.

paralelamente a ello, el asistencialismo caritativo. La compasión y la caridad funcionaban como método para apaciguar la fe cristiana frente a la marginación.<sup>12</sup> Se argumenta que este sub-modelo tiene vigencia hasta la actualidad puesto que su elemento principal, la exclusión de las personas con discapacidad, persiste en nuestros tiempos.<sup>13</sup>

### *1.1.2. El modelo rehabilitador, la edad contemporánea.*

El modelo de la edad contemporánea<sup>14</sup> deja atrás cualquier misticismo entorno a la discapacidad, considera que las causas que ocasionan la discapacidad son en su totalidad de índole médico-científicas, es decir, la discapacidad es únicamente producto de una deficiencia física, psíquica o sensorial.<sup>15</sup> Para este tratamiento, las personas con discapacidad no son inútiles en tanto puedan ser rehabilitadas, es decir que, podrán reintegrarse a la sociedad en tanto que puedan volver a ser normales a través de la rehabilitación.<sup>16</sup>

Las manifestaciones del modelo rehabilitador surgen tras la experiencia de las guerras mundiales del siglo XX. Estados Unidos se convierte en uno de los países precursores en el establecimiento de medidas que permitían a los soldados con discapacidad reinsertarse en la vida social y laboral a través de la rehabilitación médica. El gobierno americano expide leyes como la Veterans Vocational Rehabilitation Act, de 1918 o la Fess-Smith Civilian Vocational Rehabilitation Act de 1920, que fueron los primeros ensayos de una política de reintegración asistencialista.<sup>17</sup> Puesto que Estados Unidos se convirtió en el nuevo líder mundial, este tipo de leyes serían repetidas por otros Estados del mundo gracias a su influencia.

---

<sup>12</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. Óp. Cit. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 86.

<sup>13</sup> Cfr. United Nations Human Rights Council. Final Report of the Special Rapporteur (Leandro Despouy) of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities about Human Rights and Disabled Persons. E/CN.4/Sub.2/1991/31. Párr. 3; Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Observación General 5, Personas con discapacidad. Aprobado en su 11vo período de sesiones, 1994. U.N. Doc. E/C.12/1994/13 (1994). Párr. 10.

<sup>14</sup> La edad contemporánea data del siglo XVIII d.C. hasta la actualidad. Cfr. Gloria M. Delgado de Cantú. Óp. Cit. El Mundo Moderno y el Mundo Contemporáneo. Pág. 5.

<sup>15</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. Óp. Cit. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 86.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Cfr. Fred Pelka. What We Have Done: An Oral History of the Disability Rights Movement. Amherst, University of Massachusetts Press, 2012. Pág. 15.



En un primer momento estas leyes sólo atendían a personas con discapacidad a causa de las guerras, más tarde el Estado pasaría a rehabilitar a toda persona independientemente del origen de su condición. Ahora, si bien este tratamiento tenía el fin último de curar, borrar la diferencia o anormalidad, y mantiene el paradigma de las personas con discapacidad como inferiores al estereotipo ideal del hombre, no se puede negar el avance que el mismo significó en su época. Gracias a éste se dan las primeras reacciones del Estado en atención a las discapacidades, aún si fueron asistencialistas, sirvieron para el reconocimiento de ciertos derechos para las personas con discapacidad, sea la educación especial o la salud para rehabilitar.<sup>18</sup>

### *1.1.3. El modelo social y el movimiento de vida independiente: cambio de paradigma en la postmodernidad.*

El modelo social representa una apreciación de la discapacidad que se distancia de los paradigmas normalizadores y asistencialistas. Se plantea por primera vez que, la discapacidad no es solamente producto de causas individuales como las deficiencias físicas, sino que sobre todo la discapacidad se genera por razones sociales.<sup>19</sup>

Las razones sociales existen puesto que la estructura de la sociedad no ofrece las condiciones necesarias para atender a las necesidades de las personas con discapacidad,<sup>20</sup> entonces, el problema no se halla en el individuo con discapacidad, sino en los límites de la sociedad misma.

Si antes se buscaba la rehabilitación del individuo para integrarlo a la sociedad, el modelo social propone una ruptura de ese arquetipo: la sociedad es quien debe ser rehabilitada con miras a que su diseño permita la satisfacción de las necesidades de quienes viven con una discapacidad, y de todos los demás también.<sup>21</sup>

Este modelo surge en la década de los 70 en Estados Unidos y el Reino Unido como efecto de las exigencias que las mismas personas con discapacidad reclaman a los Estados

---

<sup>18</sup> Ibídem.

<sup>19</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. Óp. Cit. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Págs. 86-88.

<sup>20</sup> Ibídem.

<sup>21</sup> Ibídem.

que solamente respondían con políticas asistencialistas y sanitarias<sup>22</sup> propias al modelo rehabilitador. Los activistas por la discapacidad y las personas con discapacidad enfocan su lucha sobre el impacto que las “razones sociales” (barreras físicas, discriminación, estereotipos culturales, entre otras) tienen sobre su condición de ciudadanos.<sup>23</sup> Al igual que los afro descendientes en los 50 y los LGBTI en la actualidad, las personas con discapacidad exigieron y exigen no ser ciudadanos de segunda clase.

Las nombradas razones sociales solamente podrán superarse si las mismas personas con discapacidad participan en el diseño de las políticas sociales y legislación que atienden sus necesidades especiales; y además, si son ellas mismas quienes pueden crear sus propios bienes y servicios más allá de la provisión de servicios sociales por parte del Estado.<sup>24</sup> En la idea de la participación de las personas con discapacidad como instrumento principal para superar las barreras sociales, se encuentra el vínculo entre el modelo social y el movimiento de vida independiente.

#### *1.1.3.1 El Movimiento de vida independiente como una nueva lucha social.*

El movimiento de vida independiente, concordante con el modelo social, se gestó con influencia de las luchas sociales de otros grupos históricamente discriminados como el de las mujeres en contra de los estándares patriarcales y el de los afrodescendientes en contra del racismo:

Tras la Revolución Francesa, los primeros movimientos feministas empiezan a gestar la igualdad política de las mujeres sobre las mismas premisas de *liberté, égalité et fraternité*, que ilógicamente se les negaban de facto.<sup>25</sup> En 1791 Olympe de Gouges, pionera de la revolución femenina, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana<sup>26</sup> en la que sostenía la igualdad de los dos sexos para participar en la vida pública, elegir y ser elegidos (Art. 60).

---

<sup>22</sup> *Ibíd.*

<sup>23</sup> *Ibíd.*

<sup>24</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. *Óp. Cit.* “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. *Teoría Sobre la Discapacidad*. Pág. 89.

<sup>25</sup> Cfr. Seminari d’Investigació Feminista (Castelló), Universitat Jaume I. *Dossiers Feministes, 2: Diosas y Vírgenes*. Castellón, Universitat Jaume I, 1999. Págs. 164-167.

<sup>26</sup> Cfr. Sophie Mousset. *Olympe de Gouges et les droits de la femme*. Paris, Éditions du Félin, 2003. Págs. 86-87.

Esa igualdad se tornó real a lo largo del siglo XX en el que la mayoría de los países del mundo occidental consagraron el voto de las mujeres.<sup>2728</sup> El género femenino se abrió camino en la esfera pública abogando por el voto igualitario, y al mismo tiempo sentaba las bases que permitirían el voto universal, el voto de todos los hombres y mujeres sin distinción relativa a su color de piel, su educación o propiedad.<sup>29</sup>

Tras esa victoria feminista se levanta un nuevo frente, la lucha de los afro descendientes por el reconocimiento de sus derechos civiles en las décadas de 1950-1960. Martin Luther King y su discurso de igualdad ciudadana se convierten en la bandera de las luchas sociales de todas las minorías discriminadas, incluyendo a las personas con discapacidad. En 1964 el congreso Americano publica la Civil Rights Act, la victoria jurídica del movimiento afro que más tarde sería la base para la creación de la Americans With Disabilities Act of 1990.<sup>30</sup>

En 1962 la Universidad de California en Berkeley admitió a Ed Roberts, padre del movimiento por la vida independiente,<sup>31</sup> dentro de su primer programa de residentes. Roberts tenía paralizadas sus extremidades, en su infancia enfermó de poliomielitis lo cual lo dejaría cuadripléjico de por vida. Pronto, otros estudiantes en las mismas condiciones de Ed fueron admitidos, fue este el comienzo del movimiento para vivir independientemente.<sup>32</sup>

La idea de autonomía e independencia traspasó las instituciones académicas hacia la esfera pública: El Congreso Americano aprobó en 1973 la Ley de Rehabilitación, en 1975 la Ley de Educación para todos los Niños Discapacitados (asegurando el acceso a la educación pública generalizada en la medida que sea posible para el propio niño), y en 1990, la Ley de

---

<sup>27</sup>Cfr. Seminarid'Investigació Feminista (Castelló), Universitat Jaume I. Óp. Cit. *Dossiers Feministes*, 2: Diosas y Vírgenes. Págs. 164-167; Cfr. Bernardo Mendoza. *El Sufragismo*. Internet: <http://www.iesmartilhumana.org/departaments/CSocials/Santi/PortalHistoria/BLOC2/Apunts/el%20sufragismo.pdf> Acceso: 18/07/2013.

<sup>28</sup>En el Ecuador y Latinoamérica la primera mujer en ejercer su derecho al voto fue Matilde Hidalgo de Procel, en 1924. Cfr. Diario Correo. *Matilde Hidalgo de Procel: Un Legado en la Provincia de El Oro*. Internet: <http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=26119> Acceso: 14/08/2013

<sup>29</sup>Cfr. Sophie Mousset. *Women's Rights and the French Revolution: A Biography of Olympe de Gouges*. New Jersey, Transaction Publishers, 2011. Pág.63.

<sup>30</sup>Cfr. Robert D. Dinerstein. *The Americans with Disabilities Act of 1990: Progeny of the Civil Rights Act of 1964*. En Internet: [http://www.americanbar.org/publications/human\\_rights\\_magazine\\_home/human\\_rights\\_vol31\\_2004/summer2004/irr\\_hr\\_summer04\\_disable.html](http://www.americanbar.org/publications/human_rights_magazine_home/human_rights_vol31_2004/summer2004/irr_hr_summer04_disable.html) Acceso: 14/08/2014

<sup>31</sup>Cfr. Fred Pelka. Óp. Cit. *What We Have Done: An Oral History of the Disability Rights Movement*. Pág. 113.

<sup>32</sup>Cfr. Fred Pelka. Óp. Cit. *What We Have Done: An Oral History of the Disability Rights Movement*. Pág. 113-117.

Norteamericanos Minusválidos (que ampliaba los derechos civiles de las personas con Discapacidad).<sup>33</sup>

Poco a poco alcanzar la igualdad y vivir en independencia se convierte en el discurso de todos los activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Nace una nueva lucha social que hasta el día de hoy aboga por los mismos fines.

## 1.2. El tratamiento jurídico de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos.

Desde los derechos humanos, el tratamiento jurídico de las personas con discapacidad gira entorno a tres conceptos básicos: la igualdad, la diferencia y la dignidad (piedra angular).

La igualdad es un concepto que no se entiende sino en relación al resto de personas. A diferencia de la libertad, que se ejerce de forma individual, la igualdad sólo se explica dentro de la asociación humana, “se es igual en relación a alguien más”.<sup>34</sup> La igualdad de la que aquí se habla se refiere al ejercicio de los derechos en las mismas condiciones que las demás personas independientemente, inter alia, de la discapacidad. Lo anterior es una condición sine qua non para la armonía de la humanidad y la existencia de la justicia.<sup>35</sup>

La diferencia es la otra cara de la moneda de la igualdad, la una no puede existir sin la otra, son una dicotomía indefectible. La igualdad es la cara “falsa” porque no describe una realidad sino un ideal (es principio de derecho),<sup>36</sup> lo real es que los hombres somos por naturaleza diferentes los unos de otros. Estas diferencias pueden ser asumidas en cuatro modelos:<sup>37</sup>

- La indiferencia jurídica de las diferencias: Se ignoran las diferencias, no se valorizan ni se desvalorizan, tampoco se protegen o se violan. Este modelo es propio del estado de naturaleza de Hobbes, lo que prima entre los diferentes es la fuerza y no los derechos.

---

<sup>34</sup> Cfr. Norberto Bobbio. Igualdad y Libertad. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1993. Págs. 54-59

<sup>35</sup> *Ibíd.*

<sup>36</sup> *Ibíd.*

<sup>37</sup> Cfr. Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías: La Ley del más débil. Madrid, Editorial Trotta, Cuarta Edición, 2004. Págs. 73-76



- La diferenciación jurídica de las diferencias: Se valorizan algunas diferencias por encima de otras, esta jerarquización resulta en la discriminación de mujeres, afro descendientes, PCD, homosexuales, etc.
- Homologación jurídica de las diferencias: Es una derivación del modelo anterior, pero en este se busca eliminar toda diferencia que no se asimile al modelo “normal” de la identidad humana. Genera una ficción en la que todos somos iguales en tanto cumplamos con cierto modelo. Este modelo es el que se asume en el tratamiento eugenésico y rehabilitador de las discapacidad, ya que los dos buscan eliminar la discapacidad por no enmarcarse dentro del ideal del ser humano.
- La valorización jurídica de las diferencias: se basa en el principio normativo de la igualdad en los derechos fundamentales y sus garantías, es decir igualdad ante la ley de todos los hombres en cuanto a la titularidad y en ejercicio de los derechos. Pero, al mismo tiempo este tratamiento valoriza las diferencias de tal forma que permite su libre desarrollo y afirmación, sin desvalorizar a ninguna otra. Cada persona tiene derecho al respeto y garantía de su propia identidad, las garantías permiten igualdad no solamente formal sino también material.

La valorización jurídica es el modelo que la teoría de los derechos humanos utiliza para aceptar las diferencias y dar trato legítimo desigual a las personas con discapacidad a fin de que alcancen la igualdad de oportunidades.<sup>38</sup>

Ahora, la dignidad es la piedra angular a través de la cual los derechos humanos fundan el tratamiento jurídico de las PCD, el cual está dividido en dos momentos: la generalización y la especificación.<sup>39</sup>

La **generalización** consiste en reconocer la dignidad humana de las personas con discapacidad, y con ello el ejercicio de todos los derechos humanos propios a la dignidad.<sup>40</sup> Si todos somos iguales en dignidad, todos somos iguales en derechos.

---

<sup>38</sup> Cfr. Rafael de Asís, Ignacio Campoy y María de los Ángeles Bengoechea. Óp. Cit. “Derecho a la Igualdad y a la Diferencia: Análisis de los Principios de no discriminación, diversidad y acción positiva.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 133

<sup>39</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. Óp. Cit. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 83.

A partir la dignidad se edifica la premisa según la cual las personas con discapacidad cumplen un papel en la sociedad que debe ser entendido en absoluta independencia a su utilidad social y económica.<sup>41</sup> Esta idea es influenciada por el postulado kantiano en el que el hombre es un fin en sí mismo, y no un medio para los demás.<sup>42</sup>

Al ser cada uno de los seres humanos un fin en sí mismo, cada persona es igualmente digna, sin relevancia de su aporte a la comunidad (como medio para conseguir los fines de esta).<sup>43</sup>

Se entiende que la dignidad de la persona existe por el sólo hecho de ser un individuo humano con ciertas características: Capacidad de razonar, capacidad de sentir y capacidad de comunicarse. Pero, estas características pueden existir en cada individuo en diversos grados, por ello el modelo de ser humano digno no es uno sólo sino es diverso,<sup>44</sup> lo contrario implicaría discriminación hacia toda persona que no cumpla con el modelo de perfección racional que se idealiza en el hombre.

Siguiendo este orden de ideas, se entiende que la dignidad es universal a la condición humana, puesto que el examen de las características no debe limitar la consideración del sujeto digno.<sup>45</sup>

La universalidad o generalización en la dignidad y derechos se refleja en el ámbito jurídico a través de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, en 1948 se crea uno de los instrumentos más importantes del Derecho Internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos.<sup>46</sup> La Declaración establece

---

<sup>40</sup> *Ibídem.*

<sup>41</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. *Óp. Cit.* “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. *Teoría Sobre la Discapacidad*. Pág. 99.

<sup>42</sup> Immanuel Kant. *Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres*. (Traducción de Manuel García Morente). San Juan, Pedro M. Rosario Barbosa Editor, 2007. Pág. 41

<sup>43</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. *Óp. Cit.* “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. *Teoría Sobre la Discapacidad*. Pág. 100.

<sup>44</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. *Óp. Cit.* “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. *Teoría Sobre la Discapacidad*. Pág. 99.

<sup>45</sup> *Ibídem.*

<sup>46</sup> La Declaración Universal, pese a ser un instrumento de soft law no vinculante para los Estados, tiene una relevancia jurídica innegable. Su importancia se refleja no solamente en el hecho de ser reconocida por los instrumentos de hard law posteriores a su creación (ver preámbulo de, inter alia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de

que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados (en ella), sin distinción alguna de raza, color, sexo, (...) o cualquier otra condición”<sup>47</sup>. Entiéndase a las PCD protegidas por la fórmula “cualquier otra condición”.<sup>48</sup>

Por otro lado, la **especificación** consiste en garantizar medios concretos que permitan proteger la dignidad humana, por ejemplo a través del goce de los derechos en igualdad de condiciones en relación a las demás personas. Para lograr la especificación se utilizan herramientas jurídicas basadas en la valoración jurídica de las diferencias de la que se habló en este acápite, tales como la discriminación positiva, los ajustes razonables de los derechos,<sup>49</sup> y el establecimiento de derechos específicos a la condición de discapacidad, valga la redundancia. El objetivo de todas estas medidas es que las personas con discapacidad puedan tener igualdad de oportunidades en el diseño y desarrollo de sus propias vidas.<sup>50</sup>

La especificación ha sido desarrollada en el mundo jurídico internacional desde la década de los 70, cuando la ONU empieza a tomar acción en la afirmación de los derechos de las personas con Discapacidad: el 20 de Diciembre de 1971 se proclama la “Declaración de los Derechos del Retrasado Mental”<sup>51</sup>; en 1973 se realiza en Ginebra la “Reunión interinstitucional especial sobre rehabilitación de las personas con discapacidad”<sup>52</sup>; en 1975 la Asamblea General aprueba la “Declaración de los de los derechos de los Impedidos”; se proclama 1981 como el “Año Internacional de los Impedidos”, y la década entre 1983-1992 como “el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos”, en miras de aplicar un

---

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.) sino que además se manifiesta en el desarrollo del Corpus Iuris de los derechos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General N°5 (Párr. 5), utiliza a la Declaración Universal como guía hermenéutica para explicar que las personas con discapacidad son titulares de la gama de derechos reconocidos en el PIDESC, puesto que como seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derechos, según los términos de la Declaración.

<sup>47</sup>ONU. Declaración Universal de Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. U.N. Doc. A/810 at 71 (1948).

<sup>48</sup> Cfr. Christian Courtis. “Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Sistema de Naciones Unidas.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Navarra, Editorial Arazandi, 2007. Pág. 283.

<sup>49</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. Óp. Cit. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 83-84.

<sup>50</sup> Ibídem.

<sup>51</sup>ONU. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Proclamada por la Asamblea General de la ONU el 20 de Diciembre de 1971. UN. DOC AG.26/2856.

<sup>52</sup>Convocada por las Naciones Unidas y celebrada del 26 y el 28 de Noviembre de 1973, en Ginebra. Asistieron representantes de los diversos Organismos de Naciones Unidas como PNUD, OACDH, ACNUR, también la OIT, OMS, etc.

programa de acción mundial para el respeto, y la promoción de los derechos de las personas con Discapacidad.<sup>53</sup>

Finalmente, como cúspide de todos los instrumentos internacionales específicos sobre la condición de discapacidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el 13 de Diciembre de 2006 la “Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

### 1.3. El tratamiento estatal de la Discapacidad en el Ecuador.

En el Ecuador las primeras formas de tratamiento de la discapacidad adoptaron el modelo rehabilitador y provinieron de entidades privadas conformadas por los familiares de las PCD y asociaciones privadas de mediados del siglo XX. Sus acciones se caracterizaban por ser asistencialistas.<sup>54</sup>

Sólo hasta la década de los 70 el Estado ecuatoriano empezó a tomar acciones importantes en atención a las PCD en los campos de la salud, educación, trabajo y bienestar social.<sup>55</sup> La iniciativa estatal surge en parte como producto de los reclamos de las organizaciones sociales de familiares de PCD,<sup>56</sup> y fundamentalmente debido a la influencia internacional que progresivamente creaba conciencia en cada país, por ejemplo, las Naciones Unidas cooperaron con los Estados dando entrenamiento en la rehabilitación de las discapacidades, la asistencia social y los derechos humanos,<sup>57</sup> en el marco de declaraciones de derechos de PCD como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, Declaración de los Derechos de los Impedidos<sup>58</sup> y el Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad.<sup>59</sup>

---

<sup>53</sup> Naciones Unidas. Historia de la discapacidad y las Naciones Unidas. Internet: <http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/dis50y50.htm> Acceso: 25/08/2012

<sup>54</sup> Cfr. Ramiro Cazar Flores. Derechos y Discapacidad: De Las Palabras a los Hechos. Quito, PPL Impresores, 2003. Pág. 63.

<sup>55</sup> *Ibídem*.

<sup>56</sup> *Ibídem*.

<sup>57</sup> Cfr. Christian Courtis. *Óp.Cit.* “Los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Sistema de las Naciones Unidas.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 278.

<sup>58</sup> ONU. Declaración de los Derechos de los Impedidos. Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975.

<sup>59</sup> ONU. Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 37mo período de sesiones, por resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982.

Las aproximaciones estatales ecuatorianas a favor de las PCD se dieron a través de legislación y de políticas públicas. En 1977 se expide la Ley General de Educación, la cual incluyó a la educación especial como una responsabilidad del Estado;<sup>60</sup> en 1982 se promulga la Ley de Protección del Minusválido, que contenía disposiciones para prevenir la discapacidad y atender a las PCD;<sup>61</sup> finalmente en 1992 se publica la Ley Sobre Discapacidades<sup>62</sup> (reformada en 2001<sup>63</sup>), que sería la norma rectora en la materia hasta la creación de la LOD en 2012.

La creación legislativa vino acompañada de políticas públicas coordinadas a través de un ente estatal. La Ley de Protección del Minusválido de 1982 encargó al Ministerio de Bienestar Social la rectoría institucional de todo lo relativo a las PCD.<sup>64</sup> Luego, la magnitud de la problemática de las necesidades de la discapacidad llevó a que en 1991 se publique el primer Plan Nacional de Discapacidades,<sup>65</sup> y a que se cree el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) como órgano específico y especializado para el tratamiento de las PCD.<sup>66</sup>

Según la LOD, el CONADIS, siglas que en la actualidad se refieren al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades<sup>67</sup> es el órgano encargado de la “formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas implementadas por las funciones del Estado y las instituciones de los sectores público y privado, para la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

---

<sup>60</sup> Cfr. Ramiro Cazar Flores. Óp. Cit. Derechos y Discapacidad: De Las Palabras a los Hechos. Pág. 63.

<sup>61</sup> *Ibídem*.

<sup>62</sup> Ley Sobre Discapacidades N° 180. Publicada en Registro Oficial Número 996 del 10 de agosto 1992.

<sup>63</sup> Ley Reformatoria a la Ley Sobre Discapacidades. Publicada en Registro Oficial Número 301, de 6 de Abril de 2001.

<sup>64</sup> Cfr. Ramiro Cazar Flores. Óp. Cit. Derechos y Discapacidad: De Las Palabras a los Hechos. Pág. 63.

<sup>65</sup> Cfr. Ramiro Cazar Flores. Óp. Cit. Derechos y Discapacidad: De Las Palabras a los Hechos. Pág. 65.

<sup>66</sup> El CONADIS fue creado con la ley Sobre Discapacidad en 1992: Art. 7.- “*Créase con sede en la ciudad de Quito el Consejo nacional de Discapacidades, como persona jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y presupuesto especial*”. Ley Sobre Discapacidades N° 180. Publicada en Registro Oficial Número 996 del 10 de agosto 1992.

<sup>67</sup> Consejo Nacionalidad de Igualdad de Discapacidades. Adoptó este nombre con la publicación de la Ley Orgánica de Discapacidades en Septiembre de 2012. Según la disposición transitoria segunda de la LOD, el Consejo Nacional de Discapacidades, creado por la Ley Sobre Discapacidades N° 180 en 1992, adopta esta nueva denominación.

establecidos en la Constitución de la República, los tratados, instrumentos internacionales y la ley”.<sup>68</sup>

Puesto que el CONADIS es el encargado de la formulación de las políticas públicas, en 2005 publicó el II Plan Nacional de Discapacidades. Este Plan constituye hasta la actualidad el instrumento primordial en política pública sobre discapacidades, desafortunadamente su contenido responde al modelo rehabilitador.

Por ejemplo, el entonces Presidente de la República Alfredo Palacios presentó el II Plan señalando que su objetivo principal es la prevención de las discapacidades puesto que evitar una discapacidad “representa un ahorro significativo a la economía nacional (y además) personas bien rehabilitadas cooperarán activamente (con el desarrollo del país)”.<sup>69</sup> Esta presentación puede ser criticada por denotar discriminación desde que considera que lo importante es eliminar a las PCD y que su utilidad para la sociedad se da en la medida en que sean rehabilitadas, es decir que el hombre es un medio para la sociedad y no un fin en sí mismo.

El II Plan reconoce la equiparación de oportunidades, accesibilidad, integración y participación de las PCD, pero a la vez se muestra de acuerdo con la “normalización” entendida como el “derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir de acuerdo con las pautas y condiciones comúnmente aceptadas en que se desenvuelve la vida de cualquier otra persona”.<sup>70</sup>

En conclusión, el tratamiento de las PCD en el Ecuador aún se guía por la visión de la discapacidad como una condición médica que debe curarse para que la persona pueda vivir dignamente, y no como una condición social de derechos humanos que exige cambios en el entorno para que este sea accesible universalmente y las persona pueda desenvolverse por sí misma desde sus capacidades en igualdad de condiciones con los demás.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ley Orgánica de Discapacidades. Art. 89.

<sup>69</sup> Cfr. CONADIS. II Plan Nacional de Discapacidades. Quito, Consejo Nacional de Discapacidades, 2005. Pág. 3.

<sup>70</sup> Cfr. CONADIS. Óp. Cit. II Plan Nacional de Discapacidades. Pág. 9

<sup>71</sup> No se debe dejar de mencionar la falta de concordancia entre el II Plan Nacional de Discapacidades y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. El Plan del Buen Vivir tiene como Objetivo II: *Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad*. Parte de este auspicio implica eliminar la discriminación en razón de la discapacidad y eliminar las barreras arquitectónicas. Cfr. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Quito, SENPLADES, 2013. Pág. 111-133.

## 1.4. Definición de la discapacidad y lenguaje discriminatorio

Las definiciones y términos que se han elaborado para referirse a la discapacidad se han visto influenciadas por los modelos de tratamiento anteriormente estudiados. Por ello, estas definiciones expresan formas evidentes de discriminación<sup>72</sup> de acuerdo a los valores de cada modelo.

Según la teoría lingüística, el lenguaje influye en “nuestra percepción de la realidad, condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo”;<sup>73</sup> de esta forma permite mantener invisibles las relaciones de dominación y marginación que existen en el *statu quo*.<sup>74</sup> Por ello, el apropiado uso del lenguaje al referirse a la discapacidad es una herramienta fundamental para la reivindicación de este grupo y la lucha contra la discriminación,<sup>75</sup> de la misma forma en que el lenguaje de género ha contribuido a deconstruir estereotipos y asimetrías entre hombres y mujeres.<sup>76</sup>

Términos como inválido, incapacitado, débil mental, minusválido, retrasado o subnormal,<sup>77</sup> aún utilizados en la sociedad actual, afirman que una persona con discapacidad vale menos<sup>78</sup> que alguien perteneciente a la llamada sociedad normal. Como consecuencia, en el pensamiento social persiste el estereotipo de que las PCD son anormales<sup>79</sup> y de menos valor.

---

<sup>72</sup>Cfrs. Len Barton. “Sociología y Discapacidad: Algunos temas nuevos.” En Len Barton. Discapacidad y Sociedad. Madrid, Ediciones Morata, 1998. Pág. 24.

<sup>73</sup>Cfr. Luis Salazar Carrión, Héctor Islas Azaïs, Estela Serret Bravo, Pedro Salazar Ugarte. Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género. México D.F., Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2007. Pág. 71.

<sup>74</sup> Cfr. Luis Salazar Carrión, Héctor Islas Azaïs, Estela Serret Bravo, Pedro Salazar Ugarte. Óp. Cit. Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género. Pág. 76.

<sup>75</sup>El término que se ha aceptado como políticamente correcto es “personas con discapacidad”, también “persona con capacidades especiales o diferentes”. Cfrs. Antonio Iáñez. “Cuerpo y Modernidad: El proceso de estigmatización en las personas con diversidad funcional física.” En Documentación Social (Revista). Identidad y Procesos de Cambio. Madrid, Editorial Caritas Españolas, 2008. Pág. 108

<sup>76</sup> Cfr. Luis Salazar Carrión, Héctor Islas Azaïs, Estela Serret Bravo, Pedro Salazar Ugarte. Óp. Cit. Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género. Pág. 84-86.

<sup>77</sup> Cfr. Luis Salazar Carrión, Héctor Islas Azaïs, Estela Serret Bravo, Pedro Salazar Ugarte. Óp. Cit. Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género. Pág. 69.

<sup>78</sup> Cfrs. Len Barton. “Sociología y Discapacidad: Algunos temas nuevos.” En Len Barton. Discapacidad y Sociedad. Madrid, Ediciones Morata, 1998. Pág. 24.

<sup>79</sup>Cfr. Colin Barnes. Óp. Cit. “Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas con discapacidad en la sociedad occidental.” En Len Barton. Discapacidad y Sociedad. Pág. 62.

Hoy por hoy la terminología que se ha aceptado como correcta incluye: persona con discapacidad/ capacidades especiales/ capacidades diferentes/ diversidad funcional.<sup>80</sup> Estos términos hacen énfasis en primer lugar en la condición de “persona”, y luego reconocen la condición de discapacidad sin desmerecer el valor del sujeto como ocurre en términos similares a minusválido.<sup>81</sup>

Ahora, a fin de esbozar una definición apropiada de la discapacidad, con terminología que no contenga cargas negativas, es necesario analizar las definiciones que desde la doctrina y el derecho positivo se han generado sobre la misma.

#### *1.4.1. Definiciones en el Derecho Positivo*

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante CDPD o “la Convención”,<sup>82</sup> de la cual el Ecuador es Estado parte y por lo tanto está obligado a asegurar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las PCD sin discriminación alguna,<sup>83</sup> define en su primer artículo que la categoría de personas con discapacidad incluye a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.<sup>84</sup>

Como se puede apreciar, la definición convencional está compuesta de dos elementos principales y un resultado: la situación individual de la persona (las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales); y la situación externa (la interacción con diversas barreras). De la interacción entre estos dos elementos se configura la discapacidad, que son los límites a la “participación plena y efectiva en la sociedad”.<sup>85</sup>

---

<sup>80</sup> Cfrs. Antonio Iáñez. Cuerpo y Modernidad: El proceso de estigmatización en las personas con diversidad funcional física. En Documentación Social (Revista). Identidad y Procesos de Cambio. Madrid, Editorial Caritas Españolas, 2008. Pág. 108

<sup>81</sup> Minusválido deriva de las voces latinas *minus* (menos) y *validus*(valor), es decir “de menos valor”. Cfr. Real Academia de la Lengua Española. Minusvalía Internet: <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=minusval%EDas> Acceso: 12/08/2014

<sup>82</sup> ONU. Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006. El Ecuador ratificó la Convención el 3 de Abril de 2008.

<sup>83</sup> Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 4.

<sup>84</sup> Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 1.

<sup>85</sup> *Ibidem*.



Al incluir la restricción a la participación social como la consecuencia determinante de la discapacidad, ocasionada por las barreras sociales, se entiende que la Convención ha utilizado como marco referencial al modelo social. Siendo así, los Estados parte deberían guiarse por el mismo modelo y la misma definición, en virtud de su obligación internacional de adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectiva la Convención (Art. 4. A.) y para derogar o modificar la legislación que sea discriminatoria (Art. 4.B.).

Por lo antedicho, cabe analizar la definición local a la luz del estándar convencional. Es pertinente anotar que la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) se promulgó en nuestro país como parte de las medidas estatales para hacer efectiva la Convención.<sup>86</sup> En Octubre de 2009 el Ecuador presentó su primer informe sobre la implementación de la CIDPD ante las Naciones Unidas,<sup>87</sup> en este reconocía que hasta ese momento las definiciones legales no eran apropiadas y por lo tanto iba a reformarlas.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Los Proyectos de Ley Orgánica de Discapacidades fueron puestos a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional por iniciativa del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y paralelamente por parte de la Asambleísta María Cristina Kronfle. Para su tratamiento en el pleno de la Asamblea se formó una Comisión Especializada que se encargó de unificar los dos proyectos y así tener un solo texto a ser discutido. Cfr. Comisión Especializada Ocasional Para las Personas con Discapacidad de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Informe Para Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades. Quito, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2012. Pág. 8.

El Proyecto presentado por la Presidencia de la República respondió a la voluntad política en materia de discapacidades auspiciada principalmente por la Vicepresidencia a cargo de Lenin Moreno, y como parte de las medidas necesarias para la adopción y ejercicio efectivo de la CIDPD. Dicho proyecto se estructuró conjuntamente entre la vicepresidencia, el CONADIS, y la OMS. Puesto que la OMS estuvo involucrada en su creación, la influencia de la CIF, instrumento rector de la OMS en cuanto a discapacidades, se manifestó en varias partes del proyecto incluyendo la definición de la discapacidad. Cfr. Federación Nacional de y para la Discapacidad del Ecuador. Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades.

Internet:  
<http://www.discapacidadesecuador.org/portal/images/stories/File/Ley%20organicadediscapacidad.pdf>  
Acceso: 09/03/2014

<sup>87</sup>De conformidad con el párrafo primero del artículo 35 de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, los Estados parte se obligan a presentar un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones convencionales, y sobre los progresos realizados al respecto, en el plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Convención. La CIDPD entró en vigor en 2007, siendo este el primer informe presentado por el Ecuador ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que forma parte del Sistema de Naciones Unidas y que fue creado por el art. 34 de la Convención para velar por el cumplimiento de la misma.

<sup>88</sup>Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe del Estado Ecuatoriano sobre la Implementación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo período de sesiones del 19 a 23 de octubre de 2009, Ginebra. CRDP/C/ECU/1. Párr.5.

Antes de la publicación de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), en septiembre del 2012, la norma que regía era la Ley Sobre Discapacidades.<sup>89</sup> Esta ley no contenía definición alguna de lo que era una discapacidad; para encontrar una definición legal se tenía que recurrir al Reglamento General a la Ley Sobre Discapacidades<sup>90</sup>, cuyo art. 3 decía:

“Para efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley y el reglamento, se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales [...] ve restringida en al menos un treinta por ciento [...] su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales”.

Como es evidente, el reglamento no rompía con el paradigma de “normalidad-anormalidad” al comparar a una persona con discapacidad con una anormalidad. Por lo tanto dicha definición constituía discriminación.

Tras el panorama descrito, y en coyuntura al informe ante las Naciones Unidas, la Presidencia de la República y la Asambleísta María Cristina Kronfle presentaron paralelamente dos iniciativas sobre una nueva ley de discapacidades, el proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades y el proyecto de Ley Orgánica de Defensa de los Derechos e Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. Las dos iniciativas fueron unificadas por la Comisión Especializada para su tratamiento uniforme en el pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto final, denominado Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), fue aprobado en segundo debate, el 26 de Junio de 2012.<sup>91</sup>

La LOD incluyó por primera vez una definición dentro de nuestro ordenamiento jurídico a través de una norma con rango de Ley Orgánica. Nuestra ley considera a una persona con discapacidad a “(...) toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y

---

<sup>89</sup> Ley Reformativa a la Ley Sobre Discapacidades. Publicada en Registro Oficial Número 301, de 6 de Abril de 2001.

<sup>90</sup> Reglamento General a la Ley Sobre Discapacidades. Publicado en registro Oficial N° 27 del 21 de Febrero de 2003.

<sup>91</sup> Cfr. Comisión Especializada Ocasional Para las Personas con Discapacidad de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Óp. Cit. Informe Para Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades. Pág. 8.

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento” (Art.6).<sup>92</sup>

La comparación entre la definición de la Convención con la incluida en la Ley permite sostener lo siguiente: En el esquema convencional la discapacidad es una consecuencia que se produce cuando la situación individual de la persona interactúa con las diversas barreras que hay en la sociedad (sean barreras físicas o barreras sociales como la discriminación), dicha consecuencia es básicamente una restricción a la participación de la persona en el mundo que lo rodea; por otro lado, en el esquema local la discapacidad es solamente la consecuencia de la situación individual de la persona.<sup>93</sup> Si bien dicha consecuencia es, al igual que en la CIDPD, una restricción para ejercer actividades en la vida diaria (entiéndase participación en la sociedad, como expone la Convención), en ningún momento la LOD reconoce a las barreras que existen en la sociedad como un elemento esencial de la configuración de la discapacidad.

Al no incluir a las barreras sociales para explicar la discapacidad, la LOD falla en acoplar su definición a aquella expuesta en la CIDPD y deja de lado el modelo social (que se distingue por anotar las barreras sociales como el elemento fundamental en la creación de la discapacidad).

Por lo expuesto, se puede considerar como aporte de la LOD el incluir una definición de la discapacidad en una norma orgánica, y el no comparar a la definición con una anormalidad. Sin embargo, esta definición no concuerda con el contenido de la CIDPD, y por lo tanto el Estado ecuatoriano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones para hacer efectiva la Convención y adaptar su legislación a la misma.

En esta investigación se propone la siguiente definición, en la cual se utiliza un lenguaje neutral y adopta al modelo social:

“El término persona con discapacidad incluye a aquellas con un funcionamiento diferente de las estructuras corporales y la psiquis, independientemente de su origen, que al interactuar con las barreras del entorno económico, social y cultural, afectan su

---

<sup>92</sup> Ley Orgánica de Discapacidades. Publicada en Registro Oficial Número 796 del 25 de Septiembre de 2012. Según su única Disposición final entró en vigencia la misma fecha de su publicación en el Registro Oficial.

<sup>93</sup> El art. 6 de la LOD dice literalmente que una persona con discapacidad es aquella que “*como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales*” ve restringida sus capacidades.

plena participación en la vida social e individual de forma autónoma, en igualdad de condiciones con las demás personas”.

Ahora, existe un elemento de la definición legal actual que merece especial análisis. Según el art. 6 de la LOD, la persona con discapacidad es aquella que “ve restringida permanentemente su capacidad (...) en la proporción que establezca el Reglamento”. Siendo así, por expresa remisión se debe acudir al reglamento para verificar el status jurídico de discapacidad en una persona. Cabe anotar que según la Disposición Derogatoria octava de la LOD, el reglamento debía ser creado en Diciembre de 2012 (90 días luego de la publicación de la Ley), sin embargo no fue publicado sino hasta un año después, el 17 de Diciembre de 2013.

El art. 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades<sup>94</sup> señala que, una persona con discapacidad es aquella que “ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al 40% de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional”. Entonces, en concordancia con la LOD, se debe tener una discapacidad igual o superior al 40% para hallarse protegido por los derechos establecidos en la misma.

La determinación del porcentaje de Discapacidad, y por lo tanto la calificación de la condición de discapacidad y emisión del carnet de discapacidad, se realiza a través de las Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria competente. Anteriormente el CONADIS se encargaba de la carnetización, pero esta competencia empezó a ejecutarse únicamente por el Ministerio de Salud desde el 20 de Mayo de 2013.<sup>95</sup>

El porcentaje y calificación de la discapacidad son determinadas por un equipo de profesionales competentes integrado por un médico, un psicólogo y un trabajador social,<sup>96</sup> quienes establecen el impacto de la discapacidad sobre la salud física y psicológica, y la capacidad para socializar e interactuar con el entorno.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Reglamento a Ley Orgánica de Discapacidades. Publicado en el Segundo Suplemento de Registro Oficial N° 145 de martes 17 de Diciembre de 2013.

<sup>95</sup> Cfr. Ministerio de Salud. Actualización de Datos de las Personas con Discapacidad. Internet: <http://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-datos-de-personas-con-discapacidad-se-amplia-hasta-el-30-de-julio/> Acceso: 12/03/2014.

<sup>96</sup> Ibídem.

<sup>97</sup> En entrevista realizada a Melissa Paredes Castrillón el 12/03/2014, la entrevistada supo manifestar que en su proceso de obtención del Carnet de Discapacidad tuvo que acudir a un Centro de Salud

Es importante anotar que la forma de calificación de la discapacidad por la que nuestro Estado ha optado sí reconoce la definición de discapacidad establecida en la Ley y la CIDPD, puesto que en el examen de determinación se toma en cuenta las barreras sociales que se generan debido a la discapacidad, por ejemplo, la forma en que se va a interactuar con el entorno de forma general. Sin embargo, el equipo competente nunca debería dejar de lado las implicaciones que la discapacidad tendrá sobre la persona en específico, es decir, el examen debería siempre individualizarse puesto que “la discapacidad de una persona se determina en función de esa persona”<sup>98</sup> y de la sociedad que la rodea. Por ejemplo, si una persona que tiene por profesión el atletismo sufre una discapacidad física en sus extremidades inferiores, la discapacidad afectará con gran impacto todo su plan de vida.

Ahora bien, el 40% de discapacidad que se requiere para acceder a los derechos y beneficios de las PCD según el Reglamento, es criticable desde el punto de vista jurídico. El artículo 6 del Reglamento General a la antigua Ley Sobre Discapacidades,<sup>99</sup> el cual se mantuvo vigente hasta la expedición del nuevo Reglamento, establecía un porcentaje de 30% para adquirir formalmente la calificación de PCD. La diferencia porcentual entre la norma derogada y el nuevo reglamento constituye una acción de carácter regresivo en menoscabo de los derechos de miles de PCD, que anteriormente podían acceder a los beneficios de la ley.<sup>100</sup>

La regresividad en los derechos es inconstitucional según el art. 11 numeral 8 de nuestra constitución, por lo que se puede concluir que el Reglamento adolece de inconstitucionalidad.<sup>101</sup>

---

autorizado, para que se validaran los documentos requeridos por la autoridad. Los documentos eran procesados por un médico, un psicólogo y una trabajadora social, cada uno llenaba un formulario con los resultados de los exámenes que realizaban. En este formulario establecían el porcentaje en que la discapacidad afectaba a su salud y a su interacción con el entorno físico y social.

<sup>98</sup>Alfredo Luna. Discapacidad, la polémica por el nuevo Reglamento. Internet: <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/discapacitados-la-polemica-el-nuevo-reglamento> Acceso: 12/22/2014.

<sup>99</sup> Reglamento General a la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades. Publicado en Registro Oficial N° 27, de 21 de Febrero de 2003.

<sup>100</sup> Se calcula que entre 60.000 y 80.000 PCD dejarían de estar protegidas por la LOD gracias a este cambio en el reglamento. Cfr. Alfredo Luna. Discapacidad, la polémica por el nuevo Reglamento. Internet: <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/discapacitados-la-polemica-el-nuevo-reglamento> Acceso: 12/10/2014.

<sup>101</sup> A la luz de este escenario, la Asambleísta Maria Cristina Kronfle presentó un proyecto de reforma a la LOD el 21 de enero de 2014 justamente para evitar que el Reglamento afecte a los derechos de las PCD de forma regresiva. Propone que el mismo art. 6 de la LOD establezca un porcentaje de 30% para adquirir la protección jurídica de PCD, y no se remita al reglamento para estos fines. El proyecto aún está en tramitación en la Asamblea. Cfr. María Cristina Kronfle (Asambleísta de la República del

### 1.5. Tipos de Discapacidad.

Hasta aquí se han repasado las definiciones de la discapacidad, ahora cabe analizar las diferentes discapacidades lo cual servirá para, más adelante, delimitar el ámbito de las personas con discapacidad sujeto de esta investigación.

Se debe señalar que esta división de las discapacidades se refiere solamente a uno de los componentes que configura la discapacidad: la situación individual de la persona, es decir, la condición de la persona desde la perspectiva del funcionamiento de las estructurales corporales y psíquicas. Según el modelo social, las situaciones individuales que se estudian en este apartado devienen en una discapacidad cuando interactúan con factores sociales, económicos y culturales.

Si se sigue la lógica del modelo social en estricto sentido, se debería entender que existe solamente un tipo de discapacidad: la discapacidad social. Sin embargo de que en esta investigación se ha entendido al modelo social como el más apropiado, también se reconoce que es prudente utilizar la condición individual para categorizar a la discapacidad con fines didácticos, sin dejar a un lado la importancia de los factores económicos, sociales y culturales en su configuración.

En primero lugar las discapacidades se pueden dividir en adquiridas o congénitas. Las discapacidades adquiridas consisten en la existencia de problemas (sea por pérdida o funcionamiento) sobre una estructura o función corporal, que se pueden presentar en cualquier momento del desarrollo de una persona a razón de causas como accidentes o enfermedades postnatales.<sup>102</sup> También existen discapacidades congénitas, son aquellas con las que una persona nace,<sup>103</sup> pueden ser ocasionadas por problemas genéticos o algunas dificultades durante el embarazo.

---

Ecuador). Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Quito, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2014. Pág. 4.

<sup>102</sup>Cfr. María Noel Míguez. Construcción Social de la Discapacidad. Montevideo, Ediciones Trilce, 2009. Pág. 52.

<sup>103</sup> La palabra congénito proviene del latín *congenitus*, compuesto por las voces latinas *cum* (con) y *genitus* (engendrado), por lo que etimológicamente significa “nacido con”. Cfr. Real Academia de la Lengua Española. Congénito. Internet: <http://lema.rae.es/drae/?val=cong%C3%A9nito> Acceso: 12/08/2014

En segundo lugar las discapacidades pueden clasificarse según en el funcionamiento de las estructuras corporales y psíquicas, lo cual se trata a continuación:<sup>104</sup>

Clasificación de las discapacidades desde la perspectiva del funcionamiento	
Discapacidad ocasionada por funcionamientos sensoriales diferentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discapacidad visual.</li> <li>• Discapacidad auditiva.</li> <li>• Discapacidad en la comunicación lingüística</li> </ul>
Discapacidad ocasionada por funcionamientos motrices (o físicos) diferentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discapacidad física en las extremidades inferiores.</li> <li>• Discapacidad física en las extremidades superiores.</li> <li>• Discapacidad física del tronco, cuello y/o cabeza.</li> </ul>
Discapacidad ocasionada por funcionamientos mentales diferentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discapacidad cognitiva o intelectual</li> <li>• Discapacidad psicosocial (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, trastornos mentales, etc.)</li> </ul>
Discapacidad ocasionada por funcionamientos diferentes múltiples	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combinación de varias discapacidades</li> </ul>

Figura 1. Clasificación de las Discapacidades desde la perspectiva del funcionamiento

Cada tipo de discapacidad genera una forma diferente de interactuar con las barreras del entorno económico, social y cultural,<sup>105</sup> por lo tanto, el derecho debería proponer una

<sup>104</sup>Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. Clasificación de Tipo de Discapacidad. Pág. 13-49. Internet: [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx) Acceso: 21/06/2013. El INEGI utiliza la palabra “deficiencia” para referirse a lo que aquí se ha denominado “funcionamientos diferentes”. En esta investigación se prefiere utilizar un lenguaje más neutral en el tratamiento de la discapacidad, por ello se ha optado por dicha denominación.

forma de tratamiento específico de cada discapacidad, sólo de esta forma se podrá evitar que la interacción discapacidad-sociedad afecte la participación autónoma en la vida social e individual de las PCD.

Una vez que se ha comprendido lo que es la discapacidad y los diferentes tipos de discapacidad, se debe contestar la siguiente interrogante ¿Pueden las personas con discapacidad ser condenadas a una pena privativa de la libertad? En el siguiente acápite se resolverá esta pregunta.

## 1.6. La imputabilidad de las personas con discapacidad por delitos sancionados con privación de la libertad

El artículo 14 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone la obligación a los estados de asegurar que estas personas “no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, y que cualquier privación de la libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad” (#1. B.). Esta norma internacional parte de la suposición de que una persona con discapacidad es perfectamente imputable de un acto ilícito tipificado como delito, y que además puede ser sancionada con pena privativa de libertad.

Pero ¿sobre qué personas con discapacidad se puede ejecutar una pena privativa de la libertad? Se debe acudir a la norma penal para resolver esta incógnita.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP)<sup>106</sup> señala:

“Art. 36.- Trastorno mental.- La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad.

La persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con

---

<sup>105</sup> Cfr. Rafael de Asís, Francisco Bariffi y Agustina Palacios. Óp. Cit. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Págs. 86-88.

<sup>106</sup> Código Orgánico Integral Penal. Publicado en Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de Febrero de 2014.



esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal”

El párrafo primero del art. 36 tiene por intención establecer la regla general de la inimputabilidad de las personas con trastorno mental absoluto, es decir aquellas que no pueden dirigir su conducta conforme a las exigencias del derecho gracias a un trastorno mental.<sup>107</sup> Lo que aquí corresponde es dilucidar qué es exactamente un trastorno mental y si se puede ubicar a algún tipo de discapacidad.

El cuerpo del código penal no ofrece un contenido sobre el trastorno mental, los informes presentados por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para los debates de aprobación del COIP tampoco profundizan,<sup>108</sup> corresponde entonces acudir a la experticia científica sobre los trastornos mentales para poder interpretar la norma de acuerdo al canon de interpretación literal.

Los trastornos mentales se entienden como enfermedades de la psiquis, pueden incluir a la esquizofrenia o demencia, paranoia, psicosis maniaco-depresiva, oligofrenia, epilepsia, demencia senil, entre otras. La esquizofrenia, la psicosis u otros trastornos de la psiquis se enmarcan dentro de la discapacidades psicosociales (Ver Figura 1), por lo que en principio estas personas con discapacidad son inimputables si es que se comprueba que su condición les impide comprender la ilicitud de su conducta, es decir, si se prueba que sufren un trastorno mental absoluto. El juez los debe declarar inimputables y no puede enviarlos a un Centro de Rehabilitación Social sino a un hospital psiquiátrico (que es la medida de seguridad contemplada en el art.76 del COIP).

Por otro lado, el segundo párrafo del art. 36<sup>109</sup> se refiere al trastorno mental relativo,<sup>110</sup> el cual consiste en la capacidad disminuida (no absoluta) de entender la ilicitud de la conducta, por la cual la persona si es imputable pero se atenúa la pena en un tercio.

---

<sup>107</sup> Cfr. Ernesto Albán Gómez. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano: Parte General. Quito, Ediciones Legales, 4ta Edición, 2007. Pág. 189

<sup>108</sup> Cfr. Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Informe de Primer debate del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Quito, Asamblea Nacional del Ecuador, 2013. Capítulo 5.4.1 y Capítulo 4.2.

<sup>109</sup> El COIP contempla en un solo artículo el trastorno mental absoluto y el relativo, mientras que el anterior código los contemplaba en el art.34 y el art. 365 respectivamente.

<sup>110</sup> Cfr. Efraín Torres Chávez. Breves Comentarios al Código Penal del Ecuador y sus reformas del 2001. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005. Pág. 97.

En conclusión, la pena privativa de la libertad en CRS puede proceder en personas con discapacidad relativa a los funcionamientos mentales toda vez que se compruebe su capacidad de discernimiento de las conductas ilícitas; y puede proceder en personas con discapacidad ocasionada por funcionamientos sensoriales diferentes (lenguaje, audición, visión), discapacidad ocasionada por funcionamientos motrices diferentes (discapacidades físicas), y discapacidad ocasionada por funcionamientos diferentes múltiples,<sup>111</sup> con arreglo a los principios de legalidad y debido proceso.

Una vez que se ha establecido que las PCD pueden ser sentenciadas a prisión, en el siguiente capítulo se analizarán sus derechos en la privación de la libertad y el sistema de rehabilitación social desde una perspectiva crítica.

## **CAPITULO II. LA REHABILITACIÓN SOCIAL Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

Cuando una persona con discapacidad es sentenciada a cumplir una pena privativa de la libertad en un centro de rehabilitación social, se configura una conjunción de dos categorías de grupos vulnerables protegidos por el derecho: persona con discapacidad y persona privada de libertad (en adelante “PPL”). Ya en el capítulo anterior se ha tratado la problemática de la discapacidad desde el plano teórico-histórico, por lo que ahora corresponde analizar la discapacidad en relación a la privación de la libertad en los Centros de Rehabilitación Social (en adelante “CRS”).

En las sociedades panópticas de las cárceles el condenado se reduce a un estado mental de temor por estar constantemente controlado y vigilado, mientras que la autoridad que ejerce el control se vuelve cada vez más fuerte.<sup>112</sup> En otras palabras, existe una relación desequilibrada de poder entre la autoridad y la PPL.

---

<sup>111</sup> El antiguo Código Penal también hacía inimputables a los sordomudos que obraban sin conciencia y voluntad (Art.39), pero esto se eliminó del nuevo ordenamiento jurídico.

<sup>112</sup> Cfr. Michael Foucault. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002. Pág. 186.

Las autoridades penitenciarias (Estado) ejercen poder sobre las PPL a fin de controlarlas,<sup>113</sup> en virtud de ese poder se genera una situación especial de sujeción<sup>114</sup> la cual se caracteriza por la particular intensidad con la que el poder del Estado puede regular sus derechos y obligaciones.<sup>115</sup> Este desequilibrio configura una situación de vulnerabilidad para la PPL, puesto que su vida y el ejercicio de todos sus derechos dependen del Estado.<sup>116</sup>

Por otro lado, las PCD también viven en una situación de vulnerabilidad ya que se encuentra en desigualdad material en relación al resto de personas, y son sujetos de discriminación. Entonces, si las PCD y las PPL viven en una situación de vulnerabilidad, la consecuencia lógica del silogismo deductivo “PCD + PPL” es una situación de doble vulnerabilidad.

Desde el derecho se ha ofrecido una respuesta a la doble vulnerabilidad a través de normas que reconocen paralelamente y en conjunción los derechos de las categorías PPL y PCD. A saber, la Constitución Política de la República del Ecuador en su capítulo de Grupos de Atención Prioritaria garantiza los derechos de estas dos categorías por separado (en paralelo), y al mismo tiempo establece una norma que los vincula:

“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad”.

El art. 51 se entiende porque “las medidas privativas de la libertad se aplican de forma generalizada dentro de la administración pública”,<sup>117</sup> siendo así, cuando “existen situaciones en las que una persona detenida reúne más de una condición de vulnerabilidad”<sup>118</sup> se deben aplicar normas que respondan a esta condición. El tratamiento preferente y especializado a personas con discapacidad privadas de libertad logra equilibrar (al menos teóricamente) esa doble vulnerabilidad.

---

<sup>113</sup> Cfr. Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducción del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 152.

<sup>114</sup> Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881 de 2002.

<sup>115</sup> Cfr. Corte IDH. Óp. Cit. Caso “Instituto de Reeducción del Menor” Vs. Paraguay. Párr. 152.

<sup>116</sup> Cfr. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observación General No. 21, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 10. - Trato humano de las personas privadas de libertad. 44º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 176 (1992). Párr. 3.

<sup>117</sup> David Cordero Heredia. Las Obligaciones Internacionales de los Estados respecto a las Personas privadas de su libertad. En Internet: [www.inredh.org](http://www.inredh.org) Acceso: 09/10/2013.

<sup>118</sup> *Ibidem*.

En este capítulo se analizará a la privación de la libertad en CRS como la pena paradigmática, el garantismo penal, la situación de vulnerabilidad que existe en su ejecución, y el cumplimiento del derecho al tratamiento preferente y especializado de las PCD privadas de libertad, en relación con los otros derechos específicos de las personas con discapacidad dentro de los centros de rehabilitación social, tomando en cuenta que todos ellos contienen obligaciones positivas del Estado que se derivan de la protección especial y los tratamientos diferenciados de los que estos grupos vulnerables son titulares.

## 2.1. Aproximación conceptual a la Rehabilitación Social desde el Garantismo Penal.

### *2.1.1. Definición de la privación de la libertad.*

La privación de la libertad es “la pérdida de libertad ambulatoria de un penado mediante su internamiento en un establecimiento penitenciario durante un tiempo determinado previamente por una sentencia judicial y ejecutada conforme a la legislación vigente de forma que favorezca la resocialización”.<sup>119</sup> Por libertad ambulatoria se entiende el desplazamiento físico de un individuo sobre el espacio, y por internamiento en un establecimiento penitenciario, la reducción del individuo a un lugar determinado, conocido como cárcel.<sup>120</sup>

En nuestro ordenamiento jurídico existen varias formas de privación de la libertad: la reclusión, la prisión, la prisión preventiva, la detención y el arresto domiciliario.<sup>121</sup> La prisión preventiva (que puede durar de 6 meses a un año),<sup>122</sup> el arresto domiciliario y la detención no son sino medidas cautelares para asegurar la comparecencia del imputado en el proceso penal,<sup>123</sup> por lo que en principio no competen a la materia de esta investigación que se refiere exclusivamente a la condena de privación de la libertad en CRS. Sin embargo, los mismos estándares de protección para PPL pueden aplicarse a la prisión preventiva, tomando

---

<sup>119</sup> Borja Mappelli Caffarena y Juan Terradillos Basoco. Las Consecuencias Jurídicas del Delito. Madrid, Editorial Civitas, 1994. Pág. 63.

<sup>120</sup> Cfr. Pellegrino Rossi. “Traité de droit pénal.” En Michel Foucault. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión. México D.F., Siglo XXI Editores, 34° Edición, 2005. Pág. 233.

<sup>121</sup> COIP. Art. 59.

<sup>122</sup> COIP. Art. 541. #1 y #2

<sup>123</sup> COIP. Art. 519.

en cuenta el alarmante hecho de que en el Ecuador el 35% de PPL en CRS aún no tienen sentencia.<sup>124</sup>

Por otro lado, la reclusión es la pena establecida para los delitos sancionados con privación de la libertad por más de cinco años (hasta un máximo de 40 años), mientras que la prisión corresponde a los delitos sancionados con menos de 5 años.<sup>125</sup> Son justamente estas dos categorías de privación de la libertad las que corresponden a este estudio.

### *2.1.2. ¿Por qué castigar con la privación de la libertad? Fundamentos de la pena y crítica a la rehabilitación social.*

La privación de la libertad no siempre fue el mecanismo punitivo. A lo largo de la historia los mecanismos de castigo han variado según el fin que la pena perseguía. Por ejemplo, en el antiguo régimen influenciado por la Iglesia, la pena tenía como finalidad redimir el pecado, entonces, el castigo se dirigía a la persona (pena corporal) para enmendarla.<sup>126</sup>

Hoy por hoy las penas tienen la finalidad utilitarista de la prevención. Esta prevención puede ser general positiva al pretender que las personas confíen “en el sistema jurídico que ha sido roto por delito”,<sup>127</sup> es decir devolver la confianza a las personas de que el Estado puede protegerlos; también puede ser una prevención general negativa que intenta disuadir a las personas para que no cometan delitos,<sup>128</sup> caso contrario les espera un castigo; por último la prevención puede ser especial positiva, la cual pretende corregir a quien ha cometido un delito, convertirlo a la semejanza de quienes están libres porque presume que son buenos, y

---

<sup>124</sup> Cfr. Diario Público PP El Verdadero. Presos Sin Sentencia bajaron del 64% al 35%. Internet: <http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/presos-sin-sentencia-bajaron-del-64-al-35.html> Acceso: 11/11/2014

<sup>125</sup> COIP. Art. 59 y Art. 541 #4

<sup>126</sup> Cfr. María Fernanda Álvarez Alcívar. “La Ejecución de la Pena, un acercamiento desde el Derecho Penal Mínimo.” En Carolina Silva Portero. Ejecución Penal y Derechos Humanos, una mirada crítica a la privación de la libertad. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008. Pág. 125.

<sup>127</sup> Ramiro Ávila Santamaría. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una mirada desde el garantismo Penal. Quito. Ediciones Legales EDLE. 2013. Pág. 69.

<sup>128</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 69.

así asegurar a la sociedad. Esta es la finalidad que fundamenta la doctrina de la rehabilitación social.<sup>129</sup>

¿Es legítima esa finalidad? La rehabilitación social, como está concebida en nuestro sistema penal, utiliza al delincuente como una medida para que la sociedad pueda obtener a cambio seguridad, tranquilidad, paz.<sup>130</sup> Si el ser humano es utilizado como un medio (a través de la rehabilitación) para los fines de la sociedad, entonces se niega su dignidad humana,<sup>131</sup> por lo tanto la rehabilitación no es legítima.

¿Puede cumplir la rehabilitación social con su finalidad? En la teoría del derecho penal la rehabilitación social soluciona el problema delincencial, sin embargo la realidad es otra, no se conocen con certeza tratamientos con resultados positivos que impidan la reincidencia en el cometimiento de delitos o que rehabiliten.<sup>132</sup>

La crítica sobre la efectividad de la rehabilitación social se funda en la lógica y se comprueba en la realidad. Si al confinar a una persona a una cárcel se lo excluye de la sociedad, todo intento de reinsertarlo es lógicamente inútil, no se puede excluir e incluir al mismo tiempo, no se puede enseñar a vivir en libertad quitándola.<sup>133</sup> Las cárceles no son escuelas para enseñar a comportarse en libertad sino escuelas de formación de delincuentes<sup>134</sup> y escenarios de violaciones sistemáticas de derechos humanos<sup>135</sup> en donde se reproduce la injusticia social y la marginación.

El castigo no solamente falla porque desde su concepción tiene los errores que hasta aquí se han esbozado, a su fracaso contribuyen otros factores, inter alia, la discrecionalidad de las autoridades estatales para abordar los conflictos dentro de los CRS,<sup>136</sup> el gobierno de la

---

<sup>129</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 68

<sup>130</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 108-109.

<sup>131</sup> Cfr. Immanuel Kant. Óp. Cit. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Pág. 100-112.

<sup>132</sup> Cfr. María Belén Corredores Ledesma. “La Pena Privativa de la Libertad y el Sistema Penitenciario, análisis de nuestra realidad.” En Carolina Silva Portero. Ejecución Penal y Derechos Humanos, una mirada crítica a la privación de la libertad. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008. Pág.214.

<sup>133</sup> Ibídem.

<sup>134</sup> Cfr. Michael Foucault. Óp. Cit. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión. Pág. 280

<sup>135</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 155-157.

<sup>136</sup> Cfr. María Belén Corredores Ledesma. Óp. Cit. “La Pena Privativa de la Libertad y el Sistema Penitenciario, análisis de nuestra realidad.” En Carolina Silva Portero. Ejecución Penal y Derechos Humanos, una mirada crítica a la privación de la libertad. Pág. 219

corrupción (el dinero de un reo es su puerta de acceso a una vida de comodidades y trato preferente que otros no tiene), la existencia de drogas, armas, y alcohol, las condiciones de insalubridad, el hacinamiento y la estigmatización de la sociedad hacia las PPL.<sup>137</sup>

Toda esta crítica lleva a pensar que no debería existir castigo, que los delincuentes deberían quedar impunes, no es así. Debe existir derecho penal, debe haber una forma de afrontar los conflictos sociales porque es inevitable que ocurran, pero mientras esta forma solamente genere más violencia de la que causa, no es admisible dentro de la configuración de un Estado Constitucional de derechos y justicia. El castigo (la privación de la libertad para la rehabilitación social) solamente será legítimo cuando evite que sucedan más reacciones violentas dentro de la sociedad, y esto sólo es posible en el garantismo penal.<sup>138</sup>

### *2.1.3. El Garantismo Penal y la Rehabilitación Social.*

El garantismo penal es el uso de poder punitivo del Estado para lo estrictamente necesario (derecho penal mínimo), la minimización de las lesiones a la víctima, y las maximización de los derechos de todos los participantes del conflicto penal (víctimas y victimarios), a través de un sistema de vínculos que limitan al poder estatal.<sup>139</sup>

Los vínculos que limitan al poder estatal son los principios y garantías, como los principios de legalidad, jurisdiccionalidad, lesividad y proporcionalidad. Estos deben aplicarse en todas las facetas del derecho penal, durante el juzgamiento y a lo largo de la ejecución de la pena en la rehabilitación social. Virtualmente el garantismo se cumple durante el juzgamiento pero parecería que el Derecho, el Estado y la sociedad olvidan a los condenados tan pronto como ingresan a los CRS.<sup>140</sup>

Una rehabilitación social garantista es aquella en la que se maximizan las capacidades de los privados de la libertad, y se limita efectivamente el poder del Estado.<sup>141</sup> A

---

<sup>137</sup> Ibídem.

<sup>138</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 66-82.

<sup>139</sup> Cfr. Luigi Ferrajoli. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Madrid, Editorial Trotta, 1995. Pág. 851-852.

<sup>140</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 106-120.

<sup>141</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 226.

continuación se intentará verificar brevemente si el Sistema de Rehabilitación Social en el Ecuador reúne las condiciones necesarias para considerarse garantista:

#### *La legalidad formal y estricta*<sup>142</sup>

La legalidad formal exige que las penas se encuentren previamente establecidas en la ley. Si el juez establece una condena dentro de los mínimos y máximos predeterminados, se cumple con este principio. La legalidad estricta además obliga a que las penas respeten la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, entonces no es suficiente que la pena sea aprobada por la vía legislativa sino que además esta pena debe respetar las antedichas normas. Por ejemplo, no podría aprobarse la pena de muerte porque la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (que es parte del bloque de constitucionalidad) lo prohíbe.

Ahora, una vez que los sentenciados ingresan a un CRS, son sometidos a torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes que no están contemplados en el sistema jurídico, de igual manera reciben sanciones disciplinarias en base a tipos penales en blanco como “falta de respeto a la autoridad”. Siendo así, el sistema de RS incumple el principio de legalidad.

#### *La jurisdiccionalidad*<sup>143</sup>

La jurisdiccionalidad exige que sean jueces imparciales quienes verifiquen que la conducta se subsuma al tipo penal y que la sentencia utilice la pena que se determinó como consecuencia de la subsunción. Si la PPL comete una falta a la autoridad y es esa misma autoridad quien se encargará de determinar la sanción disciplinaria, de ninguna forma se puede esperar que esta decisión sea imparcial.

#### *La menor lesividad*<sup>144</sup>

En el garantismo el examen de la lesividad consiste en verificar que la pena no cause más daños de los que el acto delictual ocasionó. Si las condiciones de existencia en los CRS causan efectos irreversibles sobre la psiquis y el físico de las PPL, este principio no se cumple.

---

<sup>142</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 111-112.

<sup>143</sup> *Ibidem*.

<sup>144</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 159-160.



## *La proporcionalidad*<sup>145</sup>

Este principio establece que al momento de formular una condena la construcción de la misma tome en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, es decir, no realizar un ejercicio mecánico de la aplicación de la sanción establecida sino individualizar la pena. Tomar todas las circunstancias del caso concreto incluye reconocer que la discapacidad afecta gravemente la vida de la persona dentro de la cárcel, por lo que se podría causar daños graves a su vida e integridad.

En este orden de ideas, si el juez sabe que el sistema de RS no garantiza a una persona con discapacidad la realización sus derechos y todas sus capacidades, y sin embargo aplica la pena máxima por el delito cometido entonces no existe proporcionalidad.

Hasta aquí se ha demostrado teóricamente que el modelo de rehabilitación social en el Ecuador, tal como opera en la actualidad, no es congruente con el garantismo penal al no reunir las condiciones que el mismo requiere. Más adelante se demostrará a través de testimonios reales que la RS no es garante y más bien viola los derechos de las PCD.

## 2.2. La situación de vulnerabilidad y los derechos de las personas privadas de libertad.

Ya se han repasado las razones por las cuales una PCD se encuentra en situación de vulnerabilidad, y tiene desventajas en relación al resto de personas. Corresponde ahora analizar la vulnerabilidad ocasionada por la privación de la libertad, puesto que sus consecuencias sobre una persona con discapacidad podrían significar graves violaciones a derechos humanos si es que el Estado no toma las medidas pertinentes.<sup>146</sup>

Entre el Estado (representado por las autoridades penitenciarias) y las personas privadas de la libertad existe una relación especial de sujeción que se configura por los siguientes factores:<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Cfr. Rámiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 225-226.

<sup>146</sup> Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Caso X v. Argentina. Comunicación No. 8/2012.

<sup>147</sup> Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881 de 2002.

- Subordinación del privado de la libertad frente al encarcelado.
- Sometimiento a un régimen jurídico especial consistente en controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos, incluso fundamentales.
- Autorización del régimen jurídico especial por la Constitución y la ley.
- Intención primordial del régimen especial enfocada en lograr la resocialización (rehabilitación social).

Como consecuencia de esta relación las PPL tienen ciertos derechos especiales para su protección, y los Estados tienen obligaciones correlativas las cuáles se relacionan principalmente con condiciones de existencia que permitan a las PPL continuar ejerciendo los otros derechos humanos fundamentales de los que son titulares

Estos derechos específicos son ciertamente derechos humanos, y equilibran la relación de subordinación existente poniendo límites al actuar estatal. Por ejemplo, “el custodio no puede decidir no dar de comer a una persona privada de la libertad (arbitrariedad) porque dicha persona tiene derecho a comer”.<sup>148</sup>

En síntesis, los derechos humanos de los privados de la libertad son el límite de la conducta del Estado al momento de la ejecución de las penas.

### *2.2.1. Los Derechos que se suspenden y limitan en la privación de la libertad.*

La pena privativa de la libertad, por su naturaleza, suspende y limita otros derechos de la persona condenada además de la libertad, así como también hay derechos que son intangibles (el derecho a la vida por ejemplo).<sup>149</sup>

Los derechos que se suspenden de forma absoluta son:

- La libertad física individual y la libertad de tránsito (art. 66 #14 de la Constitución de la República del Ecuador), esta suspensión constituye en sí misma la privación de la libertad;

---

<sup>148</sup> Cfr. Carolina Silva Portero. Ejecución Penal y Derechos Humanos. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008. Pág.18; Ver también, CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Resolución 1/08. Principio XI.

<sup>149</sup> Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881 de 2002.

- Los derechos políticos contemplados en el art. 61 de la Constitución (llamados derechos de participación), en concordancia con lo que señala el art. 64 de la misma: “El goce de los derechos políticos se suspenderá (...) por (...) 2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad”.

Por otro lado, los derechos que se restringen o limitan como consecuencia colateral de la privación de la libertad, y cuya restricción debe controlarse de manera rigurosa, siempre que sea necesaria y de forma proporcional,<sup>150</sup> son:<sup>151</sup>

- La intimidad personal<sup>152</sup> e inviolabilidad de correspondencia (Art. 66 #20 y #21 de la Constitución);
- La libertad de asociación (Art. 66 #13);
- La libertad de información (Art. 18 de la Constitución);
- La libertad de trabajo (Art. 66 #17);
- La educación (Art. 29 de la Constitución);
- La libertad de expresión (Art. 66 #6);
- Libre desarrollo de la personalidad (Art. 66 #5);

Estos derechos se limitan, mas no se suspenden, por lo que su ejercicio depende de las restricciones que el Sistema de Rehabilitación Social imponga. Puesto que sólo existen límites parciales a su ejercicio, el Estado aún tiene que cumplir con ciertas obligaciones para permitir que de alguna forma estos derechos se sigan ejerciendo y así se garantice la dignidad de los reclusos.<sup>153</sup>

Siguiendo esta línea de pensamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha establecido en su jurisprudencia que, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus otros derechos diferentes a la

---

<sup>150</sup>Cfr. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. Párr. 154; Cfr. Corte IDH. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98. Párr. 116; Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881 de 2002.

<sup>151</sup>Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881 de 2002.

<sup>152</sup>Cfr. Corte IDH. Óp. Cit. Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay. Párr. 154

<sup>153</sup>Cfr. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Derechos de las personas privadas de la libertad en centro de reclusión. Internet:<http://www.cdhd.org.mx/index.php?id=dfejul08delibertad> Acceso: 30/11/2013

libertad personal.<sup>154</sup> Por ejemplo, si bien los reclusos no podrán acceder libremente a una educación, el Estado debe procurar que existan sistemas educativos dentro de las cárceles, que puedan acceder a libros e información que permita continuar su formación académica.

En conclusión, las medidas privativas de la libertad sólo conllevan la suspensión de la libertad personal y los derechos políticos, y la limitación de otros derechos por razones inherentes a la condición de personas privadas de libertad.<sup>155</sup> Por esta razón, los derechos cuyo ejercicio parcial aún es posible, deberán garantizarse en la medida posible dentro del contexto de un CRS a través de ajustes razonables o cualquier medida adecuada.

### *2.2.2. Los derechos que no se pueden suspender o limitar en la privación de la libertad (Núcleo duro de los derechos humanos)*

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se entiende como núcleo duro a aquel grupo de derechos que por ninguna circunstancia se pueden suspender o restringir.<sup>156</sup> El término se utiliza dentro del contexto de situaciones de peligro en un Estado, tales como catástrofes naturales o guerras, cómo se explica en el art. 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en las cuales se puede suspender ciertos derechos debido al Estado de Emergencia.

Por otro lado, en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) también se utiliza este nombre para referirse a aquellos derechos que tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales tienen plena vigencia y cuyas obligaciones correlativas se contemplan en el Art.3 común a las Convenciones de Ginebra.

En su jurisprudencia la Corte IDH ha relacionado el respeto al “núcleo duro” o los derechos inderogables en situaciones relacionadas a la privación de libertad,<sup>157</sup> señalando que es plenamente válido aplicar el núcleo duro en los CRS y no solamente a situaciones de emergencia o conflicto armado.

---

<sup>154</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, No. 133. Párr. 95.

<sup>155</sup> Cfr. David Cordero Heredia. Obligaciones Internacionales de los Estados respecto a las Personas Privadas de su Libertad. Internet: [www.inredh.com](http://www.inredh.com) Acceso: 06/10/2013

<sup>156</sup> Cfr. Álvaro Amaya y Javier Rodríguez. El Núcleo duro de los derechos humanos: Práctica Jurídica en Colombia 1991-2004. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2004. Pág. 30.

<sup>157</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147. Párr. 82.

A continuación se enlistan aquellos derechos que las PPL siempre deben gozar a plenitud:<sup>158</sup>

- Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica (Art. 3 CADH);
- Derecho a la Vida (Art. 4 CADH);
- Derecho a la Integridad Personal, a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. (Art.5 CADH);
- Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre (Art.6 CADH);
- Principio de Legalidad y de Retroactividad (Art.9 CADH);
- Libertad de Conciencia y de Religión (Art. 12 CADH);
- Garantías judiciales (Art.8 CADH);
- No discriminación (Art. 1.1 CADH);
- Derecho al nombre (Art.18 CADH);
- Derecho a la nacionalidad (Art. 20 CADH);

Si en los CRS se permite la vulneración de alguno de estos derechos a través de acciones u omisiones, esta situación será ilegítima y el Estado será responsable de graves faltas a los derechos humanos.

### *2.2.3. Los Derechos específicos de las Personas Privadas de Libertad.*

La relación especial de sujeción Estado-PPL se equilibra (en teoría) con el reconocimiento de derechos específicos y obligaciones correlativas a la condición de privado de libertad.<sup>159</sup> En el Ecuador el Derecho hace el esfuerzo de abordar esa la relación desproporcional de poder desde la Constitución:

**Art. 51.-** “Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.

---

<sup>158</sup>El art. 27 de la CADH también incluye dentro del núcleo duro a los derechos políticos, la protección de la familia y derechos del niño, pero estos no guardan relación a la situación de los PPL dentro de las cárceles, por lo que en este trabajo no se incluyen.

<sup>159</sup> Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881 de 2002.

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia”.

El numeral 6 otorga tratamiento preferente y especializado para las personas con discapacidad que sean privadas de su libertad, este mandato constitucional es la norma alrededor de la cual se debe edificar la Rehabilitación Social de las PCD. Siendo así, es necesario dilucidar el verdadero significado y los fundamentos del “tratamiento preferente y especializado”, tarea que se aborda en el siguiente acápite.

#### *2.2.4. La igualdad y no discriminación como fundamento del tratamiento preferente y especializado de las personas con discapacidad privadas de libertad.*

Se ha dicho ya que ser una persona con discapacidad y ser privado de la libertad significa encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Es así porque materialmente las relaciones de estas personas con el resto de la sociedad y con la autoridad no son igualitarias. Si en la realidad las relaciones sociales de los seres humanos se desarrollaran en igualdad, no sería necesario que una norma exija tratamiento preferente y especializado de unas personas sobre otras, en otras palabras, si todos son iguales sería ilegítimo que se trate de dar ventajas a una persona o a un grupo en particular.

En este orden de ideas, conviene analizar la igualdad desde la perspectiva jurídica, con la finalidad de hallar una justificación al tratamiento preferente y especializado.

Como derecho, la igualdad y no discriminación se encuentran reconocidas en la Constitución del Ecuador en el art. 11 numeral 2:

“Art.11 # 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de (...) discapacidad (...) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”

Por su parte, en la CIDPCD la igualdad y no discriminación constituyen el primer derecho dentro su amplio catálogo:

## Artículo 5

### Igualdad y no discriminación

“1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.”

En doctrina se entiende que estos derechos se derivan del principio de igualdad, el cual tiene el carácter de *ius cogens* y es esencial en la protección de los derechos humanos.<sup>160</sup> La igualdad se entiende como principio debido a que su contenido es en esencia un deber ser, el deber ser de “igual reconocimiento y ejercicio de los derechos entre todos los hombres”;<sup>161</sup> no describe una hecho sino una aspiración, mientras que en la realidad los seres humanos somos de facto diferentes en diversas formas,<sup>162</sup> desiguales.

Las diferencias o desigualdades permiten identificar dos dimensiones en el contenido de la igualdad (sea como principio o como derecho): formal y material. La igualdad formal no es sino que todos los seres humanos sean iguales ante la ley, esta es la dimensión más

---

<sup>160</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Párr. 184-185.

<sup>161</sup> Cfr. Rafael de Asís, Ignacio Campoy y María de los Ángeles Bengoechea. “Derecho a la Igualdad y a la Diferencia: Análisis de los Principios de no discriminación, diversidad y acción positiva.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Navarra, Editorial Arazandi, 2007. Pág. 114-117

<sup>162</sup> *Ibídem*.

abstracta de la igualdad puesto que persigue su deber ser, dimensión que por lo general es la que se adopta como definición común del derecho a la igualdad.<sup>163</sup>

Por otro lado, la igualdad material es la superación de las diferencias reales de los individuos a través de la igualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios, y en el ejercicio de los derechos.<sup>164</sup> Esta es la dimensión concreta de la igualdad porque reconoce objetivamente la realidad y exige que los poderes públicos tomen ciertas medidas que permitan igualdad “real”.<sup>165</sup>

La igualdad material impone básicamente dos obligaciones estatales: respetar el derecho a la no discriminación (obligación negativa) y realizar tratamientos diferenciados (obligación positiva). Estas dos obligaciones son los instrumentos para conseguir la igualdad de oportunidades.<sup>166</sup>

La obligación de tratamiento diferenciado por parte del Estado no es más que el tratar desigual a circunstancias diferentes, con dos finalidades: superar una situación de discriminación hacia un sujeto o colectivo (fin que es comprendido como legítimo),<sup>167</sup> y atribuir un valor a la diferencia (fin del cual se deriva el reconocimiento de derechos específicos).<sup>168</sup>

Los tratamientos diferenciados se justifican cuando tienen un fin legítimo (superar la desigualdad), son racionales (socialmente aceptables) y proporcionales (cuando los medios utilizados son adecuados a los fines).<sup>169</sup> En el caso de las PCD, estos tres criterios deberán verificarse en cada situación específica para legitimar el trato favorable.

---

<sup>163</sup> Cfr. Rafael de Asís, Ignacio Campoy y María de los Ángeles Bengoechea. Óp Cit. “Derecho a la Igualdad y a la Diferencia: Análisis de los Principios de no discriminación, diversidad y acción positiva.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 121-123.

<sup>164</sup> Cfr. Rafael de Asís, Ignacio Campoy y María de los Ángeles Bengoechea. Óp Cit. “Derecho a la Igualdad y a la Diferencia: Análisis de los Principios de no discriminación, diversidad y acción positiva.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 121-123.

<sup>165</sup> Cfr. Rafael de Asís, Ignacio Campoy y María de los Ángeles Bengoechea. Óp Cit. “Derecho a la Igualdad y a la Diferencia: Análisis de los Principios de no discriminación, diversidad y acción positiva.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 123-25.

<sup>166</sup> *Ibidem*.

<sup>167</sup> *Ibidem*.

<sup>168</sup> *Ibidem*.

<sup>169</sup> Cfr. Rafael de Asís, Ignacio Campoy y María de los Ángeles Bengoechea. Óp Cit. “Derecho a la Igualdad y a la Diferencia: Análisis de los Principios de no discriminación, diversidad y acción positiva.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 133



Existen dos tipos de tratamientos de tratamientos diferenciados:<sup>170</sup>

- a) Las medidas de diferenciación o ajustes razonables: Son aquellos tratos preferentes que se aplican a individuos en virtud de su situación de desigualdad específica, es decir a un caso particular, con la finalidad de equilibrar dicha desigualdad.

En la CIDPD las medidas de diferenciación se conciben como “ajustes razonables”, y se explica más detalladamente que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las PCD el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con los demás (Art.2 Párr. 4 CIDPCD).

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad,<sup>171</sup> en el caso H.M. v. Suecia, se refiere a los ajustes razonables para una PCD a la que el Estado negó el permiso de construcción que necesitaba para instalar en su hogar una piscina que ayudaría a su rehabilitación física. La negativa del Estado se dio en virtud de las afectaciones que dicha construcción tendría para el plan urbanístico de la zona. El Comité decidió que el ajuste razonable necesario era adaptar la aplicación del plan urbanístico a favor de H.M. en la construcción de su piscina.<sup>172</sup>

En esta misma oportunidad, el Comité estableció que el no realizar un ajuste razonable constituye una violación al derecho a la no discriminación, puesto que una ley o norma que se aplica imparcialmente a una PCD puede tener un efecto discriminatorio por no

---

<sup>170</sup> *Ibíd.*

<sup>171</sup> El Comité de los derechos de las personas con discapacidad es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención. El Comité no es un organismo jurisdiccional, sus decisiones concluyen en observaciones y recomendaciones (que pueden incluir indemnizaciones) en virtud de la evidencia de actos y omisiones que violen los derechos reconocidos en la Convención (Art.6 Párr. 3 del Protocolo Facultativo a la CIDPCD). El Comité, en un plazo de seis meses puede solicitar al Estado que informe sobre las medidas adoptadas para cumplir sus observaciones y recomendaciones. (Art. 7 Párr. 2 del Protocolo Facultativo a la CIDPCD). Puesto que no es un organismo jurisdiccional, sus decisiones no constituyen jurisprudencia, sin embargo, en virtud del principio de buena fe del cumplimiento de las obligaciones internacionales, los Estados contra los cuales se han procesado peticiones individuales si están vinculados a dichas recomendaciones; así mismo, sus decisiones pueden ser utilizadas como fuente de doctrina para el desarrollo del corpus iuris de los derechos de las PCD, tal y como lo ha hecho la Corte IDH al momento de establecer una definición de la discapacidad acorde al modelo social, utilizando la Observación General No. 9, sobre los derechos de los niños con Discapacidad, del Comité de los Derechos de los Niños. Ver Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. Párr. 132-134.

<sup>172</sup> Cfr. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. H.M. v. Sweden. Communication No. 3/2011. CRPD/C/7/D/3/2011, April 19<sup>th</sup> of 2012. Párr. 8.3. and 8.8.

tomar en cuenta las circunstancias de la persona. Esto evidencia la recíproca relación que existe entre los tratamientos diferenciados, la igualdad y no discriminación.<sup>173</sup>

- b) Las acciones positivas: son obligaciones generales de dar o hacer que el Estado contrae por voluntad propia y que tienen carácter general, en contraste con las medidas de diferenciación que se aplican a casos particulares. Por ejemplo, pueden ser obligaciones establecidas en una ley como ayudas económicas, exoneraciones de impuestos o programas destinados a la atención de un grupo históricamente discriminado como las PCD.

Ahora, en ningún sentido se deben considerar a los tratamientos diferenciados como un trato discriminatorio en detrimento de otras personas,<sup>174</sup> siempre que persigan el fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las PCD.<sup>175</sup> Una medida que no persiga este fin está prohibida en derecho, porque significaría discriminar a otras personas sin justificación legítima.

Lo anterior plantea un nuevo elemento de análisis de la igualdad, la discriminación. El derecho a la no discriminación consiste en no ser objeto de una diferenciación injustificada es decir, subjetiva, irrazonable y desproporcionada en base a la discapacidad o cualquier otra condición.<sup>176</sup> Si se es objeto de un trato discriminatorio no se es igual, entonces la no discriminación es una condición necesaria de la igualdad.

En síntesis de lo expuesto, el derecho a la igualdad no solamente significa el reconocimiento del ser humano como igual ante la ley, sino que además se refiere a la igualdad de oportunidades de todas las personas en el acceso a bienes y servicios, y en el ejercicio de todo derecho. Para que exista igualdad de oportunidades el Estado debe asegurar que las PCD no sean discriminadas y debe procurar protección especial a su favor a través de medidas de diferenciación.

Ahora, si las personas con discapacidad privadas de libertad son evidentemente diferentes al resto, ¿el Estado debe darles un trato diferente, ventajas? Si, el Estado se

---

<sup>173</sup> Cfr. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Óp. Cit. H.M. v. Sweden. Par. 8.5.

<sup>174</sup> Cfr. CIDPCD. Art. 5 Numeral 4

<sup>175</sup> Cfr. OEA. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 6 de junio del año 1999, en la ciudad de Antigua. Art.1 b).

<sup>176</sup> Cfr. Rafael de Asís, Ignacio Campoy y María de los Ángeles Bengoechea. Óp Cit. “Derecho a la Igualdad y a la Diferencia: Análisis de los Principios de no discriminación, diversidad y acción positiva.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Pág. 125-128.

encuentra en la obligación de dar tratamiento diferenciado a las PCD-PPL porque sólo así garantizará su derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, la omisión de trato diferenciado a las PPL con discapacidad es una violación de sus derechos humanos.

Al respecto, la Constitución del Ecuador establece en su art. 51 #6 el tratamiento preferente y especializado de las PCD en la privación de libertad. Este mandato constitucional es un tratamiento diferenciado de los que se ha hablado en este capítulo, puesto que exige a los custodios de la rehabilitación social que prefieran a las PCD por encima de otros en ciertas circunstancias específicas que lo requieran (preferencia),<sup>177</sup> y que realicen todos los actos (adaptaciones, modificaciones, etc.) necesarios para satisfacer las necesidades de una PCD en un caso particular (especialización).<sup>178</sup>

Sin tratamiento preferente y especializado las PCD no podrían cumplir su condena en igualdad de condiciones con las demás personas, pues materialmente no tienen las mismas oportunidades que ellas. En otras palabras, el art. 51 #6 es la norma constitucional que trata de conciliar el derecho a la igualdad y no discriminación en los CRS del país.

Por último, se debe indicar que todas las medidas que se tomen a favor de las personas con discapacidad privadas de libertad para garantizar sus derechos a la integridad personal, vida independiente, accesibilidad o rehabilitación, son expresiones del tratamiento preferente y especializado del que son titulares. Si esas medidas no se llevan a cabo (sea a través de ajustes razonables o acciones positivas), el Estado viola el derecho a la igualdad y no discriminación.<sup>179</sup>

En el siguiente capítulo se analizará el ejercicio real de los derechos de personas privadas de la libertad con discapacidad a través de un análisis de casos reales, de antemano hay que señalar que si se concluye en la existencia de una violación del Estado para garantizar alguno de los derechos específicos a la discapacidad (por acción u omisión), también se debe concluir que hay una falta al derecho de igualdad y no discriminación.

---

<sup>177</sup> Trato preferente son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el resto de las personas con carácter de primacía. Fuente: Ley General Para Personas con Discapacidad (Bolivia). Publicada en Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición 350NEC, del 2 de Marzo del 2012.

<sup>178</sup> La palabra preferente se define como “muy adecuado o propio para algún efecto”. Entonces, el trato preferente es adecuar la forma en la que se trata a la persona según sus necesidades. Cfr. Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, Espasa Libros, 21era Edición, 2001.

<sup>179</sup> Cfr. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Óp. Cit. H.M. v. Sweden. Par. 8.5.

### 2.3. Voces de la discapacidad, los derechos vs. la realidad.

En las secciones anteriores de esta investigación se ha abordado la discapacidad y la rehabilitación social desde la teoría. En este apartado se abordan los derechos de las personas con discapacidad en la realidad, desde las cárceles, con testimonios en primera persona. Las aproximaciones empíricas se irán contrastando con cada derecho específico formalmente reconocido a las PCD privadas de libertad.

#### *2.3.1. El caso de Christian Andrés García Mendoza.<sup>180</sup>*

La entrevista con Christian García, 24 años de edad, se llevó a cabo en el la sala de visitas del pabellón de atención prioritaria de CRS Regional Guayas, alrededor de las tres de la tarde el Lunes 29 de Diciembre del 2014.

Christian llega acompañado de la trabajadora social asignada a su pabellón, la agarra fuerte del brazo para que lo guíe a la mesa, él es no vidente. Cuando logra sentarse me presenté en voz alta, no me escucha. La trabajadora social pide que me aproxime al oído izquierdo de Christian porque “es también sordo” y pide que le hable en voz muy alta a escasos centímetros.

Me acerco a él tanto como me parece cordial para no causarle ninguna molestia, pero es inútil, para que comprenda debo acercarme tanto a su oído que puedo escuchar como respira, sentir el olor de sus vestimentas (ese olor característico de toda cárcel, una mezcla entre humedad y sudor), y puedo ver una cicatriz detrás de su oreja. Me presento en voz muy alta, en contraste el responde con una voz muy jovial, casi la de un niño.

Me apresuro a iniciar la entrevista, llevo tres horas de retraso, la cita en el CRS era a las 11 a.m. y sólo me permitieron acceder hasta las 2 p.m. Christian debe firmar un formulario de libre consentimiento autorizándome a realizar la entrevista, puesto que su discapacidad le impide leer me corresponde leer en voz alta el documento, con presencia de

---

<sup>180</sup> Ver Anexo II

la trabajadora social como testigo (quien también lo firma).<sup>181</sup> Una vez que explico a Christian los objetivos de esta entrevista, él toma la palabra:

“No tengo un abogado, ayúdeme. Ya han venido a verme otros estudiantes de los derechos humanos, me dijeron que debo demandar a los policías para ver si me dan algo por lo que me hicieron. Yo no era así cuando recién llegué aquí”.

Christian fue sentenciado a 9 años de reclusión por el delito de violación a un menor, en el momento de la realización de esta entrevista ya había cumplido dos años de su condena.

“Cuando entré me golpearon unos policías y los otros presos, me dieron tan duro que me dejaron ciego de un ojo ese rato, con el otro ya casi no puedo ver nada. Me pateaban en el piso, yo lloraba y les pedía que me dejen, que yo no había hecho nada, yo no violé a ese niño, pero nadie me hacía caso. Mire como me dejaron todito el cuerpo, tengo cicatrices por todo lado. También me dejaron sordo. Me quedé sangrando en el piso después de que me pegaron, me sangraba la boca, no me podía parar, cuando estaba en el piso se reían de mí...pasaron varios días para que mandaran a un doctor a verme. Cuando me vio el doctor yo ya estaba ciego y ya no escuchaba con este oído (el derecho). El Director de la cárcel se enteró al año de lo que había pasado”.

Pude ver algunas de las marcas que ese episodio de violencia produjo en Christian, también pude sentir su miedo y tristeza, él empezó a llorar en medio de la entrevista.

“Me violaron, me vieron así como soy y me violaron, luego de que me pegaban me hacían eso. Los guías sabían lo que me estaban haciendo, y nunca me ayudaron. Ahora que me transfirieron a esta cárcel ya no me violan ni me pegan, me siguen molestando pero ya no es como antes. Me dicen que soy *marica*, me gritan y me molestan por ser así y por ciego, siempre me están jalando del cabello porque me ven que lo tengo largo”.

Christian es abiertamente homosexual, fue trasladado al CRS Regional Guayas recientemente donde existe un pabellón para grupos vulnerables, allí convive con otras personas de la diversidad sexual y con discapacidad. Pausamos un momento la entrevista para que se pueda reincorporar, sigue llorando. Me apresuro a cambiar de tema y empiezo a cuestionarlo sobre lo relativo a la discapacidad.

“Aquí en la cárcel no puedo hacer nada, si alguien no me saca de la celda me quedo sin bañarme, sin comer, sin caminar. No hago nada, no puedo ir a los talleres ni a las clases que hacen. Me quedo siempre sentado en algún lado. Ayúdeme a que me den un bastón para ver si es que me puedo mover por aquí”.

---

<sup>181</sup> Ver Anexo II

Christian también me comenta que dentro del pabellón en el que cumple su pena no hay señales en braille para su orientación, tampoco libros en braille en la biblioteca, ni se le ha entregado un bastón para personas no videntes que le permita desplazarse dentro del CRS.

#### *2.3.1.1. Violación del Derecho a la Integridad Personal*

Los impactantes hechos que se acaban de relatar no son ajenos a la memoria del Estado Ecuatoriano. En el Caso Víctor Rosario Congo v. Ecuador, la CIDH estableció violaciones del derecho a la integridad personal por parte de agentes estatales en un contexto fáctico similar al de Christian.

El señor Rosario Congo vivía con una discapacidad intelectual y había sido sometido a maltratos por parte de uno de los guías del Centro de Rehabilitación Social de Machala en el cumplía su condena por robo. De los hechos del caso se desprende que, tras la agresión, sucedida el 14 de Septiembre de 1990, la víctima fue puesta de regreso en una celda de aislamiento sin recibir ninguna atención médica, pese a las graves heridas que sufrió.<sup>182</sup>

Cuarenta días después de las agresiones, Víctor Rosario fue llevado a un hospital, en el cual falleció a causa de deshidratación, desnutrición y malos tratos a los que había sido sometido. De haber recibido atención médica temprana, no hubiera fallecido.<sup>183</sup>

La CADH establece en su Art. 5 que toda persona tiene derecho a que se respete su “integridad física, psíquica y moral”. La integridad es esencial para el disfrute de la vida humana y no puede ser suspendida bajo circunstancia alguna.<sup>184</sup>

Este derecho implica una obligación negativa de “no hacer” por parte del Estado, y una obligación positiva de investigar violaciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas en condiciones acordes a su dignidad humana.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup> CIDH. Caso Víctor Rosario Congo contra Ecuador. Informe N° 63/99, Caso 11.427. Párr. 6-21.

<sup>183</sup> *Ibidem*.

<sup>184</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. Párr. 126; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C, No.140. Párr. 119; Corte IDH. Óp. Cit. Caso “Instituto de Reeducción del Menor” vs. Paraguay. Párr. 157.

<sup>185</sup> Cfr. Corte IDH. Óp. Cit. Caso “Instituto de Reeducción del Menor” vs. Paraguay. Párr. 158.

La obligación negativa que tiene el Estado significa que debe abstenerse de realizar cualquier conducta que pueda vulnerar este derecho, como por ejemplo, utilizar la fuerza o la violencia de manera innecesaria en contra de una persona privada de la libertad.<sup>186</sup>

También, el uso de la fuerza innecesaria puede manifestarse a través de la violencia sexual. Este tipo de violencia “se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”.<sup>187</sup>

Por otro lado, la obligación positiva del Estado en relación a la integridad, exige “investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación”.<sup>188</sup> A la luz de estos deberes, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento de un hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, investigaciones para sancionar y juzgar a los responsables.<sup>189</sup>

La CIDH ha señalado que el Estado también tiene una obligación positiva de brindar asistencia médica especializada a las personas con discapacidad, en el momento que lo requieran.<sup>190</sup> En el mismo sentido, la Corte IDH en el Caso Furlán Fernández vs. Argentina,<sup>191</sup> determinó que si por un acto u omisión estatal una persona con discapacidad no

---

<sup>186</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de Septiembre de 1997. Serie C No. 33. Párr. 57.

<sup>187</sup> Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Párr. 306.

<sup>188</sup> Cfr. Corte IDH. Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009, Serie C, No. 202. Párr. 62.

<sup>189</sup> Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párr. 290; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140. Párr. 143; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de Agosto de 2008, Serie C, No. 186. Párr. 144; Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C, No. 192. Párr. 101.

<sup>190</sup> Cfr. CIDH. Óp. Cit. Caso Víctor Rosario Congo contra Ecuador. Párr. 64-68.

<sup>191</sup> El Caso Furlán Fernández vs. Argentina es paradigmático en cuanto a la discapacidad. Furlán era un niño que adquirió su discapacidad debido a una negligencia del Estado (las Fuerzas Armadas descuidaron un terreno de su propiedad que debía estar cercado para impedir el acceso al público, en ese terreno Furlán sufrió un grave accidente que ocasionó su discapacidad). La litis pendencia de dicho caso no versa sobre la omisión del Estado que directamente ocasionó la discapacidad, sino sobre la ineffectividad del cobro de una pensión que Furlán debía recibir gracias a un juicio de

puede acceder a una adecuada rehabilitación y atención médica, ello constituye una grave afectación al derecho a la integridad.<sup>192</sup>

En el caso de Christian, los agentes estatales hicieron uso innecesario de la violencia al agredirlo físicamente, causándole hemorragias y varias heridas que hasta el día de hoy tienen cicatrices visibles en su cuerpo. De igual forma, él sufrió agresiones sexuales por parte de otros privados de la libertad, lo cual era de conocimiento de las autoridades. En ningún momento las autoridades penitenciarias, administrativas o judiciales, investigaron ni establecieron sanciones por las agresiones físicas que cometieron otros agentes estatales o la violencia sexual que otros privados de la libertad perpetraron contra Christian.

Adicionalmente, a Christian no se le proporcionó la atención médica inmediata que necesitaba tras los atroces eventos ocurridos, es decir que la violencia estatal y la omisión de brindarle atención médica ocasionaron su discapacidad física y visual. Por todo lo expuesto, el Ecuador viola el derecho a la integridad personal de Christian García.

Como corolario, cabe señalar que el derecho a la integridad personal forma parte del núcleo duro de los DDHH que no pueden ser afectados durante la privación de la libertad,<sup>193</sup> su vulneración en este caso deviene en una grave falta a los derechos fundamentales. Además, la violación de la integridad personal constituye una pena de facto adicional a la privación de la libertad, que no está contemplada en el sistema jurídico penal ecuatoriano ni aceptada en el Derecho Internacional, y que causa más daños de los ya ocasionados por el acto delictual, por lo tanto esta situación afecta al principio de legalidad estricta y formal del garantismo penal, así como también al principio de menor lesividad.<sup>194</sup>

#### *2.3.1.2. Violación del Derecho a la Vida Independiente.*

El art. 19 de la CDPD establece que las personas con discapacidad tienen derecho a “vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad”, la correlativa obligación estatal consiste en garantizar que:

---

negligencia que ganó contra el Estado y los daños irreversibles que el no poder pagar una rehabilitación (gracias a acciones y omisiones Estatales) generaron en torno a su discapacidad.

<sup>192</sup> Cfr. Corte IDH. Óp. Cit. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 269.

<sup>193</sup> Ver Capítulo 2.2.2.

<sup>194</sup> Ver Capítulo 2.1.3.



a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

La vida independiente implica que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones propias sobre su vida, elegir el estilo de vida que deseen y responsabilizarse por las acciones que realicen, al igual que las personas sin discapacidad.<sup>195</sup> No hay razón para pensar que este derecho se suspende o limita en la privación de la libertad ya que la persona puede participar de la vida en la comunidad carcelaria.

Según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de que los privados de libertad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en los aspectos de la vida diaria del lugar de detención, el Estado debe adoptar todas las medidas pertinentes, incluyendo la identificación y eliminación de obstáculos y barreras, lo cual garantiza el acceso de las PCD, en igualdad de condiciones con las demás PPL, a los diversos ambientes físicos y servicios, tales como baños, patios, bibliotecas, talleres de estudio o trabajo, servicios médico y a participar en todos los aspectos de la vida en el lugar de detención.<sup>196</sup>

En el caso de Christian, el Estado no ha adoptado ninguna medida que le permita acceder al medio físico del CRS a fin de que pueda vivir de forma independiente, porque no existen dentro de su pabellón señales en braille para su orientación, no hay libros en braille en la biblioteca, no se la ha entregado un bastón para personas no videntes, todo esto ha ocasionado que Christian viva aislado en su celda sin la posibilidad de desplazarse con libertad, o tomar una decisión por sí mismo respecto de las actividades diarias del CRS, siempre a la espera de recibir ayuda de alguien que lo pueda guiar.

---

<sup>195</sup> Congreso Europeo sobre Vida Independiente. Manifiesto de Tenerife. Tenerife, Primer Congreso Europeo sobre Vida Independiente, 2003. Pág. 1-2.

<sup>196</sup> Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Caso X v. Argentina. Comunicación No. 8/2012. Párr. 8.5.

El escenario inaccesible en el que Christian es obligado a vivir ignora la eliminación de las barreras arquitectónicas, sociales y culturales como eje fundamental para permitirle gozar de una vida independiente, por lo tanto el tratamiento que él recibe en el CRS no corresponde al modelo social que ha sido ampliamente aceptado como el adecuado para garantizar la autonomía de las PCD.<sup>197</sup>

### *2.3.2. El Caso de Abraham Álvarez Reyes*

Abraham Antonio Álvarez Reyes es un hombre de nacionalidad dominicana, de 35 años de edad, que vive con una discapacidad física en su extremidad inferior derecha, la cual reduce su habilidad para movilizarse libre y rápidamente sin ayudas técnicas. Al momento en que se realizó su primera entrevista para esta investigación, el 04 de Septiembre de 2013, Abraham cumplía 4 de 8 años de condena en el Centro de Rehabilitación Social #1, Ex Penal García Moreno, en el Pabellón B. En la entrevista, que pudo ser documentada en video,<sup>198</sup> él relató los problemas que día a día tiene que sobrellevar como una persona con discapacidad viviendo en un Centro de Rehabilitación Social en Ecuador.

El 30 de Abril de 2014, Abraham fue transferido del Ex Penal García Moreno al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte – Cotopaxi, como parte de la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Con su transferencia, y la de otras 1617 PPL, el Ex Penal García Moreno clausuró sus funciones como CRS.<sup>199</sup>

Los dos escenarios por los que Abraham ha transitado mientras esta investigación se realizaba ofrecen una plataforma propicia para comprobar si ha existido una evolución en el tratamiento de los derechos humanos de las PPL con discapacidad, o en su defecto una situación de regresividad.

---

<sup>197</sup> Ver Capítulo 1.1.3.

<sup>198</sup> Ver Anexo Audiovisual I.

<sup>199</sup> Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. PPL llegaron al CRS Regional Cotopaxi. Internet: <http://www.justicia.gob.ec/1-618-privados-de-libertad-llegaron-al-crs-regional-cotopaxi/> Acceso: 18/05/2013.

*2.3.2.1. La situación de Abraham Álvarez en el Centro de Rehabilitación Social #1, Ex Penal García Moreno<sup>200</sup>*

Abraham fue la primera persona con la que tuve la oportunidad de realizar la parte empírica de esta investigación, para entonces el Ministerio de Justicia no contaba con un censo oficial de PCD-PPL que me permitiera identificar a personas que calificaran con los criterios necesarios para ser entrevistados (tener una discapacidad).<sup>201</sup> Para solucionar ese problema realicé una solicitud al Director del Ex Penal García Moreno pidiendo se me conceda autorización para entrevistar a una de las PPL bajo su autoridad,<sup>202</sup> la solicitud fue aceptada pero se me encargó a mí mismo identificar al entrevistado porque el CRS no tenía registro de quién tuviera una discapacidad.

Ingresé al Pabellón B para buscar aleatoriamente una persona con discapacidad, Abraham se encontraba en la planta baja, en la salida al patio del pabellón. Su semblante era desenchajado, cuando me acerqué él estaba un poco asustado. Aceptó ser entrevistado porque “al menos así podía contarle al Director lo que le pasaba”.

En el camino hacia la oficina del Director, lugar donde se llevó a cabo la entrevista, un guía penitenciario ayudaba a Abraham a bajar los escalones, por sí sólo no podía hacerlo, le era muy doloroso mover la pierna.

“Me encontraste ahí abajo (en la planta baja del pabellón) porque no puedo ir a mi celda, estoy en una celda de observaciones para los que consumimos drogas. En la celda estamos 12, es muy pequeña (según el Director, son cerca de 30 metros cuadrados de celda), no tenemos camas para todos, a veces me toca dormir en el piso. En esa celda no tengo dónde dejar mis cosas, duermo con toda la ropa que tengo cerca porque no quiero que me roben, ya me han robado antes”.

La apariencia de Abraham está bastante deteriorada, su ropa está muy sucia y necesitan enmendarse o cambiarse, sus manos y su rostro tienen polvo, esto denota que en el CRS le higiene es muy pobre.

---

<sup>200</sup> Ver Anexo Audiovisual I.

<sup>201</sup> En entrevista realizada el 16 de Agosto de 2013, Fabricio Vargas, Coordinador de Estadística de la Coordinación General de Planificación del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, informó que hasta ese momento el Ministerio no había realizado ningún censo oficial. Sin embargo, el CONADIS propuso un proyecto para, conjuntamente con el Ministerio, levantar la información de PPL con discapacidad en los CRS. El proyecto del CONADIS culminó el 31 de Marzo del 2014 (Ver Anexo 3), e identificó a 573 PCD. Ver Anexo Audiovisual I.

<sup>202</sup> Ver Anexo III.

“Cómo tengo la pierna así no puedo bajar a las duchas (las duchas compartidas están en el segundo piso), no me baño todos los días. Tampoco puedo ir a los baños siempre, y cuando uso el baño siempre está sucio”.

Es evidente que su estado de salud no es el mejor, aparenta muy poco peso. Me comenta que a veces prefiere consumir drogas a comer; si es que come tiene que esperar a que algún compañero le lleve la comida ya que por su discapacidad no siempre puede bajar al comedor dentro de los horarios de alimentación.

“Las drogas me han ocasionado varios problemas. Me vendo por drogas, hago favores por drogas. Cuando no tengo para pagar, me pegan, ya me han dejado algunas veces mal”.

En el CRS Abraham nunca ha recibido tratamiento para dejar el consumo de drogas. Tampoco fue atendido ninguna de las veces que fue víctima de violencia. Su rostro tiene algunas cicatrices, sus brazos también. No siente reparo en quitarse la ropa para mostrarme sus heridas, tampoco en mostrar su pierna derecha en la que tiene movilidad reducida. De hecho, aprovechó la oportunidad para mostrarle al Director su pierna y pedirle ayuda porque le duele, también le pidió que le devuelvan el zapato ortopédico que se llevaron los guías.

“No me han devuelto el zapato que tenía. De tanto uso tuvieron que llevarlo a arreglar pero no me lo devolvieron. Me duele caminar, tengo unas varillas de metal en la pierna que ya debían sacar”.

La cirugía para remover las varillas de metal de la pierna de Abraham nunca se programó, tampoco tuvieron la intención de rehabilitarlo para que recupere la movilidad de la pierna en la que tiene varillas.

*2.3.2.1.1. Omisión de las condiciones mínimas de Existencia en el CRS #1 (Ex Penal García Moreno) y la prohibición de tortura, trato cruel, inhumano o degradante.*

Los Estados, dentro de los Centros de Rehabilitación Social y en cualquier circunstancia de privación de la libertad, deberán procurar condiciones mínimas (o estándares mínimos) compatibles con la dignidad humana y el derecho a la integridad, tomando en cuenta que es el garante especial de todas las personas bajo su custodia.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Ver Vera Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, Serie C, No. 226. Párr. 42; Ver también CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. Principio I.

Estos estándares consisten en ciertas condiciones materiales que el Estado debe asegurar en todos los casos de privación de la libertad, sea prisión preventiva, detención temporal como medida de seguridad, o cumplimiento de una pena establecida a través de sentencia emitida por un tribunal competente.<sup>204</sup>

Los Estados no pueden invocar la falta de recursos económicos para justificar condiciones de detención que no cumplan con las condiciones mínimas o no respeten la dignidad del ser humano<sup>205</sup>, siempre deben hacer efectiva la obligación de garantizar el bienestar de las PPL.

Las condiciones mínimas son las siguientes:

### **Celdas y hacinamiento.**

Las instalaciones donde se ejecute la pena deberán permitir a las PPL “espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad”.<sup>206</sup> Es muy importante recalcar que, existe la obligación de asegurar que las instalaciones tomen en cuenta las necesidades especiales de accesibilidad de las personas con discapacidad.<sup>207</sup>

Las celdas individuales no deberán ser ocupadas más que por un solo recluso, no se puede admitir que en celdas individuales se aloje más de una persona, incluso si existe sobrepoblación carcelaria. Si se utilizan dormitorios (celdas compartidas con camas múltiples), “éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones”.<sup>208</sup> Si fueren celdas compartidas, deben tener camas separadas e individuales.<sup>209</sup> No se puede tolerar que las PPL

---

<sup>204</sup> Cfr. ONU. Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Párr.4.

<sup>205</sup> Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C, No. 150. Párr. 85 y 87.

<sup>206</sup> CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Principio XII; Cfr. ONU. Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. Párr. 10.

<sup>207</sup> Cfr. CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Principio XII.

<sup>208</sup> Ibidem.

<sup>209</sup> Cfr. ONU. Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. Párr. 19.

se vean obligadas a dormir o descansar en el suelo, la Corte IDH considera esta situación como violatoria a la integridad.<sup>210</sup>

Se estima que 7 m<sup>2</sup> por cada PPL es una guía aproximada y deseable para una celda, un área menor podría constituir hacinamiento.<sup>211</sup>

En el caso de Abraham, el estado ecuatoriano incumple con su obligación de proveer celdas accesibles para PCD privadas de libertad, puesto que a él no le es posible desplazarse hacia su celda o salir de ella sin dificultad, y requiere ayuda de terceros.

También, debido a que Abraham comparte su celda de 30 m<sup>2</sup> cuadrados con 12 personas, sin camas suficientes, y se ve obligado a dormir en el piso, el Estado omite los estándares mínimos para las celdas y lo obliga a vivir en hacinamiento.

Cabe señalar que, el Estado ecuatoriano en su primer Informe ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2009),<sup>212</sup> indicó que las PCD eran ubicadas en celdas unicelulares diseñadas para dar facilidades a estas personas.<sup>213</sup> Del testimonio de Abraham se desprende que esto no era la verdad.

## **Higiene**

Los Centros de Rehabilitación Social deben garantizar el “acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán

---

<sup>210</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C, No. 114. Párr. 151.

<sup>211</sup> Cfr. Corte IDH. Caso. Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C, No. 150. Párr. 118.

<sup>212</sup> En arreglo al párrafo 1 del art. 35 de la CDPD, los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, un informe sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención. Al cumplirse 2 años de la entrada en vigor de la Convención los Estados presentaron su primer informe, tras ello tienen la obligación de presentar uno cada 4 años.

El Estado ecuatoriano presentó su primer informe durante el segundo período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado en Ginebra del 19 al 23 de Octubre del 2009.

<sup>213</sup> Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe del Ecuador sobre la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2009). Presentado durante el segundo período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado en Ginebra del 19 al 23 de Octubre del 2009. Párr. 110.

acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas”.<sup>214</sup>

Las PPL no pueden verse obligadas a satisfacer sus necesidades básicas en presencia de sus compañeros de celda, pero aún vivir entre excrementos y alimentarse en esas circunstancias. Las Corte IDH ha determinado que situaciones como esta constituyen una vulneración del derecho a la integridad humana.<sup>215</sup>

Del testimonio de Abraham se desprende que él no puede mantener higiene individual adecuada ni satisfacer sus necesidades personales en condiciones apropiadas, ya que por sí mismo le es imposible desplazarse hacia las duchas todos los días, y los sanitarios se encuentran en condiciones antihigiénicas. Siendo así, este estándar tampoco se cumple.

### **Alimentación y agua.**

“Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley”.<sup>216</sup>

De igual, forma, deberán tener acceso a agua potable para consumo y aseo. La escasez de alimentos y agua constituye una violación a la salud y a la integridad en los términos de la Corte IDH.<sup>217</sup>

En el caso de Abraham, aún si es que se le provee de comida, su condición de discapacidad le impide acceder a ella en igualdad con los demás debido a las barreras arquitectónicas. No come en los horarios adecuados, y a veces ni si quiera come porque tiene que esperar que esperar a la voluntad de sus compañero . Entonces, esta condición tampoco se cumple.

---

<sup>214</sup> CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Principio XII.

<sup>215</sup> Cfr. Corte IDH. Óp. Cit. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 95

<sup>216</sup> CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Principio XI; Ver también ONU. Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. Párr. 20.

<sup>217</sup> Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C, No. 126. Párr. 54-57.

## **Atención Médica**

La atención médica es una de las condiciones más importantes dentro de una cárcel, pues asegura la integridad de las personas y la vida digna. Es de especial atención cuando en los centros de rehabilitación social se priva de la libertad a miembros de grupos vulnerables, tal y como lo ha reconocido la Comisión Interamericana al establecer que los Estados deberán procurar “medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal”.<sup>218</sup>

La Corte IDH y el Comité DPCD han determinado que la falta de tratamiento médico adecuado a PCD constituye una violación a su integridad.<sup>219</sup> Si se trata de PCD, la obligación de atención médica debe cumplirse eficazmente debido a su vulnerable situación.<sup>220</sup>

Abraham nunca recibió la atención médica que necesitaba para remover las varillas metálicas de su pierna, tampoco se le procuró atención cuando fue víctima de violencia física por parte de sus compañeros. Además, en ningún momento ha recibido rehabilitación médica para la movilidad de su pierna. Siendo así, esta condición mínima tampoco se cumple.

Para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ausencia de estas garantías mínimas constituye una violación a los derechos humanos, y configura torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, que afectan al derecho a la integridad de las personas.<sup>221</sup> En el caso de PCD se debe procurar especial atención puesto que sus derechos específicos, como el de accesibilidad y vida independiente, se ven directamente afectados por las condiciones que el lugar de privación de la libertad ofrece.<sup>222</sup> Así, de los hechos relatados se desprende que las condiciones de vida en el Ex Penal García Moreno constituían una falta

---

<sup>218</sup> CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Principio X.

<sup>219</sup> Corte IDH. Óp. Cit. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 102; y Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Caso X v. Argentina. Comunicación No. 8/2012; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C, No. 114. Párr. 153-157.

<sup>220</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C, No. 149. Párr. 416.

<sup>221</sup> Cfr. Comité DPCD. Óp. Cit. Caso X v. Argentina. Párr. 8.6.

<sup>222</sup> Cfr. Comité DPCD. Óp. Cit. Caso X v. Argentina. Párr. 8.9.



a la prohibición de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, y además eran una omisión de la obligación de procurar atención especial a este grupo.

Las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes no son una pena contemplada en el derecho penal del Ecuador, por lo que su existencia afecta al principio de legalidad del garantismo penal, así como también al principio de menor lesividad al causar más daños de los que se ocasionó con el delito cometido.<sup>223</sup> De igual manera, existe una afectación al núcleo duro de los derechos humanos que prohíbe este tipo de tratos.<sup>224</sup>

#### *2.3.2.2. El traslado de los privados de la libertad del Ex Penal García Moreno al CRS Regional Cotopaxi.*

El traslado de las PPL al CRS de Cotopaxi mereció varias denuncias públicas de sus familiares. Los reclamos se fundaban en las condiciones adversas a las que estaban expuestas los detenidos en las nuevas instalaciones.<sup>225</sup>

Las denuncias pusieron a las autoridades estatales a la defensiva en cuanto a la información que podía conocerse y las personas que podían ingresar a las instalaciones. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos llegó incluso a obligar a los periódicos que emitieron notas relacionadas a las malas condiciones del nuevo CRS que rectificaran sus publicaciones puesto que, según el Estado, se estaba manipulando la verdad y por ende se mal informaba a la ciudadanía.<sup>226</sup>

La problemática sobre la transferencia sobrepasó los medios de comunicación y llegó hasta el poder judicial. Se presentaron acciones constitucionales para detener el traslado hasta que el CRS Regional Cotopaxi ofrezca las condiciones mínimas. El 19 de Marzo de 2014 tres privados de la libertad, aún en el Ex Penal García Moreno, presentaron una acción de protección.

El Juez 1ero del Trabajo de Pichincha avocó conocimiento de la causa y rechazó la demanda sosteniendo que no existen pruebas fácticas de que los accionantes sufran

---

<sup>223</sup> Ver Capítulo 2.1.3.

<sup>224</sup> Ver Capítulo 2.2.2.

<sup>225</sup> Organización de Familiares de Personas Privadas de la Libertad. Informe: Precarias Condiciones de Vida en las que se hallan las personas Personas Privadas de la Libertad en el Centro Regional Cotopaxi. Internet: <http://elmartirionorehabilita.blogspot.com/2014/04/precarias-condiciones-de-vida-en-las.html> Acceso: 05/06/2014

<sup>226</sup> Cfr. Diario El Comercio. Rectificación. Publicada el Lunes 03 de Marzo de 2014. Pág. 5.

violaciones a sus derechos y que su petición de detener el traslado es una medida no coherente porque beneficia a los accionantes por la supuesta vulneración de derechos de otras personas (los PPL que ya estaban el CRS Regional Cotopaxi). El juez señaló que, en el peor de los casos, son las PPL ya trasladadas las que deberían accionar para restituir la situación anterior, porque son sus derechos los que supuestamente se vulneran.<sup>227</sup> En segunda instancia, la Corte Provincial confirmó el fallo recurrido.<sup>228</sup>

En ese contexto, cualquier solicitud para ingresar al nuevo CRS Cotopaxi por una persona que no constaba en la lista de familiares y contactos de los privados de la libertad era negada.<sup>229</sup> Entonces, en esta investigación se optó por la estrategia de realizar una entrevista como parte de las visitas de Abraham, una vez que el Ministerio de Justicia volviera a establecer el horario de visitas regular.

### *2.3.2.3. La situación de Abraham Álvarez en el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi.*

Abraham fue transferido el 30 de Abril, el 4 de Mayo se registró su horario de visitas en el sitio web del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. El 5 de Mayo me dirigí al CRS Cotopaxi, tras una rigurosa requisita que incluso requirió despojarme de mi vestimenta, pude ingresar como una visita regular de Abraham, sin la posibilidad de registrar de forma alguna, la información recopilada, ni si quiera se podía utilizar papel y lápiz dentro de la sala de visitas.

---

<sup>227</sup> Cfr. Juzgado Primero del Trabajo de Pichincha. Sentencia de 10 de Abril de 2014.

<sup>228</sup> Cfr. Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Sentencia de 11 de Junio de 2014.

<sup>229</sup> El 04 de Marzo de 2014 la Organización de Familiares de Personas Privadas de la Libertad, se reunieron a las 17h00 en las aulas de la Universidad Andina del Ecuador para tratar de establecer las estrategias que tomarían en virtud de las condiciones del CRS Cotopaxi, las cuales se alegaban como violatorias de los derechos humanos de las PPL. En esta oportunidad pude realizar una entrevista con Maria Folledo, miembro de la Organización, en la cual manifestó todas las circunstancias que había podido verificar en el CRS mientras visitaba a su esposo. También, me indicó que para poder ingresar al centro era necesario constar en la lista de familiares que los PPL proveían, caso contrario era imposible ingresar puesto que el Estado mantenía una política hermética sobre lo que sucedía en el interior del CRS. María recomendó que ingresara como una visita familiar cuando Abraham fuera transferido y se publicara su horario de visitas regular, puesto que para entonces ya no sería necesario que se me registre como familiar del privado de la libertad.

Varios meses habían transcurrido desde la última vez que vi a Abraham, no estaba seguro de que él me recordara. Cuando ingresó a la sala de visitas, vistiendo un uniforme naranja, me sonrió y abrazo diciendo:

“Nunca me había venido a visitar nadie, no sabía quién podía ser. Muchas gracias por venir, yo pensé que ya se había olvidado. Tiene que venir más seguido, no se demore tanto la próxima.”

Me era extraño ver a Abraham tan contento, la última vez que lo vi seguramente estaba usando alguna droga, ahora podía verlo más articulado en su conversación y físicamente en mejores condiciones. Había subido de peso y se veía más saludable.

“Estoy sin droga. Aquí está más complicado comprarla, y cuando ingresé me quitaron toda la ropa donde tenía la droga escondida. Están todos sufriendo, algunos ya están enfermos por no tener con que jalar”.

Ver a Abraham en un mejor estado me hizo pensar que tal vez este nuevo CRS solucionaría todos los problemas que desbordaban en el Penal García Moreno. El testimonio de Abraham me demostró que en efecto muchas falencias se solucionaron, pero muchas otras aún estaban por resolver.

“Estoy en una celda con cuatro compañeros, ya tenemos camas para los cuatro. Primero me iban a mandar a una celda en el primer piso pero me quejé, les dije que no me podían mandar arriba porque no podía subir y me iba a pasar lo mismo que en Quito. Por suerte me escucharon y me pusieron en la planta baja.

Lo mejor es que ya tengo cama para mí sólo, lo malo es que la cama está al lado del baño. Tenemos un baño en la mitad de la celda, me ven todo si es que quiero usarlo. Nos tocó poner una cortina que hicimos con fundas de plástico para que nos vean mientras lo usamos. Tampoco hay agua para botar (los desechos), todo queda apestando en la celda, ojalá que arreglen rápido lo del agua.

Otra cosa que no me gusta es que hace mucho frío en esa celda, no nos dieron nada para taparnos de noche, nos toca dormir con este mismo uniforme para que no tengamos tanto frío. En la mañana nos hacen bañar al aire libre, el agua es helada, preferiría no bañarme.

Me dan de comer las tres veces al día pero como no está listo el comedor me toca comer en mi celda, el olor del baño (los desechos que no se pueden evacuar) no me deja comer tranquilo, da asco. Tampoco hay agua para tomar, nos dieron una botella cuando llegamos de Quito y ya me la acabé.

Apenas ingresé un médico me vio, le dije que aún no me devuelven mi zapato que me ayudaba a caminar. Hasta ahora no me los devuelven.”

Una trabajadora social se acercó a nosotros para recordarnos que la visita estaba por terminar, también me preguntó si era familiar de Abraham con la intención de que recogiera sus pertenencias que fueron retenidas al llegar a Latacunga. Abraham me pidió que retire sus cosas porque no tenía a nadie más para recogerlas, sus familiares no viven en Ecuador. Cuando terminamos la entrevista firmó un documento autorizándome a recoger sus pertenencias, me pidió que guarde sus cosas hasta que salga, y que no me olvide de irlo a visitar nuevamente.

#### *2.3.2.3.1. Omisión de las condiciones mínimas de Existencia en el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, una situación de regresividad de derechos.*

Los hechos relatados a través del testimonio de Abraham prueban que en el CRS de Latacunga aún subsisten ciertas condiciones precarias de vida. Si bien no se puede dejar de reconocer que el hacinamiento (uno de los problemas más graves) fue solucionado, y que las celdas son físicamente accesibles para PCD, persisten varias deficiencias que afectan a los derechos humanos:

Los PPL están siendo obligados a dormir y alimentarse junto a sus excrementos por la falta de agua en las tuberías sanitarias, deben satisfacer sus necesidades biológicas sin privacidad frente a sus compañeros de celda, deben ducharse en agua helada, no tienen acceso continuo a agua potable para el consumo, no reciben rehabilitación para mejorar sus capacidades.

Esas deficiencias no solamente constituyen una falta a los estándares mínimos de existencia en la privación de la libertad y a la prohibición de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, sino que además son acciones que incumplen la no regresividad en el ejercicio de los derechos.

El art. 11 #8 de la Constitución señala:

“8(...) Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derecho ()”

El principio de no regresividad tiene dos formas de aplicación, la no regresividad jurídica y la no regresividad de resultado. La no regresividad jurídica examina las normas de derecho, procurando que los derechos reconocidos en una norma no pueden ser desconocidos, restringidos o limitados ilegítimamente por otra norma. Mientras que la no regresividad de

resultado examina las políticas públicas que ejecuta el Estado, promoviendo que las nuevas políticas públicas no empeoren la situación anterior a ellas.<sup>230</sup>

Si por ejemplo se toma en cuenta que el traslado de las PPL (política pública) a Latacunga hizo que no tengan acceso a agua potable, es evidente que al menos sobre esta situación en específico las cosas empeoraron (en relación al Ex Penal García Moreno). Entonces, si hubo regresividad en el ejercicio de los derechos.

Lo anterior no quiere decir que las condiciones de vida en el CRS de Quito eran las óptimas, un cambio era necesario y el nuevo CRS es en muchos sentidos mejor. Pero es muy criticable que el traslado se haya realizado cuando la construcción del CRS no estaba culminada y por lo tanto este no ofrecía un escenario adecuado para que un ser humano viva dignamente. El haber apresurado injustificadamente el traslado significó regresividad en los derechos de las PPL.

### *2.3.3. El Caso de Pedro Nicolás Valero Rivas*

Pedro Valero es un hombre ecuatoriano de 45 años de edad, condenado a 5 años de reclusión mayor ordinaria por venta de drogas. En principio fue condenado a 8 años de reclusión, pero el Tribunal Décimo Cuarto de Garantías Penales de Milagro considero su discapacidad como un atenuante para rebajar la condena.<sup>231</sup>

Pedro utiliza una silla de ruedas, perdió la movilidad de sus piernas luego de sufrir un accidente de tránsito en el que se fracturó la columna:

“Aquí la atención para mi discapacidad es pésima. Se supone que debería ver al médico al menos una vez al mes, eso me dijeron cuando tuve el accidente y empecé a hacer rehabilitación, pero aquí nunca he sido atendido por un médico para ver cómo van mis piernas. Antes movía un poco más las dos piernas, ahora ya hasta tengo las rodillas duras, ya no puede doblar las piernas bien.

Esta silla ya ni si quiera me sirve, está dañada una de las rueditas de adelante y ya no la puedo mover solo, me tienen que levantar un poco desde atrás y empujar para que se mueva. Ya la tengo años, me la regalo otro preso que estaba en la anterior cárcel.

Lo que más quisiera es otra silla, porque si no me lleva alguien me toca estar adentro de mi celda todo el tiempo. Mis compañeros son buenos, a veces me sacan a pasear,

---

<sup>230</sup> Cfr. Christian Curtis. Ni un paso atrás: La Prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 2006. Págs. 3-4.

<sup>231</sup> Tribunal Décimo Cuarto de Garantías Penales de Milagro. Sentencia de 01 de Agosto de 2013. No. Causa 09914-2013-0224.

pero quisiera poder hacer mis cosas sólo. El otro día me caí en el baño porque nadie me estaba ayudando y no había de dónde agarrarme, tuve que esperar a que viniera alguien más a bañarse para poder sentarme otra vez en la silla.”

### *2.3.3.1. Violación del Derecho a la Rehabilitación Física*

El derecho a la rehabilitación que reconoce la CIPDP, obliga a los Estados a adoptar “medidas efectivas y pertinentes (...), para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional (...)”.<sup>232</sup>

Por su parte, la constitución del Ecuador reconoce el derecho a la rehabilitación integral para las PCD en su art. 47 #2, y la LOD lo reconoce dentro del ejercicio del derecho a la salud:

“Art.19.-El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud (...)”.

Ni la Convención ni la LOD, definen con exactitud lo que es la rehabilitación, entonces se debe acudir a la a otras fuentes. En doctrina la rehabilitación se entiende como las prestaciones que “mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades”.<sup>233</sup>

Ahora, si bien en la privación de la libertad algunos derechos se limitan e incluso suspenden, la rehabilitación no debe restringirse. Sobre esto el Comité DPCD señala que, en los casos de PCD privadas de libertad, los Estados están en una posición especial de garantes del derecho a la rehabilitación (y otros), debido a que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre ellas.<sup>234</sup>

La Corte IDH señala que la rehabilitación física de las PCD debe ser brindada en forma temprana y oportuna para lograr un resultado idóneo, debe ser continua, tener en

---

<sup>232</sup> Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 26.

<sup>233</sup> Eroles Carlos y Fiamberti Hugo. Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buenos Aires, EUDEBA, 2008. pág. 112.

<sup>234</sup> Cfr. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Óp. Cit. H.M. v. Sweden.

cuenta el tipo de discapacidad que la persona tiene, y ser coordinada por un equipo multidisciplinario que atienda todos los aspectos de la persona como una integralidad.<sup>235</sup>

En el caso de Pedro se evidencia una absoluta omisión del deber del Estado de garantizar la rehabilitación física, porque nunca desde que ingreso al CRS ha podido realizar terapias de rehabilitación. Puesto que el Estado no le brindó rehabilitación (omisión), este es responsable del deterioro progresivo en su salud y capacidades, lo cual también afecta su derecho a la integridad física y vida digna. Además, con su movilidad reducida, y la falta de ayudas técnicas como una silla de ruedas adecuada, Pedro no tiene autonomía dentro del CRS y depende de otras personas para poder satisfacer incluso sus necesidades básicas de higiene.

### *2.3.3.2. Violación del Derecho a la Igualdad y No Discriminación.*

El derecho, la igualdad y no discriminación se encuentran reconocidos en la Constitución del Ecuador en el art. 11 numeral 2:

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de (...) discapacidad (...) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”

Por su parte, en la CIDPCD la igualdad y no discriminación constituyen el primer derecho dentro su amplio catálogo:

### Artículo 5

#### “Igualdad y no discriminación

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.

---

<sup>235</sup> Cfr. Corte IDH. Óp. Cit. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 283.

Tanto la Constitución como la CDPC señalan que el Estado tiene una obligación especial de realizar ajustes razonables a favor de las PCD. Siguiendo este mismo pensamiento, el Comité DPCD ha señalado que el no realizar un ajuste razonable a favor de una PCD constituye una violación al derecho a la igualdad y no discriminación.<sup>236</sup>

Un ajuste razonable es toda medida necesaria y adecuada para garantizar a las PCD el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con los demás,<sup>237</sup> en ese sentido se debe entender a la rehabilitación física como una de las medidas necesarias para que las personas con discapacidad pueden ejercer en condiciones de igualdad material otros derechos como la salud, vida digna e independiente, educación, etc. Es decir que, la rehabilitación es también un ajuste razonable dentro del marco del derecho a la igualdad y no discriminación.

En el caso de Pedro el Estado omitió su obligación especial de brindar rehabilitación (ajuste razonable) y por lo tanto violó su derecho a vivir en igualdad de condiciones y sin discriminación dentro del CRS. Ahora, si en efecto se violó el derecho a la igualdad y no discriminación de Pedro, que hace parte del núcleo duro de los DDHH, entonces existe una grave violación de sus derechos fundamentales.<sup>238</sup>

#### *2.3.4. El Caso de Wilson Reinaldo Carbo Góngora*

Wilson Carbo es un ciudadano de 46 años de edad, condenado a 8 años de reclusión mayor por el delito de violación. Wilson es no vidente, esto le ha ocasionado varios problemas en el CRS:

“Para venir a la sala de visitas me tuvieron que traer, no puedo moverme a ningún lado sino es con alguien que me guíe. No tengo un bastón para poder caminar, me gustaría que me den uno porque si no paso todo el día en la celda. Hasta para ir a comer me toca esperar que algún guardia se desocupe o algún compañero me lleve.”

Se supone que los nuevos CRS fueron diseñados de manera accesible para PCD, pero Wilson me comenta que:

“Aquí no hay señales para nosotros los ciegos en las paredes. No hay nada, ni libros para que nosotros podamos leer con las manos. Hasta para leer la biblia necesito ayuda, no puedo ni hacer eso solo”.

##### *2.3.4.1. Violación del Derecho a la Accesibilidad*

El artículo 9 de la CDPD, respecto al derecho a la accesibilidad señala:

---

<sup>236</sup> Cfr. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Óp. Cit. H.M. v. Sweden. Par. 8.5.

<sup>237</sup> Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 2 Párr. 4.

<sup>238</sup> Ver Capítulo 2.2.2.



“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, (...) y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público (...) Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia...”<sup>239</sup>

Este derecho fue entendido desde varios puntos de vista. Ha ido evolucionando hasta obtener un contenido de universalidad e inclusión; en un primer momento se habla de accesibilidad física, esta concepción responde de manera exclusiva a los requerimientos de equipos u objetos utilizados para la movilidad (como sillas de ruedas, automóviles, ambulancias, camillas), dirigidos a atender las necesidades de personas con discapacidad ocasionada por deficiencias motrices o físicas, pero aplicados a esferas privadas como hogares u hospitales.<sup>240</sup>

Más tarde esta forma de entender a la accesibilidad evoluciona en su campo de aplicación a lugares de concurrencia pública, introduciendo la noción de barreras arquitectónicas. Las barreras arquitectónicas se entienden como “todos aquellos obstáculos físicos que limitan la libertad de movimientos de las personas en dos grandes campos:

- La accesibilidad: vías públicas, espacios libres y edificios

- El desplazamiento: medios de transporte”<sup>241</sup>

Al tener presente las barreras arquitectónicas en los espacios públicos, la idea de diseño universal se convierte en la premisa para la accesibilidad y desplazamiento, porque no excluye a ningún tipo de discapacidad, o a las personas que no viven con una discapacidad: los beneficiarios son todos los miembros de la sociedad, madres embarazadas, ancianos, niños, jóvenes, personas con discapacidad.<sup>242</sup>

---

<sup>239</sup> Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art.19.

<sup>240</sup> *Ibidem*.

<sup>241</sup> Belén Alfonso Naranjo. Barreras Arquitectónicas y Discapacidad. Internet: <http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7197.pdf> Acceso: 22/09/2013

<sup>242</sup> Cfr. Eroles Carlos, Fiamberti Hugo. *Óp. Cit. Los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Pág. 127

“El diseño universal, no implica una arquitectura diseñada para gente con discapacidades, sino una arquitectura para todos, un diseño para todos, (...) el objetivo es que cualquier usuario pueda acceder, utilizar, y entender cualquier parte del entorno, con tanta independencia como sea posible (...)”.<sup>243</sup>

Acerca del derecho a la accesibilidad, la Ley Orgánica Sobre Discapacidades dice:

Art.58.- “Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad (...)”.

Este artículo es determinante al indicar que la accesibilidad debe procurarse tanto en obras públicas como privadas,<sup>244</sup> entonces, no solamente las entidades estatales deberán cumplir con diseños universales sino cualquier edificación de acceso al público. En lo que a esta investigación concierne, los Centros de Rehabilitación Social entran en la categoría de obra pública, por lo tanto, la accesibilidad debe procurarse en cada establecimiento de rehabilitación social.

El Comité Sobre los derechos de las personas con discapacidad tuvo la oportunidad de manifestarse en cuanto al derecho a la accesibilidad de las PCD privadas de libertad en el caso X v. Argentina (2012). En dicho caso, X (el autor) adquirió una discapacidad física tras una intervención quirúrgica mientras se sustanciaba un juicio penal en su contra, cumplió su detención provisional dentro de un hospital penitenciario que formaba parte del sistema de rehabilitación social de Argentina.<sup>245</sup>

El Comité señaló que, en general, los Estado tiene la obligación de garantizar que sus centros penitenciarios permitan la accesibilidad de todas las personas con discapacidad que lleguen a ser privadas de su libertad.<sup>246</sup> Para que exista accesibilidad se debe “adoptar todas las medidas pertinentes, incluyendo la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, a fin de que las personas con discapacidad privadas de libertad puedan vivir en

---

<sup>243</sup>Valarezo Patricia y Esparza Sandra (Vicepresidencia de la República del Ecuador). Guía Técnica de Accesibilidad al Medio Físico. Quito, PROSAR, 2009. pág. 8.

<sup>244</sup>La misma idea sigue el art. 9 de la CIDPD al referirse a “instalaciones abiertas al público o de uso público”. La Convención no limita la previsión de la accesibilidad a los bienes públicos, sino que prevé que esta se cumpla cuando los bienes, tanto públicos como privados, brinden acceso al público.

<sup>245</sup> Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Caso X v. Argentina. Comunicación No. 8/2012.

<sup>246</sup> Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Óp. Cit. Caso X v. Argentina. Párr. 8.5.

forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida diaria del lugar de detención, entre otras, asegurando su acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de libertad, a los diversos ambientes físicos y servicios, tales como baños, patios, bibliotecas, talleres de estudio o trabajo, servicios médico, psicológico, social y legal”.<sup>247</sup>

En X v. Argentina el hospital no contaba con las condiciones de accesibilidad necesarias para satisfacer las necesidades del autor (incluso después de que el Estado realizó algunos ajustes razonables): las dimensiones del baño de su celda no permitían su acceso con silla de ruedas, la silla de plástico que se colocó en la ducha para que pueda bañarse no ofrecía condiciones de seguridad apropiadas, por ello no podía desplazarse por su propia cuenta para satisfacer sus necesidades básicas de higiene y necesitaba de terceros que los asistan, sin embargo de ello, el personal del hospital no era suficiente para atender oportunamente sus llamadas de ayuda.<sup>248</sup>

El Comité decidió que la falta de accesibilidad y ajustes razonables adecuados generan condiciones que afectan a la integridad física y mental (art. 17 CIDPCD), y en algunos casos puede configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 15).<sup>249</sup>

En el caso de Wilson, la inexistencia de simbología en braille para PCD dentro de la infraestructura del CRS, libros en braille, y ayudas técnicas como un bastón guía, son obstáculos que impiden su accesibilidad al medio físico. La no accesibilidad reduce a Wilson a una vida dependiente en cada aspecto cotidiano. Por estas razones se viola el derecho a la accesibilidad de este privado de la libertad, y como consecuencia también se vulnera su derecho a la vida independiente.

#### *2.3.4.2 Violación del Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica.*

Sobre la personalidad jurídica, la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo siguiente:

---

<sup>247</sup> *Ibíd.*

<sup>248</sup> Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Óp. Cit. Caso X v. Argentina. Párr. 8.4.

<sup>249</sup> Cfr. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Óp. Cit. Caso X v. Argentina. Párr. 8.6.

### “Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Generalmente se entiende que el reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad de goce) y de deberes, su violación supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de gozar de esos derechos.<sup>250</sup>

Sin embargo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha encargado de profundizar más respecto del contenido de este derecho en relación a los grupos vulnerables. Es así que, se ha establecido que la personalidad jurídica representa un parámetro para determinar si una persona es titular o no de derechos y obligaciones de acuerdo a su condición personal.<sup>251</sup> Es decir, este derecho no solamente sirve para reconocer a un individuo como persona humana titular de derechos, sino que además sirve para determinar si esa persona es también titular de otros derechos propios a su condición personal (mujer, afrodescendiente, niño, PCD).

Es deber del Estado procurar los medios para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares, dando especial atención a aquellas personas vulnerables, marginadas y discriminadas,<sup>252</sup> como lo son las PCD. En este sentido, uno de los medios para garantizar este derecho es registrar a las personas a través de los medios que sean posibles. El registro de la persona es una condición necesaria para asegurar su personalidad jurídica,<sup>253</sup> y el goce de otros derechos propios a su condición.

Lo expuesto se puede interpretar de tal manera que se entienda como una obligación estatal el llevar un registro de las personas con discapacidad, para garantizar el reconocimiento de los derechos propios a dicha condición. Esto no debe significar que una persona no registrada no tiene derechos, sino más bien que la omisión de registrar debe imputarse como una violación del reconocimiento de la personalidad jurídica como PCD.

---

<sup>250</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, Párr. 179.

<sup>251</sup> Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. Párr. 188.

<sup>252</sup> Cfr. Corte IDH. Óp. Cit. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 189.

<sup>253</sup> Cfr. Comité sobre Derechos Humanos del Niño. Observaciones Concluyentes del Comité sobre Derechos Humanos del Niño: Nicaragua. CRC/C/15/Add.36 (Novena Sesión, 1995). Párr. 16.

Según lo expuesto, el hecho de que Wilson no tenga Carnet del CONADIS en el que se especifique su discapacidad, y que permita a las autoridades identificar y reconocer su condición como PCD, implica una violación a su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Como corolario del caso de Wilson, es importante señalar que el desconocimiento de su personalidad jurídica constituye una grave falta al núcleo duro de los derechos humanos;<sup>254</sup> además, la falta de accesibilidad al medio físico implica un desconocimiento del Modelo Social del tratamiento de la discapacidad que reconoce a las barreras arquitectónicas como uno de los elementos que disminuye las capacidades de la persona;<sup>255</sup> y también, el hecho de no poder ser autónomo debido a lo inaccesible del CRS afecta particularmente el principio de proporcionalidad en la aplicación de la pena según el cual el Juez asegurarse de que e CRS reúna las condiciones suficientes para que la PCD puede cumplir su condena en igualdad con los demás sin sufrir daños graves y desproporcionados a su integridad.<sup>256</sup>

Finalmente, sólo es sensato concluir esta parte de la investigación afirmando que el Sistema de Rehabilitación Social, de la forma en que opera actualmente, viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas con discapacidad privadas de libertas. Si bien es innegable que se han superado algunos problemas neurálgicos como el hacinamiento, y que en ciertos casos los jueces toman en cuenta la discapacidad para disminuir la condena,<sup>257</sup> el sistema aún falla en brindar las garantías suficientes para que las PCD cumplan sus condenas en igualdad con las demás personas.

## 2.4. La exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad.

En el capítulo anterior se pudo evidenciar que el Sistema de Rehabilitación social falla en brindar las garantías suficientes a las PCD. Muchas veces la argumentación para exonerar al Estado de las obligaciones especiales para con las PCD incluye la falta de recursos económicos que se necesitan para crear medios físicos accesibles, en otras palabras, los derechos de las PCD exigen demasiado y son casi inalcanzables en sociedades en las que el dinero escasea. ¿Es este argumento válido o se pueden exigir los derechos de las PCD?

---

<sup>254</sup> Ver Capítulo 2.2.2.

<sup>255</sup> Ver Capítulo 1.1.3.

<sup>256</sup> Ver Capítulo 2.1.3; y también Cfr. European Court of Human Rights. Case of Price v. The United Kingdom. 10 July 2001. Application No. 5493/72. Par. 25

<sup>257</sup> Como en la sentencia de Pedro Nicolás Valero Rivas.

La gran mayoría de los derechos específicos de las personas con discapacidad comparten las características propias a los DESC, principalmente: Su realización requiere de obligaciones positivas de los Estados, las cuales conllevan gastos gubernamentales, esfuerzos de inversión social e infraestructurales.<sup>258</sup> Es decir, son derechos de cumplimiento progresivo. Siendo así, ¿pueden exigirse?

El cumplimiento progresivo implica que la efectividad de los derechos no puede lograrse en un breve período de tiempo,<sup>259</sup> ni de forma inmediata (a diferencia de los derechos civiles y políticos que son de respeto y ejercicio inmediato),<sup>260</sup> sino paulatinamente a través de medidas apropiadas, como los ajustes razonables, siguiendo esta idea, los derechos de las personas con discapacidad, en su generalidad, también deben cumplirse progresivamente, en particular el derecho a la accesibilidad, puesto que requiere adoptar “medidas para el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, (...)”.<sup>261</sup> Estas medidas incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, lo cual conllevará esfuerzos continuos del estado.

Ahora, la progresividad de estos derechos muchas veces ha sido entendida de tal manera que su exigibilidad legal ante las autoridades administrativas o judiciales no sea posible, y que su cumplimiento deba lograrse a lo largo de un plazo discrecional del Estado. Estas ideas se basan sobre los siguientes supuestos:<sup>262</sup>

- Las medidas positivas que el Estado debe adoptar son sólo materia política y no principios legales;
- El Estado sólo deberá actuar hasta el máximo de los recursos que posea, por lo cual una Corte no podrá forzarlo a cumplir con una obligación que quede fuera de su alcance financiero en un determinado momento.

---

<sup>258</sup> Cfr. Tara Melish. La Protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. New Haven, Center for International Human Rights of the Yale Law School, 2003. Pág. 41

<sup>259</sup> Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N°3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (Artículo 11[2]). Emitida en su 5to período de sesiones, 1990. Párr.9.

<sup>260</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>261</sup> Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 9.

<sup>262</sup> Cfr. Tara Melish. *Óp. Cit.* La Protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pág. 39-41

Los organismos internacionales se han encargado de aclarar que la progresividad de los derechos no implica aplazar indefinidamente su efectividad, sino que por el contrario, los Estados tienen la obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible para lograr su plena vigencia.<sup>263</sup> Independientemente de su situación económica, los Estados están totalmente obligados a garantizar estos derechos dentro de un umbral mínimo,<sup>264</sup> y además dentro de un plazo razonablemente breve.<sup>265</sup> Por lo tanto, si el Estado incumple esta obligación deberá responder legalmente para resarcir los daños causados por su falta.<sup>266</sup>

Según lo expuesto, todas las medidas positivas o ajustes razonables que sean necesarios para hacer efectivo el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad a los bienes y servicios de la sociedad (y de todos sus otros derechos), deberán ejecutarse brevemente, sin que le sea posible al Estado excusarse en su falta de recursos económicos. Incluso, la falta de adopción de estas medidas puede ser considerada como una violación al derecho a la no discriminación, según lo ha establecido el Comité DPCD.<sup>267</sup>

Toda vez que se ha establecido que en efecto los Derechos de las PCD (en analogía con los DESC) pueden ser exigidos, cabe analizar cuáles son las maneras de hacerlos exigibles/justiciables. A saber, existen dos posibilidades de exigir los derechos: la exigibilidad jurídica (de las normas y los tribunales) y la exigibilidad política (de las políticas públicas).<sup>268</sup>

#### *2.4.1. La exigibilidad desde las normas.*

Según la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el Ecuador tiene la obligación general de adoptar todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos contenidos en ella (Art. 4. A.), incluyendo las medidas legislativas que se requieran para derogar o modificar las normas que sea discriminatoria (Art. 4.B.). Esto

---

<sup>263</sup> Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Óp. Cit. Observación General N°3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (Artículo 11[2]). Párr.9.

<sup>264</sup> CIDH. Informe Anual del año 1993. OEA/Ser. L/V/II.85. Párr. 524.

<sup>265</sup> Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Óp. Cit. Observación General N°3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (Artículo 11[2]). Párr.2.

<sup>266</sup> Cfr. Tara Melish. Óp. Cit. La Protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pág. 40.

<sup>267</sup> Cfr. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Óp. Cit. H.M. v. Sweden. Par. 8.5.

<sup>268</sup> Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA). Capacidades para la exigibilidad, Manual de Políticas Públicas y Participación Social. Bogotá, ILSA, 2008. Pág. 94.

quiere decir que el ordenamiento jurídico del Ecuador debe incluir los derechos de las PCD, y debe expulsar cualquier norma que esté en contra de estos derechos. Conviene revisar brevemente si es que en efecto nuestro ordenamiento ha cumplido con este mandato.

La Constitución Política de la República del Ecuador en su capítulo de Grupos de Atención Prioritaria garantiza los derechos de las personas con discapacidad y también de las personas privadas de la libertad:

“Art. 47: Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas.
3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
4. Exenciones en el régimen tributarlo.
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomenten sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue (...).”

“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos (...) 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad (...).”

Por otro lado, la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) se promulgó en nuestro país como la norma rectora que conciliaba los preceptos constitucionales y convencionales sobre la discapacidad. Su Proyecto legislativo fue auspiciado principalmente por la Vicepresidencia a cargo de Lenin Moreno, a la luz de la obligación de adopción y adaptación de la CIDPD. Dicho proyecto se estructuró conjuntamente entre la vicepresidencia, el CONADIS, y la OMS.<sup>269</sup>

---

<sup>269</sup> Cfr. Federación Nacional de y para la Discapacidad del Ecuador. Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades. Internet:



También, el nuevo COIP contiene una norma esencial respecto de las PCD que no estaba contemplada en la legislación anterior:<sup>270</sup>

“Artículo 710.- Programas de tratamiento para grupos de atención prioritaria.- Las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, tendrán programas específicos que atiendan sus necesidades, en privación de libertad”.

Este artículo concuerda con el mandato constitucional de tratamiento preferente y especializado a personas con discapacidad establecido en el art. 51. #6 de la Constitución.

Con esta sucinta revisión de normas se puede concluir que en términos generales el ordenamiento jurídico ecuatoriano sí acoge los derechos de las PCD como grupo de atención especial, por lo tanto existe exigibilidad normativa.

#### *2.4.2. La exigibilidad judicial.*

Ahora, si bien hay reconocimiento legislativo de los derechos de las PCD privadas de libertad, es pertinente saber si es que el aparato jurisdiccional ha sido accionado para exigir su cumplimiento o denunciar su violación en casos particulares.

Por las limitaciones físicas de este trabajo, no se puede realizar un análisis exhaustivo de todas las causas que, amparadas en la defensa de los derechos de las PCD, se han presentado en el Ecuador. Tampoco sería pertinente hacerlo porque ese trabajo exige una investigación autónoma. Sin embargo, a manera de ejemplo se puede utilizar una decisión de la Corte Constitucional que constituye Jurisprudencia vinculante.

Así, en la Sentencia No. 067-12-SEP-CC se tiene lo siguiente:<sup>271</sup>

El juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia y la Corte Provincial de Ibarra ordenaron al señor Segundo Angel Pandi Toalombo a pagar pensión alimenticia a su hija. Debido a que el accionante vive con una discapacidad física de 80% que le impide trabajar, y

---

<http://www.discapacidadesecuador.org/portal/images/stories/File/Ley%20organicadediscapacidad.pdf>  
Acceso: 09/03/2014

<sup>270</sup> La normativa penal anterior al COIP no proveía una disposición para favorecer al tratamiento diferenciado de las personas vulnerables en rehabilitación social. El precedente directo de esta norma es la Constitución del 2008 (Título II, Capítulo III: Derechos de las Personas y Grupos de atención prioritaria), lo que significa que la reforma normativa está en armonía con el texto constitucional al menos sobre este punto específico.

<sup>271</sup> Cfr. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 067-12-SEP-CC. Registro Oficial Suplemento 728 de 20/06/2012.

por lo tanto le imposibilita conseguir el dinero para cumplir con dicha obligación de alimentos, este presentó recursos constitucionales en contra de las decisiones de primero y segundo nivel hasta llegar a la Corte Constitucional del Ecuador vía Acción Extraordinaria de Protección.

En la Acción Extraordinaria el accionante alega que la decisión de los jueces inferiores afecta su derecho a la dignidad y libertad de trabajo porque le obligan a trabajar en labores que afectan su dignidad humana incluso si le es físicamente imposible dedicarse normalmente al trabajo.

La Corte Constitucional hace un ejercicio de ponderación entre los derechos de dos grupos vulnerables, los niños y las personas con discapacidad. Por un lado la niña tiene derecho a la seguridad alimentaria y por otro el padre con discapacidad tiene derecho al respeto de su dignidad y libertad. Tomando en cuenta la imposibilidad física del accionante y el hecho de que la familia nuclear de la niña y el Estado pueden cubrir con los gastos necesarios para su normal desenvolvimiento, la Corte superpone el derecho de padre a la dignidad y libertad frente al de la niña. Por lo tanto, deja sin efecto la orden de las instancias inferiores de pagar alimentos.

Utilizando esta jurisprudencia vinculante como referencia se puede inferir que el poder jurisdiccional del Ecuador ha sido accionado para tutelar los derechos de las PCD y en efecto ha garantizado su pleno ejercicio.

#### *2.4.3. La exigibilidad política, las políticas públicas.*

Puesto que el ordenamiento jurídico propone principios de deber ser y derechos, existe la necesidad de utilizar una herramienta conciliadora entre la norma y la realidad que permita el desarrollo programático de los derechos. . Dicha herramienta proviene de la actuación estatal y se denomina política pública,<sup>272</sup> que es el conjunto de acciones que se toman a lo largo del tiempo por parte de las autoridades estatales, orientadas a solucionar un problema o atender una necesidad de la sociedad mandante.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup>Cfr. Paulina Araujo Granda. El Derecho como Ciencia: Manual de Metodología y Técnicas de la Investigación Jurídica. Corporación Nacional de Estudios y Publicaciones. Quito, 2010. Pág.61

<sup>273</sup> Cfr. Kevin Smith and Christopher Larimer. The Public Policy Theory Primer. Colorado, West View Press, 2009. Pág. 4.

Como conjunto, las políticas públicas incluyen un amplio rango de acciones que van desde la identificación de los problemas, hasta la planificación, ejecución y evaluación de los resultados.<sup>274</sup> Para los términos de esta investigación es pertinente revisar las políticas públicas más específicas al tema, entre las cuales se tiene el Plan Nacional del Buen Vivir, la transformación del Ministerio de Justicia y el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

El objetivo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir es:

“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.”<sup>275</sup>

Entre los lineamientos estratégicos considerados para ejecutar la transformación se encuentra:

*a. Proteger los derechos de las personas privadas de libertad, con énfasis en los grupos de atención prioritaria.*

Ahora, como parte de la ya nombrada política de transformación de la Justicia, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se convirtió en la autoridad máxima dentro de la conformación de los miembros del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, a través de la reforma al artículo 4 (Integración del Consejo) del entonces vigente Código de Ejecución de Penas.<sup>276</sup> Consecuentemente, en el año 2010 la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (antiguo órgano rector en la materia) fue absorbida por el Ministerio de Justicia a través de Decreto Ejecutivo 585.<sup>277</sup>

En síntesis, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se convirtió en el órgano rector de la Rehabilitación Social en el país, por lo que se encargó de crear el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

---

<sup>274</sup> Cfr. Kevin Smith and Christopher Larimer. The Public Policy Theory Primer. Colorado, West View Press, 2009. Pág. 5.

<sup>275</sup> Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013. Quito, Ecuador (primera edición). Pág. 199.

<sup>276</sup> Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 393 de 31 de Julio del 2008.

<sup>277</sup> Decreto Ejecutivo 585. Publicado en Registro Oficial Suplemento 348, con fecha 24 de Diciembre de 2010.

El nuevo modelo de Gestión Penitenciaria señala muy acertadamente que las personas con Discapacidad Privadas de la Libertad deben tener atención y tratamiento especializado.<sup>278</sup>

Para ello el modelo reconoce que el personal de los Centros de Rehabilitación Social debe estar capacitado para atender las necesidades de este grupo vulnerable, así como también que los Centros deberán tener todas las especificaciones técnicas.<sup>279</sup>

Sin embargo de lo dispuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir y en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, las políticas contempladas aún no se han ejecutado, tal y como quedó demostrado en los capítulos anteriores a través de la investigación de campo. Esta conclusión sugiere que hace falta un órgano de control que se encargue de fiscalizar la ejecución coordinada de las políticas públicas en cada uno de los Centros de Rehabilitación Social.

## 2.5. Las Penas Alternativas a la Privación de la Libertad, una respuesta a la Rehabilitación Social que no rehabilita.

Se ha comprobado en esta investigación que la Rehabilitación Social funciona como un instrumento de control social que viola sistemáticamente los derechos de las personas con Discapacidad privadas de Libertad.

Si el sistema de Rehabilitación Social concebido en la Constitución tiene como finalidad la rehabilitación integral y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad,<sup>280</sup> no es admisible, y es incluso inconstitucional, que ese mismo sistema se encargue de reproducir la violencia y disminuir la dignidad de las personas con discapacidad. Adicionalmente, existe una omisión del principio de proporcionalidad<sup>281</sup> en la aplicación de las penas cuando el juez condena a una fuerte pena de privación de la libertad a sabiendas de que el sistema de RS no garantiza a una persona con discapacidad la realización de sus derechos y todas sus capacidades.

---

<sup>278</sup> Capítulo 3.1. Comisión de Reforma Penitenciaria. Modelo de Gestión Penitenciaria del Ecuador. Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Quito, 2013. Pág. 45.

<sup>279</sup> *Ibíd.*

<sup>280</sup> Constitución Política de la República del Ecuador. Art. 201

<sup>281</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. *Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal*. Pág. 225.

Siendo este el escenario ¿Cómo debe responder el derecho penal del Estado a los conflictos sociales generados por el delito? Con el garantismo penal.

Un Estado Constitucional, en el que todas las normas están supeditadas a la Constitución y en el que el ejercicio los derechos constitucionales son la base del funcionamiento estatal, demanda el garantismo como modelo del derecho penal en todas sus facetas, es decir, el derecho penal mínimo.<sup>282</sup>

El derecho penal mínimo se manifiesta inter alia a través de la reducción de penas, la desaparición de tipos penales innecesarios que no causan daños reales, la aplicación del principio de legalidad, proporcionalidad y lesividad en la determinación de las penas, la reparación a la víctima, el desarrollo de las capacidades de los condenados y el uso de medidas alternativas a la privación de la libertad.<sup>283</sup>

La mayoría de estas características del garantismo no se evidencian en nuestro sistema penal actual, por ejemplo: con la publicación del Código Orgánico Integral Penal se aumentó la pena por el delito de asesinato, que anteriormente podía ser de entre 12 a 16, a una pena de 19 a 22 años;<sup>284</sup> la acumulación de penas puede llegar hasta los 40 años de privación de la libertad;<sup>285</sup> persiste la existencia de los delitos relacionados a narcotráfico los cuáles no tienen un daño concreto que pueda identificarse,<sup>286</sup> etc.

Ahora, las penas alternativas a privación de la libertad, que consisten en métodos de aplicar castigo por la responsabilidad penal evitando la aplicación innecesaria de la prisión,<sup>287</sup> son parte del movimiento en pro de la despenalización y destipificación de delitos, propio del garantismo penal.<sup>288</sup> Conviene primero analizar cuáles son las alternativas comúnmente

---

<sup>282</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Pág. 225.

<sup>283</sup> Cfr. Ramiro Ávila Santamaría. Óp. Cit. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una Mirada desde el garantismo Penal. Págs. 205-219.

<sup>284</sup> COIP. Art. 171.

<sup>285</sup> COIP. Art. 20.

<sup>286</sup> El bien jurídico que se alega afectado por los delitos relacionados al narcotráfico es la salud pública, irónicamente otras sustancias que también podrían afectar la salud pública (como el tabaco) circulan libremente en la sociedad.

<sup>287</sup> ONU. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas No Privativas de la Libertad. (Reglas de Tokio). Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/110, de 14 de Diciembre de 1990. Principio 2.3.

<sup>288</sup> ONU. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas No Privativas de la Libertad. (Reglas de Tokio). Principio 2.7.

aceptadas en el derecho, para después verificar su procedencia en el sistema jurídico ecuatoriano:<sup>289</sup>

- Sanciones Verbales, como la Amonestación, la Represión y la Advertencia.
- Liberación Condicional.
- Penas Privativas de Derechos o Inhabilitaciones.
- Sanciones Económicas y Penas de Dinero, como Multas y Multas sobre los ingresos calculados por días.
- Incautación o Confiscación.
- Mandamientos de Restitución a la víctima o de Indemnización.
- Suspensión de la Sentencia o Condena Diferida.
- Régimen de Prueba y Vigilancia Judicial.
- Imposición de Servicios a la Comunidad.
- Obligación de acudir regularmente a un centro determinado.
- Arresto domiciliario.
- Cualquier otro régimen que no entrañe internamiento.
- Alguna combinación de las sanciones precedentes.

Para la aplicación de estas medidas alternativas el juez se debe basar en los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos de la condena y los derechos de las víctimas.<sup>290</sup>

Lo fundamental en la aplicación de las medidas alternativas es entender que son justamente eso “una alternativa”, otra posibilidad de pena cuando el juez bien puede aplicar la privación de la libertad en prisión o reclusión. Este es justamente el problema a nivel del derecho penal local, el Código Orgánico Integral Penal permite a los jueces imponer penas no privativas de la libertad “sin perjuicio de la pena (privativa de la libertad) prevista en cada tipo penal”,<sup>291</sup> es decir que la pena no privativa de la libertad puede ser aplicada en conjunto con una pena privativa de la libertad y no como alternativa sino como acumulativa.

---

<sup>289</sup> ONU. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas No Privativas de la Libertad. (Reglas de Tokio). Art.8.2.

<sup>290</sup> ONU. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas No Privativas de la Libertad. (Reglas de Tokio). Principio 3.2.

<sup>291</sup> COIP. Art. 60.

Según el COIP, las penas no privativas de la libertad son las siguientes:<sup>292</sup>

- a) Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia;
- b) Libertad condicional;
- c) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones;
- d) Sanciones económicas y penas en dinero, como multas y multas sobre los ingresos calculadas por días;
- e) Incautación o confiscación;
- f) Mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización;
- g) Suspensión de la sentencia o condena diferida;
- h) Régimen de prueba y vigilancia judicial;
- i) Imposición de servicios a la comunidad;
- j) Obligación de acudir regularmente a un centro determinado;
- k) Arresto domiciliario;
- l) Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión;
- m) alguna combinación de las sanciones precedentes

Se ha dicho que el COIP establece penas alternativas a la privación de la libertad,<sup>293</sup> pero en realidad no son alternativas (porque el juez no puede seleccionar a su juicio, en virtud de ciertas características del imputado, no privar de la libertad) sino que son simplemente penas que corresponden a otros tipos penales que el legislador ha considerado menos destructivos para la sociedad. Es muy positivo que la legislación penal introduzca en su tipificación penas que no sean la privación de la libertad para ciertos delitos o contravenciones (esto es acorde a la corriente del derecho penal mínimo) pero no se debe confundir a estas penas con medidas alternativas.<sup>294</sup>

Ahora, en el COIP si se puede encontrar casos de sustitución de privación de la libertad pero solamente en medidas cautelares, no en cuanto al establecimiento de la condena. A saber, el art. 537 señala:

---

<sup>292</sup> *Ibíd.*

<sup>293</sup> Cfr. Periódico El Comercio. Tareas Comunitarias se aplican en 7 infracciones. Internet: <http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/tareas-comunitarias-aplican-infracciones-codigo.html>  
Acceso: 03/01/2015

<sup>294</sup> Por ejemplo, el maltrato animal está sancionado con cincuenta a cien horas de trabajo comunitario. Cfr. COIP. Art. 249.

“(…) la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos:

(…)3. Cuando la persona procesada presente una (...) una discapacidad (...)”

Es muy acertado que la legislación permita al juez no aplicar la prisión preventiva y optar por una medida alternativa en el caso de que el procesado sea una PCD, puesto que así se garantiza la protección de los derechos que se pueden ver amenazados en los lugares de detención.

En conclusión, la legislación penal actual no permitir que a las personas con discapacidad se les aplique una medida alternativa a la privación de la libertad por prisión o reclusión. Las penas alternativas deben ser aplicadas por el Juez en virtud de que el Estado no puede garantizar a las PCD el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas dentro de los Centros de Rehabilitación Social, y que la pena puede ser considerada como desproporcional y más lesiva.

En la actualidad la única forma en la que el Juez podría aplicar medidas alternativas es a través de la realización de un ejercicio hermenéutico sistemático de los principios garantistas recogidos en la Constitución y el bloque de Constitucionalidad, guiado por el principio *pro homine*. Aunque es una solución polémica, es de igual forma válida gracias al carácter garantista que se supone inspira la Constitución.

### **CAPITULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **CONCLUSIONES**

- El modelo social de tratamiento a las personas con discapacidad y los derechos humanos son las maneras adecuadas de abordar la problemática de las discapacidades, ya que parten de la idea de que este grupo de personas tienen la misma dignidad que el resto de seres humano, y que las barreras físicas, sociales y culturales se pueden superar a través de la igualdad de oportunidades materiales.



- La definición que el marco normativo del Ecuador ha acogido para la discapacidad no reconoce que las barreras sociales son el elemento fundamental que configura la discapacidad, por lo tanto no se acopla al modelo social. La Ley Orgánica sobre Discapacidades debería ser reformada para incluir una definición correcta.
- El Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades es inconstitucional en razón de haber incumplido el principio de no regresividad en el ejercicio de los derechos al exigir 40% de discapacidad para que las personas puedan acceder a sus beneficios. El reglamento debe ser reformado.
- Las personas con discapacidad son imputables del cometimiento de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, a menos que no tengan el suficiente raciocinio para atender la diferencia entre una conducta delictual y no delictual.
- La única forma de poder punitivo que un Estado Constitucional de Derechos y Justicia admite es la del garantismo penal en el que el fin primordial del sistema penal es garantizar y proteger los derechos de todos los sujetos que participan en el proceso, y procurar la maximización de las capacidades de las personas privadas de libertad. Si el derecho penal, en todas sus facetas, no cumple con esta finalidad entonces no es garantista.
- Las personas con discapacidad privadas de libertad viven en una situación de doble vulnerabilidad dentro de las cárceles debido a la relación de sujeción que tienen con la autoridad estatal y a la multiplicación de las barreras físicas, sociales y culturales que configuran la discapacidad.
- El derecho a la igualdad y la no discriminación son el fundamento jurídico del tratamiento preferente y especializado que el Estado debe dar a las personas con discapacidad a fin de que puedan cumplir su condena en igualdad de condiciones con las demás personas.
- El derecho al tratamiento preferente y especializado de las personas con discapacidad no se cumple dentro de los Centros de Rehabilitación Social debido a la falta de atención que sus necesidades especiales reciben.
- El legislación vigente en el Ecuador establece un marco de derechos y garantías para las personas con discapacidad privadas de libertad, entre los cuales se incluyen el derecho a la vida independiente, la rehabilitación médica, la accesibilidad al medio físico y la no discriminación e igualdad, sin embargo estos derechos no se pueden

ejercer a cabalidad debido a que los Centros de Rehabilitación Social no ofrecen las condiciones mínimas necesarias para su ejercicio.

- Existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas con discapacidad privadas de libertad en los Centros de Rehabilitación Social del país. La investigación de campo permitió identificar las siguientes violaciones:
  - En el caso de Christian Andrés García Mendoza se identificaron violaciones al derecho a la integridad personal y vida independiente. Estas violaciones fueron causadas por agresiones físicas de agentes estatales y otras PPL, a la vez que por omisiones en la obligación del Estado de brindar atención especial, tratamiento preferente y especializado a las PCD.
  - En el caso de Abraham Antonio Álvarez Reyes se evidenciaron varias violaciones a la prohibición de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Estas violaciones surgen debido a la omisión estatal de ofrecer condiciones mínimas de existencia dentro de los CRS, al respecto se identificaron situaciones de hacinamiento, pésimas condiciones de salubridad, deficiencias alimenticias y falta de acceso a la salud. Si bien la situación mejoró notablemente una vez que los PPL se trasladaron al CRS Cotopaxi, aún persisten varias violaciones a derechos fundamentales.
  - En el caso de Pedro Nicolás Valero Rivas se detectaron violaciones al derecho a la rehabilitación física e igualdad y no discriminación de las PCD, ocasionadas por la omisión del Estado de permitir a la PCD el acceso a un profesional de la Salud que trabaje para potenciar sus capacidades, y le permita desenvolverse en igualdad de condiciones con los demás en las actividades cotidianas del CRS.
  - En el caso de Wilson Reinaldo Carbo Góngora se demostraron violaciones al derecho a la accesibilidad al medio físico debido a la omisión del Estado de garantizar un escenario sin barreras arquitectónicas, con ayudas técnicas necesarias para permitir que la persona se desenvuelva de forma autónoma en las actividades cotidianas. De igual manera, se verificó la violación del derecho al reconocimiento

de la personalidad jurídica de las PCD ya que el Estado no cumplió con su deber de Registrar a la PPL en el sistema de carnets del CONADIS.

- La exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad tiene tres posibilidades: la justiciabilidad normativa, judicial y política. Mientras que una primera aproximación a la exigibilidad en las normas y el circuito judicial demuestra efectividad en la garantía de los derechos mencionados, la exigibilidad política palidece de ineficiente. Aún si existen las políticas públicas pertinentes las mismas no se han ejecutado en los CRS.
- La aplicación de penas privativas de la libertad a personas con discapacidad, tomando en cuenta las graves violaciones a sus derechos fundamentales en los Centros de Rehabilitación Social, constituye una falta a los principios de proporcionalidad, legalidad estricta y menor lesividad del garantismo penal. Por esta razón, la forma en la que opera el Sistema de Rehabilitación Social en la actualidad no corresponde a la corriente garantista que es propia de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
- El Sistema Penal en el Ecuador requiere una reforma profunda que esté guiada hacia la garantía de los derechos de las personas con discapacidad condenadas a una pena privativa de la libertad, y a la maximización de todas sus capacidades para que puedan vivir de forma independiente en igualdad de condiciones con la demás personas.
- El Sistema Penal ecuatoriano no permite la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad, sino que ofrece un catálogo de medidas no privativas de la libertad que el juez puede utilizar de forma complementaria/acumulativa a la privación de la libertad.

### *RECOMENDACIONES*

- La definición de discapacidad que da la Ley Orgánica de Discapacidades debería ser reformada por la siguiente:

“El término persona con discapacidad incluye a aquellas con un funcionamiento diferente de las estructuras corporales y la psiquis, independientemente de su origen, que al interactuar con las barreras del entorno económico, social y cultural, afectan su plena participación en la vida social e individual de forma autónoma, en igualdad de condiciones con las demás personas”.

- Con la finalidad de lograr la efectividad en la ejecución de las políticas públicas es necesario establecer un órgano fiscalizador del cumplimiento de

las mismas, el cuál debe medir objetivamente el avance en la ejecución de las mismas dentro de cada Centro de Rehabilitación Social.

- La Defensoría Pública debería visitar periódicamente a las Personas con Discapacidad Privadas de Libertad con la finalidad de detectar posibles violaciones a DDHH y exigir que se respeten sus derechos.
- Se debe reformar la legislación penal para incluir medidas alternativas a la privación de la libertad en el caso de que sea juzgada una persona con discapacidad privada de libertad, permitiendo al juez decidir si aplica una medida alternativa luego de haber verificado que es innecesario enviar a los Centros de Rehabilitación Social a dicha persona. Las penas alternativas que se deben incluir deberán variar según la gravedad del delito.
- Para poder aplicar medidas alternativas el juez debe realizar un ejercicio hermenéutico sistemático de los principios garantistas recogidos en la Constitución y el bloque de Constitucionalidad, guiado por el principio pro homine.

## IV. BIBLIOGRAFÍA

### A) DOCTRINA

Albán Gómez, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano: Parte General. Quito, Ediciones Legales, 4ta Edición, 2007.

Álvarez Alcívar, María Fernanda. “La Ejecución de la Pena, un acercamiento desde el Derecho Penal Mínimo.” En Silva Portero, Carolina. Ejecución Penal y Derechos Humanos, una mirada crítica a la privación de la libertad. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008.

Amaya, Álvaro y Rodríguez Javier. El Núcleo duro de los derechos humanos: Práctica Jurídica en Colombia 1991-2004. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2004.

Ávila Santamaría, Ramiro. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una mirada desde el garantismo Penal. Quito. Ediciones Legales EDLE. 2013.

Barnes, Colin. “Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas con discapacidad en la sociedad occidental.” En Barton, Lee. Discapacidad y Sociedad. Madrid, Ediciones Morata, 1998.

Barton, Len. “Sociología y Discapacidad: Algunos temas nuevos.” En Len Barton. Discapacidad y Sociedad. Madrid, Ediciones Morata, 1998.

Bermejo Barrera, José Carlos Los orígenes de la mitología griega. Madrid, Ediciones Akal, 1996.

Bobbio, Norberto. Igualdad y Libertad. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1993.

Carrión, Luis Salazar, Islas Azaïs Héctor, Serret Bravo Estela, Salazar Ugarte Pedro. Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género. México D.F., Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2007.

Cazar Flores, Ramiro. Derechos y Discapacidad: De Las Palabras a los Hechos. Quito, PPL Impresores, 2003.

Comisión Especializada Ocasional Para las Personas con Discapacidad de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Informe Para Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades. Quito, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2012.

- Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Informe de Primer debate del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Quito, Asamblea Nacional del Ecuador, 2013.
- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe del Estado Ecuatoriano sobre la Implementación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo período de sesiones del 19 a 23 de octubre de 2009, Ginebra. CRDP/C/ECU/1.
- Congreso Europeo sobre Vida Independiente. Manifiesto de Tenerife. Tenerife, Primer Congreso Europeo sobre Vida Independiente, 2003.
- Corredores Ledesma, María Belén. “La Pena Privativa de la Libertad y el Sistema Penitenciario, análisis de nuestra realidad.” En Silva Portero, Carolina. Ejecución Penal y Derechos Humanos, una mirada crítica a la privación de la libertad. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008.
- Courtis, Christian. “Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Sistema de Naciones Unidas.” En Rafael Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno. Teoría Sobre la Discapacidad. Navarra, Editorial Arazandi, 2007.
- Courtis, Christian. Ni un paso atrás: La Prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 2006.
- De Asís, Rafael, Bariffi Francisco y Palacios Agustina. “Principios Éticos y Fundamentos Jurídicos.” En Lorenzo, Rafael y Pérez Bueno Luis Cayo. Teoría Sobre la Discapacidad. Navarra, Editorial Arazandi, 2007.
- Delgado de Cantú, Gloria M. El Mundo Moderno y el Mundo Contemporáneo. México D.F., Editorial Pearson Educación de México, Quinta Edición, 2005.
- Eroles Carlos y Fiamberti Hugo. Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buenos Aires, EUDEBA, 2008.
- Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Madrid, Editorial Trotta, 1995.
- Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías: La Ley del más débil. Madrid, Editorial Trotta, Cuarta Edición, 2004.

- Foucault, Michael. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002.
- Iáñez, Antonio. Cuerpo y Modernidad: El proceso de estigmatización en las personas con diversidad funcional física. En Documentación Social (Revista). Identidad y Procesos de Cambio. Madrid, Editorial Caritas Españolas, 2008.
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA). CapacidaDESC para la exigibilidad, Manual de Políticas Públicas y Participación Social. Bogotá, ILSA, 2008.
- Kant, Immanuel. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. (Traducción de Manual García Morente). San Juan, Pedro M. Rosario Barbosa Editor, 2007.
- Kevin Smith and Christopher Larimer. The Public Policy Theory Primer. Colorado, West View Press, 2009.
- Mappelli Caffarena, Borja y Terradillos Basoco Juan. Las Consecuencias Jurídicas del Delito. Madrid, Editorial Civitas, 1994.
- María Cristina Kronfle (Asambleísta de la República del Ecuador). Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Quito, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2014.
- Melish, Tara. La Protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. New Heaven, Center for International Human Rights of the Yale Law School, 2003.
- Míguez, María Noel. Construcción Social de la Discapacidad. Montevideo, Ediciones Trilce, 2009.
- Mousset, Sophie. Women's Rights and the French Revolution: A Biography of Olympe de Gouges. New Jersey, Transaction Publishers, 2011.
- Mousset, Sophie. Olympe de Gouges et les droits de la femme. Paris, Éditions du Félin, 2003.
- Patricia, Valarezo y Sandra Esparza (Vicepresidencia de la República del Ecuador). Guía Técnica de Accesibilidad al Medio Físico. Quito, PROSAR, 2009.
- Paulina Araujo Granda. El Derecho como Ciencia: Manual de Metodología y Técnicas de la Investigación Jurídica. Corporación Nacional de Estudios y Publicaciones. Quito, 2010.

- Pelka, Fred. What We Have Done: An Oral History of the Disability Rights Movement. Amherst, University of Massachusetts Press, 2012.
- Pellegrino Rossi. "Traité de droit pénal". En Foucault, Michel. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión. México D.F., Siglo XXI Editores, 34° Edición, 2005.
- Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, Espasa Libros, 21era Edición, 2001.
- Seminari d'Investigació Feminista (Castelló), Universitat Jaume I. Dossiers Feministes, 2: Diosas y Vírgenes. Castellón, Universitat Jaume I, 1999.
- Silva Portero, Carolina. Ejecución Penal y Derechos Humanos. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008.
- Torres Chávez, Efraín. Breves Comentarios al Código Penal del Ecuador y sus reformas del 2001. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.

## B) JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL:

- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 067-12-SEP-CC. Registro Oficial Suplemento 728 de 20/06/2012.
- Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. Párr. 188.
- Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.
- Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de Septiembre de 1997. Serie C No. 33.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C, No. 126. Párr. 54-57.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C, No. 98.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones, y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 152.



Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009, Serie C, No. 202. Párr. 62.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C, No. 147.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C, No.140.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C, No.205.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de Agosto de 2008, Serie C, No. 186.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C, No. 150. Párr. 85 y 87.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, No. 133.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C, No. 114.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C, No. 192.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ver Vera Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, Serie C, No. 226. Párr. 42; Ver también Principio I.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C, No. 149.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.

European Court of Human Rights. Case of Price v. The United Kingdom. 10 July 2001. Application No. 5493/72.

### C) RESOLUCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Víctor Rosario Congo contra Ecuador. Informe N° 63/99, Caso 11.427.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual del año 1993. OEA/Ser. L/V/II.85.

Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación General 5, Personas con discapacidad. Aprobado en su 11vo período de sesiones, 1994. U.N. Doc. E/C.12/1994/13 (1994).

Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N°3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (Artículo 11[2]). Emitida en su 5to período de sesiones, 1990.

Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 21, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 10. - Trato humano de las personas privadas de libertad. 44° período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 176 (1992).

Organización de las Naciones Unidas. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Caso X v. Argentina. Comunicación No. 8/2012. CRPD/C/11/D/8/2012, 11 de Abril de 2014.

Organización de las Naciones Unidas. Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 37mo período de sesiones, por resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982.

United Nations. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. H.M. v. Sweden. Communication No. 3/2011. CRPD/C/7/D/3/2011, April 19th of 2012.

United Nations. Human Rights Council. Final Report of the Special Rapporteur (Leandro Despouy) of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities about Human Rights and Disabled Persons. E/CN.4/Sub.2/1991/31.

## D) TRATADOS INTERNACIONALES:

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
- Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
- Organización de las Naciones Unidas. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas No Privativas de la Libertad. (Reglas de Tokio). Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/110, de 14 de Diciembre de 1990.
- Organización de las Naciones Unidas. Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006.
- Organización de las Naciones Unidas. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de Diciembre de 1971. UN. DOC AG.26/2856.
- Organización de las Naciones Unidas. Declaración de los Derechos de los Impedidos. Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975.
- Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. U.N. Doc. A/810 at 71 (1948).
- Organización de las Naciones Unidas. Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
- Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 6 de junio del año 1999, en la ciudad de Antigua.

## E) LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS:

Código Orgánico Integral Penal. Publicado en Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de Febrero de 2014.

Consejo Nacional de Discapacidades. II Plan Nacional de Discapacidades. Quito, Consejo Nacional de Discapacidades, 2005.

Constitución Política de la República del Ecuador, 2008.

Ley Orgánica de Discapacidades. Publicada en Registro Oficial Número 796 del 25 de Septiembre de 2012. Según su única Disposición final entró en vigencia la misma fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Ley Reformatoria a la Ley Sobre Discapacidades. Publicada en Registro Oficial Número 301, de 6 de Abril de 2001.

Ley Sobre Discapacidades N° 180. Publicada en Registro Oficial Número 996 del 10 de agosto 1992.

Reglamento a Ley Orgánica de Discapacidades. Publicado en el Segundo Suplemento de Registro Oficial N° 145 de martes 17 de Diciembre de 2013.

Reglamento General a la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades. Publicado en Registro Oficial N° 27, de 21 de Febrero de 2003.

Reglamento General a la Ley Sobre Discapacidades. Publicado en registro Oficial N° 27 del 21 de Febrero de 2003.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Quito, SENPLADES, 2013

## F) DECISIONES JUDICIALES NACIONALES

Juzgado Primero del Trabajo de Pichincha. Sentencia de 10 de Abril de 2014.

Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Sentencia de 11 de Junio de 2014.

Tribunal Décimo Cuarto de Garantías Penales de Milagro. Sentencia de 01 de Agosto de 2013. No. Causa 09914-2013-0224.

## G) DECISIONES JUDICIALES DE DERECHO COMPARADO

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881 de 2002.

## H) LEGISLACIÓN COMPARADA:

Ley General Para Personas con Discapacidad (Bolivia). Publicada en Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición 350NEC, del 2 de Marzo del 2012.

## I) PÁGINAS WEB:

Alfonso Naranjo, Belén. Barreras Arquitectónicas y Discapacidad. Internet: <http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7197.pdf> Acceso: 22/09/2013

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Derechos de las personas privadas de la libertad en centro de reclusión. Internet: <http://www.cd hdf.org.mx/index.php?id=dfejul08delibertad> Acceso: 30/11/2013

Cordero Heredia, David. Las Obligaciones Internacionales de los Estados respecto a las Personas privadas de su libertad. En Internet: [www.inredh.org](http://www.inredh.org) Acceso: 09/10/2013.

Diario Correo. Matilde Hidalgo de Procel: Un Legado en la Provincia de El Oro. Internet: <http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=26119> Acceso: 14/08/2013

Diario Público PP El Verdadero. Presos Sin Sentencia bajaron del 64% al 35%. Internet: <http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/presos-sin-sentencia-bajaron-del-64-al-35.html> Acceso: 11/11/2014

Dinerstein, Robert D.. The Americans with Disabilities Act of 1990: Progeny of the Civil Rights Act of 1964. En Internet: [http://www.americanbar.org/publications/human\\_rights\\_magazine\\_home/human\\_rights\\_vol31\\_2004/summer2004/irr\\_hr\\_summer04\\_disable.html](http://www.americanbar.org/publications/human_rights_magazine_home/human_rights_vol31_2004/summer2004/irr_hr_summer04_disable.html) Acceso: 14/08/2014

Federación Nacional de y para la Discapacidad del Ecuador. Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades. Internet: <http://www.discapacidadesecuador.org/portal/images/stories/File/Ley%20organicadediscapacidad.pdf> Acceso: 09/03/2014

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. Clasificación de Tipo de Discapacidad. Internet: [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx) Acceso: 21/06/2013.

Luna, Alfredo. Discapacidad, la polémica por el nuevo Reglamento. Internet: <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/discapacitados-la-polemica-el-nuevo-reglamento> Acceso: 12/22/2014.

Mendoza, Bernanrdo. El Sufragismo. Internet:

<http://www.iesmartilhuma.org/departaments/CSocials/Santi/PortalHistoria/BLOC2/Apunts/el%20sufragismo.pdf> Acceso: 18/07/2013.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. PPL llegaron al CRS Regional Cotopaxi.

Internet: <http://www.justicia.gob.ec/1-618-privados-de-libertad-llegaron-al-crs-regional-cotopaxi/>  
Acceso: 18/05/2013.

Ministerio de Salud. Actualización de Datos de las Personas con Discapacidad. Internet:

<http://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-datos-de-personas-con-discapacidad-se-amplia-hasta-el-30-de-julio/> Acceso: 12/03/2014.

Organización de Familiares de Personas Privadas de la Libertad. Informe: Precarias Condiciones de Vida en las que se hallan las personas Personas Privadas de la Libertad en el Centro

Regional Cotopaxi. Internet: <http://elmartirionorehabilita.blogspot.com/2014/04/precarias-condiciones-de-vida-en-las.html> Acceso: 05/06/2014

Organización de las Naciones Unidas. Historia de la discapacidad y las Naciones Unidas. Internet:

<http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/dis50y50.htm> Acceso: 25/08/2012

Periódico El Comercio. Tareas Comunitarias se aplican en 7 infracciones. Internet:

<http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/tareas-comunitarias-aplican-infracciones-codigo.html> Acceso: 03/01/2015

Real Academia de la Lengua Española. Congénito. Internet:

<http://lema.rae.es/drae/?val=cong%C3%A9nito> Acceso: 12/08/2014

Real Academia de la Lengua Española. Minusvalía. Internet:

<http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=minusval%EDas> Acceso: 12/08/2014

## **V. ANEXOS**

# **ANEXO I**

# **AUDIOVISUAL**

-Entrevista video grabada a Antonio Álvarez Reyes.

-Entrevista a Melissa Paredes Castrillón. (DOC)

-Entrevista a María Folledo. (DOC)

-Censo de Personas con Discapacidad Privadas de Libertad. (PDF)

-Diario de las visitas a Centros de Rehabilitación Social. (DOC)



# **ANEXO II**

- Formularios de Consentimiento Informado firmados por los entrevistados.

## **Formulario Consentimiento Informado**

**Título de la investigación:** "Tratamiento Preferente y Especializado para las Personas con Discapacidad en la Ejecución de Penas Privativas de la Libertad, un mandato Constitucional"

**Fecha:**

**Organización del investigador:** Pontificia Universidad Católica del Ecuador

**Nombre del Investigador Principal:** Jorge Vinicio Fernández Yépez

**Datos de contacto del investigador principal:** [jorge.fy91@gmail.com](mailto:jorge.fy91@gmail.com)

### **1. Introducción**

Usted ha sido seleccionado para formar parte de la presente investigación ya que cumple con todos los criterios de inclusión que el estudio necesita (ser una persona con discapacidad privada de la libertad en un Centro de Rehabilitación Social); su participación es completamente voluntaria, siéntase libre de realizar cualquier pregunta o solucionar cualquier inquietud.

### **2. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación?**

Esta investigación académica tiene por objeto demostrar los avances que el Estado ecuatoriano ha realizado en cuanto al ejercicio efectivo del derecho al tratamiento preferente y especializado de las personas con Discapacidad en los Centros de Rehabilitación Social establecido en el art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador, y los derechos que de éste se derivan.

### **3. ¿Cuál es la metodología que se utilizará en este estudio?**

Para cumplir con el objeto de esta investigación se realizarán entrevistas a personas con discapacidad privadas de libertad, en las que se les pedirá que relaten sus historias de vida en los centros de rehabilitación social y las formas en las que su condición como personas con discapacidad ha afectado su cotidianeidad.

### **4. ¿Cuáles son mis derechos como participante de esta entrevista?**

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, por ende, usted puede decidir NO participar. Si usted decide participar, puede de todas formas decidir retirarse de la entrevista en cualquier momento.

### **5. ¿Existe alguna afectación por participar en este estudio?**

No existe ningún riesgo para usted como participante de estas entrevistas. La información que usted proporcione solamente será utilizada en el desarrollo de esta investigación académica y no implicará que las autoridades Estatales o cualquier otra persona puedan tomar represalias en su contra.



**6. ¿Mi información personal y la que proporcione en estas entrevistas serán publicadas en un medio de difusión masiva como radio, televisión o prensa?**

No, la información que usted proporcione será solamente utilizada en la academia y no se hará pública a través de un medio de difusión masiva. Si usted lo desea, su nombre puede ser reservado como confidencial.

**7. . El consentimiento Informado:**

Yo Christen Andes Garza Mendoza con  
cédula/pasaporte N°: 0981235291 Acepto  
voluntariamente ser entrevistado como parte de este estudio de investigación, luego  
de haber tenido el tiempo suficiente para comprender la información que sobre el  
mismo se me ha proporcionado.

Todas mis preguntas como participante fueron contestadas. Me han entregado una  
copia de este formulario de consentimiento informado.

Si existen participantes que no tienen el nivel suficiente de comprensión lectora  
como para entender el presente documento, el investigador (Jorge Vinicio  
Fernández Yépez), se lo leerá y se contará con un testigo que corrobore y firme;  
constatando que lo que el investigador lee al participante, es lo que dice  
efectivamente el documento.

Firma del participante:  \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2014

Nombre del investigador que obtiene el consentimiento: \_\_\_\_\_

Firma del investigador: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2014

Nombre y CI del Testigo (Caso de participantes que no tienen el nivel suficiente de  
comprensión lectora): \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



## **Formulario Consentimiento Informado**

**Título de la investigación:** "Tratamiento Preferente y Especializado para las Personas con Discapacidad en la Ejecución de Penas Privativas de la Libertad, un mandato Constitucional"

**Fecha:**

**Organización del investigador:** Pontificia Universidad Católica del Ecuador

**Nombre del Investigador Principal:** Jorge Vinicio Fernández Yépez

**Datos de contacto del investigador principal:** [jorge.fy91@gmail.com](mailto:jorge.fy91@gmail.com)

### **1. Introducción**

Usted ha sido seleccionado para formar parte de la presente investigación ya que cumple con todos los criterios de inclusión que el estudio necesita (ser una persona con discapacidad privada de la libertad en un Centro de Rehabilitación Social); su participación es completamente voluntaria, siéntase libre de realizar cualquier pregunta o solucionar cualquier inquietud.

### **2. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación?**

Esta investigación académica tiene por objeto demostrar los avances que el Estado ecuatoriano ha realizado en cuanto al ejercicio efectivo del derecho al tratamiento preferente y especializado de las personas con Discapacidad en los Centros de Rehabilitación Social establecido en el art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador, y los derechos que de éste se derivan.

### **3. ¿Cuál es la metodología que se utilizará en este estudio?**

Para cumplir con el objeto de esta investigación se realizarán entrevistas a personas con discapacidad privadas de libertad, en las que se les pedirá que relaten sus historias de vida en los centros de rehabilitación social y las formas en las que su condición como personas con discapacidad ha afectado su cotidianeidad.

### **4. ¿Cuáles son mis derechos como participante de esta entrevista?**

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, por ende, usted puede decidir NO participar. Si usted decide participar, puede de todas formas decidir retirarse de la entrevista en cualquier momento.

### **5. ¿Existe alguna afectación por participar en este estudio?**

No existe ningún riesgo para usted como participante de estas entrevistas. La información que usted proporcione solamente será utilizada en el desarrollo de esta investigación académica y no implicará que las autoridades Estatales o cualquier otra persona puedan tomar represalias en su contra.



**6. ¿Mi información personal y la que proporcione en estas entrevistas serán publicadas en un medio de difusión masiva como radio, televisión o prensa?**

No, la información que usted proporcione será solamente utilizada en la academia y no se hará pública a través de un medio de difusión masiva. Si usted lo desea, su nombre puede ser reservado como confidencial.

**7. . El consentimiento Informado:**

Yo Pedro Valero con  
cédula/pasaporte N°: 420353685-7 Acepto  
voluntariamente ser entrevistado como parte de este estudio de investigación, luego  
de haber tenido el tiempo suficiente para comprender la información que sobre el  
mismo se me ha proporcionado.

Todas mis preguntas como participante fueron contestadas. Me han entregado una  
copia de este formulario de consentimiento informado.

Si existen participantes que no tienen el nivel suficiente de comprensión lectora  
como para entender el presente documento, el investigador (Jorge Vinicio  
Fernández Yépez), se lo leerá y se contará con un testigo que corrobore y firme;  
constatando que lo que el investigador lee al participante, es lo que dice  
efectivamente el documento.

Firma del participante: Pedro Valero  
Fecha: 29/12/2014

Nombre del investigador que obtiene el consentimiento: Jorge Fernandez

Firma del investigador: \_\_\_\_\_  
Fecha: 29/12/2014

Nombre y CI del Testigo (Caso de participantes que no tienen el nivel suficiente de  
comprensión lectora): \_\_\_\_\_

Firma: 29/12/2014  
Fecha: \_\_\_\_\_



## **Formulario Consentimiento Informado**

**Título de la investigación:** "Tratamiento Preferente y Especializado para las Personas con Discapacidad en la Ejecución de Penas Privativas de la Libertad, un mandato Constitucional"

**Fecha:**

**Organización del investigador:** Pontificia Universidad Católica del Ecuador

**Nombre del Investigador Principal:** Jorge Vinicio Fernández Yépez

**Datos de contacto del investigador principal:** [jorge.fy91@gmail.com](mailto:jorge.fy91@gmail.com)

### **1. Introducción**

Usted ha sido seleccionado para formar parte de la presente investigación ya que cumple con todos los criterios de inclusión que el estudio necesita (ser una persona con discapacidad privada de la libertad en un Centro de Rehabilitación Social); su participación es completamente voluntaria, siéntase libre de realizar cualquier pregunta o solucionar cualquier inquietud.

### **2. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación?**

Esta investigación académica tiene por objeto demostrar los avances que el Estado ecuatoriano ha realizado en cuanto al ejercicio efectivo del derecho al tratamiento preferente y especializado de las personas con Discapacidad en los Centros de Rehabilitación Social establecido en el art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador, y los derechos que de éste se derivan.

### **3. ¿Cuál es la metodología que se utilizará en este estudio?**

Para cumplir con el objeto de esta investigación se realizarán entrevistas a personas con discapacidad privadas de libertad, en las que se les pedirá que relaten sus historias de vida en los centros de rehabilitación social y las formas en las que su condición como personas con discapacidad ha afectado su cotidianeidad.

### **4. ¿Cuáles son mis derechos como participante de esta entrevista?**

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, por ende, usted puede decidir NO participar. Si usted decide participar, puede de todas formas decidir retirarse de la entrevista en cualquier momento.

### **5. ¿Existe alguna afectación por participar en este estudio?**

No existe ningún riesgo para usted como participante de estas entrevistas. La información que usted proporcione solamente será utilizada en el desarrollo de esta investigación académica y no implicará que las autoridades Estatales o cualquier otra persona puedan tomar represalias en su contra.



**6. ¿Mi información personal y la que proporcione en estas entrevistas serán publicadas en un medio de difusión masiva como radio, televisión o prensa?**

No, la información que usted proporcione será solamente utilizada en la academia y no se hará pública a través de un medio de difusión masiva. Si usted lo desea, su nombre puede ser reservado como confidencial.

**7. . El consentimiento Informado:**

Yo Wilson Reinaldo Cerbo Bonilla con  
cédula/pasaporte N°: 0913 51 09 22 Acepto  
voluntariamente ser entrevistado como parte de este estudio de investigación, luego  
de haber tenido el tiempo suficiente para comprender la información que sobre el  
mismo se me ha proporcionado.

Todas mis preguntas como participante fueron contestadas. Me han entregado una  
copia de este formulario de consentimiento informado.

Si existen participantes que no tienen el nivel suficiente de comprensión lectora  
como para entender el presente documento, el investigador (Jorge Vinicio  
Fernández Yépez), se lo leerá y se contará con un testigo que corrobore y firme;  
constatando que lo que el investigador lee al participante, es lo que dice  
efectivamente el documento.

Firma del participante: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2014

Nombre del investigador que obtiene el consentimiento: \_\_\_\_\_

Firma del investigador: 29/12/2014

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y CI del Testigo (Caso de participantes que no tienen el nivel suficiente de  
comprensión lectora): \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2014

# ANEXO III

-Solicitudes de acceso al CRS dirigidas al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cutos.

-Respuesta a las Solicitudes.



Quito, 22 de Agosto de 2013

Licenciado

Gustavo Peñafiel

DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL N°1

Presente.-

Me dirijo a usted, muy comedidamente, a fin de solicitar que se sirva otorgarme una entrevista con la finalidad de realizar cuestionamientos relativos a mi proyecto de investigación titulado: "Tratamiento preferente y especializado de las personas con discapacidad privadas de libertad", el cual me permitirá obtener el título de abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

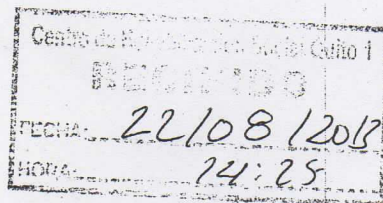
La entrevista tendrá únicamente fines investigativos, y versará principalmente sobre la situación de las personas con discapacidad que cumplen penas privativas de la libertad en el Centro que usted dirige.

También, le solicito me permita realizar una entrevista a cualquier privado de la libertad con discapacidad bajo su cargo.

Agradezco mucho la atención que se sirva dar a la presente, y le pido me indique la fecha y hora en la que esta entrevista podría ser realizada.

Atentamente,

  
Jorge Fernández



### ACTA DE COMPROMISO

Quito, 21 de Agosto de 2013

Yo, JORGE VINICIO FERNÁNDEZ YÉPEZ, con cédula de ciudadanía número 1719469114, me comprometo a utilizar la información entregada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, sobre el proyecto relativo a las Personas con Discapacidad privadas de Libertad, exclusivamente para fines investigativos, con el objetivo de analizar dicha información en mi tesis de grado para el título de abogado por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.

Ratifico mi compromiso,



JORGE VINICIO FERNÁNDEZ YÉPEZ

Quito, 06 de Noviembre de 2014

Señora

Vanessa Rovayo

VICEMINISTRA DE ATENCIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Presente.-

De mis Consideraciones:

Me dirijo a usted, muy comedidamente, con la finalidad de solicitar se sirva otorgarme permiso para ingresar al Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas para realizar entrevistas a personas privadas de la libertad con discapacidad, dentro del marco de investigación de mi tesis de grado titulada: "Tratamiento Preferente y Especializado de las personas con discapacidad privadas de libertad, un mandato constitucional".

Agradezco la atención que se sirva dar a la presente,

Atentamente,



Jorge Fernández

1719463114





# Pontificia Universidad Católica del Ecuador

## FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DECANATO

Quito, 19 de Noviembre de 2014

Doctora  
Vanessa Rovayo  
VICEMINISTRA DE ATENCIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD  
Presente.

De mis consideraciones:

El señor Jorge Vinicio Fernández Yépez, portador de la cédula de ciudadanía número 1719469114, estudiante regular de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha solicitado a la Subsecretaría de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, permiso para ingresar al Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, con el propósito de realizar entrevistas a Personas Privadas de la Libertad con Discapacidad.

Las entrevistas se realizarán como parte de la investigación de tesis de grado titulada "Tratamiento Preferente y Especializado para las Personas con Discapacidad en la Ejecución de Penas Privativas de las Libertad", que lo está elaborando bajo la dirección del Doctor Ramiro Ávila.

La información que se obtenga de esta investigación será utilizada exclusivamente para fines académicos, y no será publicada en ningún medio de comunicación masivo como radio, televisión, prensa digital o escrita.

El estudiante se compromete a utilizar adecuadamente los resultados de cada entrevista, respetando la naturaleza académica de una investigación universitaria y la confidencialidad de las personas entrevistadas en el caso de que así lo soliciten.

Atentamente,

SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO  
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR





**Memorando Nro. MJDHC-SRSRMCPA-DTPVPA-2014-1712-M**

**Quito, D.M., 20 de diciembre de 2014**

**PARA:** Srta. Abg. Maria Jose Murillo Lopez  
**Directora del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, Encargada**

**ASUNTO:** Autorización de ingreso al señor Jorge Vinicio Fernández Yépez

En atención al oficio s/n de 6 de noviembre de 2014 suscrito por el señor Jorge Vinicio Fernández Yépez, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien solicita autorización de ingreso al Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, con el propósito de realizar entrevistas a las personas privadas de libertad que tienen discapacidad, a fin de elaborar su tesis, previa a la obtención de su título universitario.

*Al respecto, me permito informar que se ha revisado el instrumento a utilizarse, mismo que no atenta a los intereses institucionales, en tal virtud se autoriza el ingreso del mencionado estudiante, para que cumpla con su propósito académico.*

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Dra. Janethcia Del Rocío Jativa Morillo**

**DIRECTORA DE TRATAMIENTO Y PLAN DE VIDA PARA ADULTOS**

Anexos:

- PETICION SR. JORGE FERNANDEZ.pdf





Oficio Nro. MJDHC-CPLZ8-D-2014-09248  
Guayaquil, diciembre 29 del 2014

**Asunto: contestación a ingreso**

Señor Tnte. Cnel.  
Luis Patricio Pozo Enríquez  
**JEFE DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA PENITENCIARIA**  
Presente.-


De mi consideración:

Por medio del presente, me permito dar contestación al Oficio 4067-UCP-Z8, relacionado a la autorización de ingreso del señor **JORGE VINICIO FERNÁNDEZ YÉPEZ**, a este Centro de Privación, remitiendo los datos solicitados.

C.I. 1719469114  
Día : 29 de diciembre del 2014  
Hora: 13h30 hasta las 17h30  
Implementos: un cuaderno, una pluma, una carpeta un IPod

Seguro de contar con su colaboración, me suscribo de usted, con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

  
Abg. Manfred Rosales Ramírez  
**DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD ZONAL 8 REGIONAL GUAYAS**  
**(ENCARGADO)**



Elaborado por: Rocío Guevara  
C.c.: Archivo



**UNIDAD DE CONTINGENCIA  
PENITENCIARIA Z - 08**

PREVIAS LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN  
DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8, ESTE  
DESPACHO EMITE LA SIGUIENTE:

**AUTORIZACIÓN**

Fecha:

Ingreso / Salida  
FILTROS

JEFE DE LA UCP Z8

29 DIC 2014  
1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒

**FACL**

Causa:

Sentencia:

## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Jorge Vinicio Fernández Yépez, C.C. 1719469114, autor del trabajo de graduación intitulado: "Tratamiento preferente y especializado para las Personas con Discapacidad en la Ejecución de Penas Privativas de la Libertad, un Mandato Constitucional", previa a la obtención del grado académico de ABOGADO en la Facultad de JURISPRUDENCIA:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 04 de Abril de 2014



C.C. 1719469114




## **DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN**

Yo, Jorge Vinicio Fernández Yépez, C.C. 1719469114, autor del trabajo de graduación intitulado: "Tratamiento preferente y especializado para las Personas con Discapacidad en la Ejecución de Penas Privativas de la Libertad, un Mandato Constitucional", previa a la obtención del grado académico de **ABOGADO** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 22 de Abril de 2015



C.C. 1719469114




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171946911-4  
**FERNANDEZ YEPEZ JORGE VINICIO**  
 PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA  
 03 MAYO 1991  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 REG. CIVIL 002- 0010 00824 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1991  
  
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3344V2222  
 NACIONALIDAD IND. DACT.  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 YURI VINICIO FERNANDEZ DE LA T  
 ELVIA PATRICIA YEPEZ GUERRERO  
 RUMINAHUI 09/06/2009  
 09/06/2021  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMANo. **REN 1280314**  
  
  
 PULGAR DERECHO